

las diligencias practicadas y sentencias que se pronunciaron en 1ª y 2ª instancia: lo pedido ante esta primera sala por el ciudadano procurador general de la nación, la defensa escrita hecha ante la misma sala por el Lic. Manuel Prieto, como defensor de oficio de Matoso, y todo lo demás que ver convino.

Considerando: que el delito está plenamente comprobado por la declaración del acusado, administrada por las declaraciones de los dos peritos nombrados para el reconocimiento de las rúbricas falsificadas y por la de otros testigos: que en el delito de que se trata, han concurrido las circunstancias agravantes de que el reo pretendió hacer culpable al C. Manuel Payne, empleado en la tesorería general, y de haberse pretendido defraudar al tesoro público: que Matoso para efectuar el fraude que pretendió cometer puso, de su parte, toda la diligencia necesaria; que por otra parte obran en favor del mismo reo, las circunstancias atenuantes de largos y buenos servicios prestados á la nación, la miseria á que se halla reducido, su numerosa familia, su falta de salud proveniente de los mismos servicios, la corta cantidad que pretendió defraudar, y que el fraude no llegó á verificarse; usando del arbitrio que concede la ley 8ª título 31 partida 7ª, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada en nueve de Diciembre de 1871 por el juzgado segundo de Distrito de esta ciudad, que condena á D. José Lopez Matoso á un año de prisión contado desde la fecha del auto motivado.

Devuelvanse las actuaciones de primera y de segunda instancia al tribunal de Circuito de México, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: hágase saber y archívese á su vez el fisco.

Así lo mandaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la primera sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos

nos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada*.—Una rúbrica.—*Pedro Ogazon*.—Una rúbrica.—*J. M. Lafregua*.—Una rúbrica.—*Ignacio Ramirez*.—Una rúbrica.—*M. Anza*.—Una rúbrica.—*Luis Mª Aguilar*, secretario.—Una rúbrica.

Son copias que certifico. México, Abril treinta de mil ochocientos setenta y dos.—*Alvaro Gomez Figueroa*, oficial segundo y archivero.

CONTRABANDO.

Juicio seguido en el juzgado de Distrito de Zacatecas, contra los Sres. Carlos Ostermayer, Ramon C. Ortiz y Antero Perez, por la introduccion fraudulenta de 295 tercios de ropa, procedentes de la frontera del Norte.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL DE DISTRITO.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal, en el juicio de comiso que promovió contra la internacion fraudulenta y clandestina de 295 tercios de ropa, que el carrero Antero Perez introdujo á esta ciudad el 19 de Mayo próximo pasado, en ocho carros, con guías números 124, 126, 129 y 129 bis de la Jefatura de Hacienda de Coahuila, remitidos con facturas de D. Juan C. O'Sullivan del Saltillo, á la consignacion de los Sres. Ostermayer y Cª, y D. Ramon C. Ortiz, de esta ciudad, pero realmente procedentes de Mier, alegando para definitiva, ante vd. como mejor proceda, dice: que los fundamentos de su demanda de 23 de Mayo, que ha dado motivo á dicho juicio, están plenamente probados con la justificacion producida, y patentizan la justicia con que el suscrito ha pedido para los efectos y tren de carros aprehendidos, la aplicacion de los artículos 23 y 25 de la pauta de comisos de 28 de Diciembre de 1813, fraccion 1ª 3ª y 4ª

art. 26 y 4º art. 27 de la ley de 31 de Enero de 1856 y 65 de la de 31 de Mayo de 1870, segun pasa con brevedad á demostrar.

En 12 de Mayo, y por telégrafo, avisó el comandante del Contra-resguardo de la frontera del Norte á la gefatura de hacienda del Estado, que del Saltillo le denunciaban un contrabando de mercancías, procedentes de Mier, que conducía para esta ciudad un tal Perez en ocho carros, salidos de Saltillo el dia 9: y libradas desde luego las órdenes judiciales y administrativas para la aprehension del contrabando, el 19 del mismo se presentó el carrero Antero Perez á la Aduana de esta ciudad, con 295 tercios de efectos, cubiertos con las guías números 124, 126, 129 y 129 bis de la gefatura de hacienda de Coahuila, remision de Juan O. O'Sullivan á Ostermayer y Cº, y Ramon C. Ortiz.

Aprehendida y almacenada la carga, y depositado el tren conductor; detenidos é incomunicados los carreros por vía de inquisición, conforme con la prevencion 9ª de la R. cédula de 17 de Setiembre de 1760, entretanto se hacia la averiguacion, de si se habian ó no empleado por su parté en el contrabando y fraude denunciado, y puesta la demanda de comiso por el que suscribe, los Sres. Ostermayer y Cº D. Ramon C. Ortiz y D. Antero Perez, se limitaron á negar los hechos de la demanda, sin hacerse responsables de ellos, en caso de ser ciertos; y á sostener que, habiendo venido la carga con guías legales del Saltillo, debían ser absueltos en el juicio intentado por contrabando y fraude, supuesto que siendo la carga remitida de una á otra aduana interiores, las guías que la cubren están de conformidad con las prescripciones de lo pauta respecto de los documentos con que deben caminar los efectos por el interior de la República.

Esto expuesto, y á reserva de demostrar despues subsidiariamente, que hay lugar al comiso tambien por la desconformi-

dad entre los efectos y las guías del Saltillo, se vé de las respuestas de los que aparecen responsables, que cluden la cuestion bajo el único aspecto en que la ha considerado el que suscribe, de contrabando y fraude en la internacion de los 295 tercios de ropa introducidos á esta ciudad, como procedentes del Saltillo, y en realidad internados de Mier, sin las guías y documentos respectivos de la aduana fronteriza, y sin los que previene la ley de 31 de Mayo de 1870.

Efectivamente; es un hecho probado plenamente en autos, que de los 295 tercios de ropa en cuestion, fueron cargados en el tren de Perez, 150 tercios de las cuatro de la tarde á las nueve de la noche del dia 2 de Mayo, junto al Campo Santo de Mier, de donde el dia 3 se condujeron para el Saltillo por el camino de Marín y de Carvajal, evitando á Cerralvo, haciendo las jornadas de dia y de noche, y solo descansando un rato á medio dia, hasta llegar á la altura del Saltillo, en la fábrica del "Labrador," media legua distante y fuera de garitas, donde se detuvo el tren uno ó dos dias, entre tanto el carrero pasaba á la ciudad. (Testimonio de las declaraciones rendidas por Perez, Catarino Morales, Lina Araujo, Dionisio Corrales y Melchor Ramos de fojas á respuestas de Perez á las posiciones 3ª y 4ª de las que le ariculó el ministerio público en 25 de Mayo).

De la misma manera, está probado plenamente, que el resto de tercios hasta el núm. de 295 introducidos á esta ciudad, salieron de Mier en ocho carretones con el tren de Perez, llegando hasta la referida fábrica del "Labrador," donde trasbordaron los tercios que conducian á los carros de Perez, volviéndose camino de Mier. (Declaraciones de los testigos citados, y de Juan Gomez, Mauricio Zamarripa, Gerónimo Zapata y Juan Hernandez y respuestas de Perez á las posiciones 2ª 3ª 4ª y 5ª).

Y finalmente, están probados los hechos, de no haberse revisado la carga procedente

y una copia de la factura que cubria dicha guía, remitiendo C. Castro á J. C. O'Sullivan, 25 tercios Madapolam al Saltillo, Durango y Chihuahua con la nota de la seccion de 3 de dicho mes de estar revisada y continuar á su destino. Así pues; si Antero Perez sacó de Mier 150 tercios de ropa de la casa de Bustamante y compañía, expresando la guía de Mier núm. 76 de 1º de Mayo, que el remitente es C. Castro y solo de 25 bultos de Madapolam, no es esta guía la que debió cubrir la carga internada y conducida en el tren de Perez.

Por otra parte: según informe de la gefatura de hacienda de Coahuila al comandante del contra resguardo, las guías que O'Sullivan, dijo en su pedimento á dicha oficina, eran procedencia de la carga que remitía á esta ciudad el 9 de Mayo, las guías números 21 de Monterey y Laredo, las 29, 47 y 87 de Mier: mas esta procedencia es falsa, porque ni son los mismos los remitentes de la carga traída de Mier por Perez, y los que expresan las guías citadas, ni tampoco los conductores, así como ni los efectos: y mucho menos puede decirse que de Mier al Saltillo se internó la carga con alguna de las guías expedidas por la Aduana de Mier, del 1º al 4 de Mayo, bajo los números del 77 al 88 por idénticas razones y diferencias á las expresadas, respecto de las números 21, 29, 47 y 87.

Ademas, á la falta de facturas de la casa que se dice remitente de la frontera; á la de guías de la aduana fronteriza para cubrir esta remision en el tránsito hasta su destino, robustecida con la falta de constancias en las secciones del contra resguardo principal de Monterey y 4ª de Cerralvo, se agregan, las negativas terminantes de D. Juan C. O'Sullivan, hechas ante el juzgado de Distrito de Coahuila en 15 y 24 de Junio, de ser el consignatario de la carga internada de Mier, y de que en sus libros, que al cumplirse el año de la negociacion que gira, ha remitido á Liverpool, obrara alguna factura de las á que se refe-

ria el exhorto librado, para que se le exigiera la exhibicion de sus libros, presentando solo la nota que le entregó M. Mayer Levy, con encargo de pedir guías á la gefatura de hacienda, para remitir á esta ciudad, con el conductor Antero Perez, efectos por valor de ps. 60,286 66 cs. á Ostermayer y compañía, y por el de ps. 10,558 22 cs. á D. Ramon C. Ortiz, por orden y cuenta de Mayer M. Levy de Mier, que acaba de robustecer la prueba de la clandestinidad y fraude de la internacion que motiva este juicio. Y esta manifestacion del O'Sullivan, corrobora mas y mas la prueba ya existente, por cuanto que, unida á la de M. Bustamante, dá por resultado que la carga que salió de Mier conducida por Perez, y los ocho carretones, no tuvo ni remitente en Mier ni consignatario en el Saltillo; y por lo mismo, la procedencia que se manifestó á la gefatura de hacienda de Coahuila, de las guías núm. 21, 29, 47 y 87, es falsa y fraudulenta, y solo puedo pasar por el descuido de la oficina referida que, según su certificado de fojas 147, no cuida las introducciones y salidas de efectos, acostumbrando otorgar las guías que se le piden, con solo los pedimentos de los interesados. Finalmente, véase la comparacion hecha por la comandancia del contra resguardo, en el estado de fojas 155, entre las facturas de la carga introducida á esta ciudad por Antero Perez, y las de las guías que en el Saltillo se dieron por procedencia á los 295 tercios que acababan de arribar á dicha ciudad, conducidos en seis dias de Mier por el mismo Perez, y se quedará convencido de como no corresponden unas ni otras, ni en las marcas y número de los tercios, ni en la longitud y latitud, ni en la clase y especie de los géneros.

Todo esto demuestra con la plenitud que la ley requiere, que la referida carga se ha trasportado de la frontera en Mier, á internada al Saltillo sin el conocimiento de los empleados de las aduanas respectivas, y sin los documentos requeridos por el

de Mier en la seccion del contra-resguardo de Cerralvo, ni en la gefatura de hacienda del Saltillo, como punto del final destino que se dice expresaban las guías de Mier, y el de haber permanecido fuera de las garitas municipales del Saltillo en la fábrica de Arizpe á media legua de distancia, sin haber entrado á dicha ciudad, y sin haber presentado los documentos de la aduana fronteriza á la recaudacion municipal del Saltillo. (Posiciones absueltas por Perez, declaraciones de los testigos CC. Teodoro Gil, Mariano del Bosque, Miguel M. Pepi, Francisco Seguin, Miguel Martinez, Toribio Martinez Cárdenas y Albino Torres, y certificados de fojas 147 y 148 de la gefatura de hacienda del Saltillo, y del Recaudador municipal de la misma ciudad.

Hay pues por las constancias anteriores, y conforme á las L. L. 2ª tit. 13, 32ª tit. 16 y 1ª y 114 tit. 18 part. 3ª, la prueba completa y plena de que los 295 tercios de efectos, objeto de este juicio, fueron cargados 150 en el tren de Perez, en la tarde y noche del 2 de Mayo junto al campo-santo de Mier, y estos y los restantes hasta el número citados conducidos de Mier á media legua del Saltillo en los ocho carros de Perez, é igual número de carretones, que en la fábrica de Arizpe trasbordaron su carga á los primeros; y que ni al pasar por las inmediaciones de Cerralvo se revisó la carga, haciéndose la anotacion respectiva en las guías, ni se introdujo al Saltillo á su arribo, ni se revisó tampoco, permaneciendo fuera de garitas y sin que las oficinas de rentas tomaran razon de los documentos que la cubrian,

Ademas; vienen en corroboracion de las pruebas anteriores, las que arrojan la práctica de diligencias á que se refieren los exhortos librados á peticion del ministerio fiscal, á los jueces de 1ª instancia de Mier y Cerralvo, y de Distrito de Coahuila.

Confeso Antero Perez, y probado por las declaraciones de sus carreros Catarino Mo-

rales, Lino Araujo, Dionisio Corrales y Melchor Ramos, en haber sacado los efectos de Mier el dia 3 de Mayo, como remision de Bustamante y Cª, á O'Sullivan del Saltillo, con guías y documento legales que dice le entregó dicha casa. D. M. Bustamante en la manifestacion que se vé en el exhorto relativo, niega que en el mes de Mayo la casa Bustamante y Cª haya hecho la remision de las facturas pedidas, por hacer mas, dos meses, en ese tiempo de que habian terminado los negocios de la compañía, disuelta y liquidada y aun ya sin libros, por haberlos pasado su ex-socio á Roma en Tejas, donde está establecido. Y ésta manifestacion, unida á la fé dada por el juez de Mier, de que en el libro copiador de guías de aquella aduana, en la parte correspondiente á Mayo de este año, no se encontró ningun asiento de guia en que aparezcan como remitentes, Bustamante y Cª, como conductor Antero Perez, y como consignatario O'Sullivan del Saltillo, demuestra que la carga se internó de Mier clandestina y fraudulentamente, supuesto que si se hubieran expedido guías, como asegura Perez, para cubrir los 150 tercios que recibió en Mier, ya fueran remision de Bustamante y Cª, ya de otra casa de aquella villa existirian en los libros de la aduana y conforme á los artículos 39, 40 y 41 del reglamento, en la comandancia y seccion 4ª del contra-resguardo.

Aumenta la presuncion legal de la prueba anterior, lo que resulta de la diligencia practicada en Cerralvo. Pedidas á la seccion 4ª del contra resguardo, las constancias que conforme al art. 41 del reglamento debió haberlo remitido la Aduana de Mier, relativas á la carga que se dijo remitida por Bustamante y compañía, en dos de Mayo con Antero Perez, á la consignacion de O'Sullivan y las anotaciones en las guías, presentó un legajo de las de la Aduana de Mier, entre las que se encontró solo una, la núm. 76 del 1º de Mayo, cuyo conductor es un tal Perez, sin expresar el nombre,

arancel de 31 de Enero de 1856, ni los mandados por el reglamento de 31 de Mayo de 1870, casos comprendidos en los artículos 26 y 27 de la primera ley citada, 68 de la segunda; y 24 y 25 de la pauta de comisos, sin que en contrario valgan las únicas pruebas producidas por los interesados, de que el Saltillo queda á media legua de distancia de la fábrica del Labrador, y que, á consecuencia de la abolición de las alcabalas en el Estado de Coahuila, se han suprimido las garitas, y no se hacen anotaciones en las guías, porque está probado por las mismas declaraciones de los testigos de los responsables que, si la fábrica del Labrador, está á media legua del Saltillo, queda fuera de las garitas municipales, á que se refiere el documento de fojas 148, al Sud-Oeste de la ciudad y á la orilla del camino que viene de Monterey directamente á ésta, sin tocar aquella, pues cuando los trenes llegan al Saltillo, cortan del molino de Belen.

Por último, hay igualmente lugar al comiso, por la desconformidad entre los 295 tercios de efectos, y las guías del Saltillo que se han presentado para cubrirlos; porque viniendo según la fé judicial de 27 de Mayo, en las seis cajas de lustrina, un exceso notable comparado con el número de varas que expresa la guía que cubre el efecto; en los pañuelos de linon, un exceso de cuarenta docenas en cada tercio, satiné en lugar de casimir, y canela en vez de dril de algodón, que expresan las guías del Saltillo, los efectos referidos hubieran incurrido en la pena que señalan los artículos 18 y 19 de la Pauta, para el caso de infracción del párrafo 2º artículo 15, si su internación clandestina y fraudulenta en union de los demás, no los hiciera estar comprendidos en las disposiciones citadas antes, para el comiso por el contrabando y fraude cometidos.

Queda pues demostrado por lo expuesto, que aunque los efectos en cuestion hayan sido introducidos á esta ciudad con guías

y facturas de la gefatura de hacienda del Saltillo, siendo su procedencia verdaderamente de Mier en la frontera, no se ha justificado que se haya hecho legalmente y con las respectivas guías de internacion, revisadas en la línea del contra resguardo y requisitadas conforme al reglamento de 31 de Mayo de 1870; por lo mismo, aquella circunstancia, única excepcion opuesta, no los salva, pues como se vé de las pruebas de los autos, las guías de la frontera que el remitente O'Sullivan manifestó como procedencias de la carga en cuestion, á la gefatura de hacienda de Coahuila, están en tal desacuerdo con ésta, y las circunstancias confesadas por Antero Perez respecto de remitentes, conductores y consignatarios, fechas de partida de los lugares donde se internaron, número de tercios y contenidos de ellos que, como verdad capital y única, aparece este: "que los 295 tercios de mercancias de ropa introducidos á esta ciudad, fueron internados del 3 al 7 ó 9 de Mayo, de Mier al Saltillo, sin las respectivas guías de la aduana fronteriza, y del Saltillo á esta ciudad con procedencias falsas, legalmente comprobadas." De aquí es, que ya hayan sido en Mier los remitentes Bustamante y compañía, ya lo fueran en el Saltillo O'Sullivan ó éste por encargo orden cuenta de Mayer M. Levy de Mier, resulta la internacion clandestina y fraudulenta, é incurra en la pena pedida por el ministerio ipúblico, así de la carga expresada, como del tren de carros, mulas etc. en que se internó, con fundamento de las disposiciones legales á que se ha referido en la presente alegacion.

Y dando aquí por expreso y alegado todo lo mas que alegarse deba en apoyo de los intereses que representa, el promotor fiscal concluye pidiendo al juzgado, se sirva decretar como pidió en su demanda de 28 de Mayo, por ser así de justicia.

Zacatecas, once de Julio de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*Jesús M. Licona.*

Sentencia del C. juez de Distrito.

«Zacatecas doce de Julio de mil ochocientos setenta-y uno.

Visto el juicio de comiso seguido en este juzgado por el ciudadano promotor fiscal en representacion del erario nacional, contra los señores D. Ramon C. Ortiz, D. Carlos Ostermayer y D. Antero Perez, por la introduccion de doscientos noventa y cinco tercios de ropa procedentes de la Frontera del Norte, resguardados con las guías expedidas por el gefe superior de hacienda de Coahuila, bajo los números ciento veinticuatro (124), ciento veintiseis (126), doscientos diez y nueve (219) y doscientos diez y nueve segundo, (219 29), contra los dos primeros como consignatarios de la carga y contra el último como conductor de ella y por el comiso de sus carros, mulas y arneses. Vista la comunicacion de la gefatura superior de hacienda de este Estado, fecha doce de Mayo último, en que se transcribe el parte telegráfico del gefe del contrarresguardo del Norte, que contiene el denuncia de ocho carros de mercancías extranjeras conducidas de contrabando por Perez, cuyas mercancías, procedentes de Mier, salieron el dia nueve de Mayo citado del Saltillo. Vistas las diligencias precautorias que se tomaron el mismo doce de Mayo, para aprehender las mercancías, los trenes y los documentos que resguardaban la carga, medidas que se tomaron por el juzgado conforme á las resoluciones generales de las leyes y especialmente por las circulares del Ministerio de justicia, fechas veintisiete de Julio de mil ochocientos cuarenta y nueve y treinta y uno de Julio de mil ochocientos cincuenta y dos. Vista la comunicacion de la gefatura superior de hacienda del Estado fecha diez y nueve del mismo Mayo, en que participa la aprehension hecha de doscientos noventa y cinco tercios de ropa á D. Antero Perez, quien los habia presentado ese mismo dia á las ocho y media de la

mañana á la seccion de alcabalas del Estado, asegurando los trenes y mulas, reduciendo á prision y poniendo incomunicados al conductor y carreros, consignándolos al juzgado, disposiciones que dictó en ausencia de éste y previa consulta del ciudadano promotor fiscal. Vistas las declaraciones preparatorias de D. Antero Perez, Catarino Morales, Lino Araujo, Dionisio Corrales, Melchor Ramos, Juan Gomez, Mauricio Zamarripa, Francisco Zárate, Gerónimo Zapata y Juan Hernandez, cuyas declaraciones se tomaron en cumplimiento del auto de veinte de Mayo y corren agregadas á estos autos de fojas cuarenta á cincuenta y una por resolucion del segundo auto de la misma fecha, por haberse mandado originales al ministerio de hacienda para que se proceda contra el gefe de hacienda del Saltillo y los empleados de Mier, fundándose el juzgado para practicar estas diligencias como ya se ha expresado en lo dispuesto en la circular de treinta y uno de Julio de mil ochocientos cincuenta y dos ya citada y para agregar el testimonio de ellas al juicio, por el interés de la hacienda federal y por peticion en forma que hizo el ciudadano promotor fiscal en el término de prueba. Vista el acta levantada en la gefatura de hacienda á veinte de Mayo referido, por la cual consta no se conformaron las partes en el juicio administrativo, juicio previo que exigen el artículo 52 de la ley de veintiocho de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y tres y el reglamento del arancel de treinta y uno de Enero de mil ochocientos cincuenta y seis, fecha veintidos de Setiembre del mismo año (fojas 32.) Vista la demanda del C. promotor fiscal en el acta de veintitres de Mayo citado, (fojas 3 vuelta, 34 y 35 frente) en que pide se imponga la pena de comiso en que han incurrido los doscientos noventa y cinco tercios de ropa, carros y acémilas introducidas á esta ciudad procedentes de la Frontera del Norte, con guías de la gefatura de hacienda de Coahuila, sin

ninguno de los requisitos legales prevenidos por la ley de treinta y uno de Mayo de mil ochocientos setenta, fundando su demanda:

Primero; en que siendo la carga procedente de Mier donde se recibió por el conductor D. Antero Perez de las cuatro de la tarde á las nueve de la noche del día dos de Mayo próximo pasado, se introdujo sin la respectiva guía de internacion, por caminos extraviados y evitando la seccion de Cerralvo, donde en caso de traer la guía expedida por la Aduana de donde se importaron los efectos, debió revisarse por la seccion del contraresguardo y hacerse en los documentos la anotacion mandada por el reglamento citado de treinta y uno de Mayo.

Segundo; porque tampoco se revisó en el Saltillo por la gefatura de hacienda, supuesto que detenido el tren dos días en la fábrica de Arispe á dos leguas de distancia de dicha ciudad, de allí se trasladó al tren de Perez el resto de los efectos que habian conducido desde Mier unos carretones, comprendiendo Perez la marcha por caminos extraviados para esta ciudad el día nueve de Mayo referido, todo lo que pone la internacion de los efectos de que se trata bajo las disposiciones de los artículos cuarenta y cinco y sesenta y cinco del reglamento de treinta y uno de Enero y veintinueve de la pauta de comisos. Vistas las contestaciones de los señores Ostermayer, Ortiz y Antero (fojas 35 vuelta á 38 frente) que se reducen, la del primero, á negar los hechos á que se refiere el ministerio público, sin que por esto se entienda que hace suya la responsabilidad que de ellos pudieran nacer, pues que la carga que se le ha consignado ha venido cubierta con guías legítimas expedidas en el Saltillo y conducidas hasta esta plaza con sujecion á las leyes, quedando exento de responsabilidad por tales actos, concluyendo con pedir se le absuelva de la demanda, se le devuelva la carga y se condene al denunciante á la

satisfaccion de daños y perjuicios conforme al artículo cuarenta y nueve de la pauta de comisos. Vista la contestacion del Lic. D. Rafael Piedras, apoderado de D. Ramon C. Ortiz, en la que sienta que la carga perteneciente á su poderdante no puede ser declarada en la pena de comiso, por la clara razon de haber venido de la plaza del Saltillo á ésta cubierta con los documentos legales, sin que éstos tengan defecto alguno, lo que se comprende con solo compararlos con las prescripciones de la pauta de comisos, relativas á guías que se expidan para el comercio interior en las aduanas terrestres: que las omisiones que señala el ciudadano promotor solo comprenden á las guías de las aduanas marítimas que no pueden exigirse en el caso, ni menos imponer pena á su poderdante por omisiones en que no ha incurrido; porque de la misma manera con que se le ha remitido esta carga ha recibido otras y lo mismo ha remitido otras para el interior. Que no por lo expuesto confiesa que se hayan cometido los hechos que se refieren por el ciudadano promotor y no constándole lo que haya pasado respecto de la carga hasta su introduccion á la plaza del Saltillo, niega tales hechos reservando los derechos de su cliente para alegar en vista de las pruebas. Vista la contestacion de D. Antero Perez, quien por medio de su abogado D. Ignacio Rios é Ibarrola, expuso: que siendo legítimos los documentos con que han venido cubiertos los doscientos noventa y cinco bultos que se han contenido en el presente juicio, los cuales presentó á la administracion de rentas de esta ciudad, con fundamento de lo determinado en el artículo veinticinco de la pauta de comisos expedida en veintiocho de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y tres, suplica al juzgado se sirva absolverlo del juicio, declarando que el tren de carros de su propiedad en que condujo los relacionados bultos, no ha caído en la pena de comiso, condenando ademas al denunciante á los daños y per-

juicios que este negocio le ocasione. Vista la petición del ciudadano promotor fiscal de la misma fecha, (23 de Mayo,) para que se abriera este juicio á prueba; la providencia en que se accedió á lo pedido, así como las pruebas promovidas por el mismo ciudadano promotor fiscal; las presentadas por las otras partes; los documentos remitidos por los ciudadanos jefe de hacienda del Estado y jefe del contrabando del Norte; los alegatos escritos de buena prueba; la citación para sentencia; las diligencias practicadas para mejor proveer y todas las demas constancias que ver convino.

Considerando: que el juzgado es competente para conocer en este juicio, y su jurisdicción le viene de las circulares de siete de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y ocho y del reglamento de cuatro de Junio de mil ochocientos setenta, que declaran vigentes la ley de veintiocho de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y tres, la cual resuelve que los jueces de hacienda conocerán en los contrabandos, y los jueces de Distrito son los jueces de hacienda conocerán en los contrabandos, y los jueces de Distrito son los jueces de la hacienda federal. Que la excepción de incompetencia apenas iniciada por el C. Lic. Manuel Ríos é Ibarrola, apoderado de D. Carlos Ostermayer, en el alegato de buena prueba, debía haberse puesto antes de contestar la demanda, para formarse artículo de previo y especial pronunciamiento.

Considerando: que las circulares citadas, fueron expedidas por el gobierno general en uso de facultades extraordinarias, las que fueron publicadas en Veracruz y que si no son conocidas por las dificultades que hubo para su generalización en el país, esto no les quita su fuerza y legalidad, mucho mas que cuando publicado el reglamento de 4 de Junio de 1870, por la simple relación de ellas se hacia conocer al comercio interior y exterior de la República la vigencia de la ley de 28 de Diciembre de 1843: que disponiendo el mismo reglamen-

to de 4 de Junio de 1870 en su art. 65, que está vigente la pauta de comisos de 1843 relativamente á las penas del contrabando y del fraude á los derechos de la hacienda pública, esta resolución tiene fuerza de ley, mientras no se demuestre, que excede ó traslimita los principios de la ley que reglamenta.

Considerando: que esa misma dificultad alegada por el representante de Ostermayer, para hallar las resoluciones citadas, las encontró el C. ministro de hacienda, segun lo que dice en la última memoria que presentó al congreso de la Union al hablar de las leyes expedidas en 1857 y 1859, y sin embargo, halló esas resoluciones, refiriéndose á ellas en su circular de 4 de Junio de 1870, dándoles el carácter que tienen por la facultad legislativa que tenia en esa época el C. presidente de la República.

Considerando: que las excepciones alegadas por los señores Ortiz y Ostermayer al contestar la demanda, consisten, en negar los hechos en que la funda el promotor fiscal y á expresar que la carga denunciada como de contrabando está cubierta con documentos legales que la amparan, cuya última excepción es la que únicamente alega D. Antero Perez, sin que se hubiera alegado otra.

Considerando: que lo alegado por los demandados en este juicio, de que no se pone la pena de comiso al tercer poseedor, es una excepción que no se alegó al contestar la demanda y que aunque fuera admisible no se ha probado; correspondiendo su prueba á los que alegaron, resultando demostrado todo lo contrario por las constancias de autos, pues de ellas resulta que el remitente es M. Mayer Levy y como único dueño de la carga, siendo éste socio ó dependiente de la casa de Bustamante y C^a de Mier, (fojas 181.)

Considerando: que si el consignatario es parte en el juicio, no porque tiene este carácter que le dá la ley, es dueño de los efectos que se denuncian como contrabando.

Considerando: que ni Ortiz ni Ostermayer en el término de prueba, han justificado que la propiedad de los doscientos noventa y cinco tercios haya pasado á tercer poseedor, tanto mas cuanto que de lo expuesto por D. Juan C. O'Sullivan aparece, que la consignacion no la hizo como negocio propio, sino por Orden del remitente M. Mayer Levy dueño de la carga, segun consta de fojas 131.

Considerando: que lo expuesto en el alegato de buena prueba del representante del señor Ortiz está en abierta contradiccion con la diligencia dictada para mejor proveer, pues en ella se asienta que no hay ninguna razon en los libros del señor Ortiz ni en su correspondencia relativa á la carga, porque ésta no se recibió y porque vino á este lugar el remitente ó comisionado M. M. Levy.

Considerando: que los hechos en que funda el C. promotor fiscal su demanda, están plenamente probados por las declaraciones del mismo D. Antero Perez y de los carreros Catarino Morales, Lino Araujo, Dionisio Corrales y Melchor Ramos, (fojas 38 á 47 y 53 vuelta) examinados en las diligencias practicadas para la averiguacion del fraude hecho á la hacienda federal, ratificadas con la citacion legal de las partes de este juicio en el término de prueba y de las cuales resulta:

Primero; que los 295 tercios de ropa fueron cargados en Mier el dia 2 de Mayo citado.

Segundo; que vinieron de Mier al Saltillo, caminando de noche, por vías extraviadas que no acostumbra los carreros y sin conocimiento ni autorizacion del jefe del contra-resguardo, quien es el único que puede señalar el camino por donde deben conducirse las mercancías que se internen; como lo previene el reglamento de 4 de Junio de mil ochocientos setenta en la fraccion 3ª del art. 28, sin que esté en la voluntad de los conductores elegir el camino que les parezca bien.

Tercero; que no se presentaron los documentos en Cerralvo y en el Saltillo, para que por el teniente del contra-resguardo del primer punto y por las garitas municipales del último, se pusieran las anotaciones respectivas, conforme á la resolucion del citado reglamento en el artículo 54 y demas concordantes, y

Cuarto; que la carga no entró al Saltillo, quedándose en la fábrica del Labrador, lo que consta ademas por el testimonio de los otros carreros de Perez, Juan Gomez, Mauricio Zamarripa, Francisco Zárate, Gerónimo Zapata y Juan Hernandez, (fojas 48 á 51,) corroborando este punto la informacion practicada en el Saltillo con citacion de D. Juan C. O'Sullivan, por el jefe del contra-resguardo ante el juez de Distrito y que consta de fojas 138 á 145.

Considerando: que si la averiguacion practicada en este juzgado, y en la que declararon D. Antero Perez y sus carreros, fué conocida por el ciudadano promotor fiscal, el juzgado no le dió ese conocimiento y mas bien dimanó de las revelaciones que hizo Perez al jefe de hacienda y de las cuales tuvo conocimiento este juzgado por el mismo empleado antes de la averiguacion y con los datos recibidos hizo el juzgado las preguntas que constan en el interrogatorio.

Considerando: que no son lo mismo los documentos y guías que se extienden en las aduanas para el comercio interior, que los documentos y guías que se dan en la Frontera para la internacion de los efectos extranjeros: que la presente cuestion se refiere exclusivamente á los documentos extendidos para los efectos internados por la Frontera del Norte y á la sustitucion fraudulenta y maliciosa de dichos documentos para amparar una carga á la que no corresponden.

Considerando: que los documentos con los que han venido amparados los 295 tercios son ilegales, porque las guías de procedencia que se le dan, así como los efec-

tos que éstas amparaban, se encontraban en el Saltillo antes de que llegara D. Antero Peaez á este lugar, sin justificarse que antes ó despues salieran del Saltillo; así aparece, que la guía y efectos del número 21 estaban en el Saltillo desde el 16 de Marzo último; (fojas 68 y 124) los efectos y la guía número 29 llegaron al Saltillo el 20 de Noviembre anterior; (fojas 121 y 125) siguiendo el resto de los efectos no consumidos para Zacatecas; los efectos y la guía número 49, entraron el 16 de Marzo citado; (fojas 65 y 125) y los de las guías números 49 y 87 se presentaron en Cerralvo y Monterey el 3 de Mayo último, resultando con estos hechos plenamente demostrado el fraude y la sustitucion maliciosa, porque ni Perez entró al Saltillo ni los efectos salieron de este lugar, y por aparecer que el mismo Perez en su vuelta no tocó ni á Cerralvo ni á Monterey.

Considerando: que por lo expuesto los efectos amparados por los guías números 21, 29, 49 y 87, son diferentes y diversos de los que se han querido amparar con las guías dadas por el gefe de hacienda del Saltillo, presentadas en esta ciudad y por lo mismo que las propias guías puedan amparar diversas y diferentes cargas.

Considerando: que no siendo la procedencia de los efectos introducidos á esta ciudad las guías números 21, 29, 49 y 87, ni consta que se hayan pagado los derechos respectivos y se ignora su origen y procedencia, puesto que la aduana de Mier no expidió ningunas guías el 2 de Mayo último para resguardar la carga de que se trata, ni en los libros de esa oficina existen documentos para resguardar la carga citada con fecha anterior ó posterior. (fojas 193 á 195.)

Considerando: que el gefe de hacienda de Coahuila no pudo expedir nuevas guías de internacion sí como dice D. Antero Perez los traia de Mier y que solo por falta de ellas podia extenderlas sujetándose á las prevenciones legales.

Considerando: que en el caso de darlas, por el fraccionamiento de la carga, como en el presente negocio, en que consta que las guías de procedencia, comprendian mas tercios que los 295 para los cuales se pidieron, habia obligacion de poner en las guías, los consumidos, la procedencia, el número y marca de los tercios, así como las medidas de los efectos con toda claridad y la constancia de haberse pagado los derechos de internacion, lo cual no se hizo por el gefe de hacienda de Coahuila, infringiendo lo dispuesto en el decreto de 13 de Julio de 8158 y las circulares de 29 de Julio del mismo año, 19 de Julio de 1868, 11 de Enero de 1869 y las resoluciones generales del arancel de 31 de Enero de 1856, quedando en consecuencia los documentos imperfectos é ilegales.

Considerando: que para comprobar el fraude, se añade, que la aduana de Mier expresamente dice, que no expidió las guías con las que salió la carga y la casa de Bustamante y compañía sostiene lo mismo, al contestar en el exhorto que se libró á Mier, negándose con fútiles pretextos á presentar sus libros para aclaracion del hecho. (fojas 193 á 195.)

Considerando: que no está justificada la importacion de los efectos que contienen los 295 tercios y sí probado plenamente que fueron sustituidos á los de las guías 21, 29, 49 y 87, que se les dió como de procedencia, lo que aparece de la simple comparacion de estos documentos con los expedidos por el gefe de hacienda de Coahuila cuyo trabajo redujo el gefe del contra resguardo del Norte, en el estado de fojas 156, resultando los tercios diferentes en números y marcas y los efectos en clases y dimensiones.

Considerando: que si no está probada la procedencia, de los 295 tercios, tampoco lo está que hayan pagado ningunos derechos.

Considerando: que el gefe de hacienda de Coahuila, no revisó la carga como consta del certificado que dió, (fojas 147) pues si lo hubiera hecho, al practicarlo desde

documentos, con otros que no cubrían la carga.

Segundo; han incurrido en la pena de comiso, los carros, mulas y arneses pertenecientes á D. Antonio Perez, por haber seguido caminos extraviados desde Mier á esta Capital, por no haberse asegurado de los documentos que cubrían la carga y por no haberlos presentado para su anotación en donde debía.

Tercero; Se advierte seriamente al ciudadano promotor fiscal, que al presentar sus pedimentos sea mas acucioso y cite con exactitud las leyes y conceptos en que funde sus ocursos.

Cuarto; certifíquese por la secretaría que las declaraciones de Perez y sus carreros, no se le hicieron saber al ciudadano promotor fiscal, sino hasta la publicación de las pruebas.

Quinto; remítase copia de esta sentencia y de sus notificaciones al Supremo Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia, en cumplimiento de la ley y por lo que toca á los Señores O'Sullivan y Levy, quienes por el contrabando se consideran extranjeros perniciosos. Igualmente remítase copia de esta sentencia á la gefatura de hacienda del Estado, para que deducidos los derechos que corresponden á la Nación y al Estado, haga el reparto conforme á la ley.

Sesto; dése aviso al jefe del contrabando del Norte, que las guías números 21, 29, 49 y 87 sirvieron para la internación de los 295 tercios que no correspondían á dichas guías y al ministerio de hacienda, que el jefe de hacienda de Coahuila expidió mas documentos para la internación de otros efectos, como se observa de la numeración de las guías presentadas que tienen números 124, 126, 219 y 219 segundo, para que si lo tuviere á bien se practique la averiguación correspondiente.

Setimo; sáquese copia de esta sentencia para el Semanario Judicial y remítase este expediente para su revisión al superior tri-

bunal de Circuito de Guadalajara, si las partes se conformaron con el fallo.

Hágase saber. El C. Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó. Doy fé.—Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Julio quince de mil ochocientos setenta y uno.—*Luis G. Chavez*, secretario.

*Pedimento del O. Promotor fiscal del
tribunal de Circuito de
Guadalajara.*

Señor magistrado.

Desde que llegó á mis manos el juicio de comiso que tiene usted á su vista para resolverlo en definitiva, me propuse entrar en una discusión tan razonada, franca y concienzuda, cual me fuera posible con los señores abogados patronos de los consignatarios de los efectos aprehendidos y del conductor de los mismos. Y me formé ese propósito, porque viendo el calor con que se pide la absolución de los efectos y de sus transportes, y la manera extraordinariamente apasionada con que son atacadas las leyes fiscales que determinan el modo de proceder en negocios de esta naturaleza, las autoridades judiciales y los funcionarios públicos, que en cumplimiento de un deber indeclinable han dado principio y conocido de este asunto de la manera que se manifiesta en los autos; quise que la discusión en que entrásemos fuera de tal manera dilatada y luminosa, que después de ella no quedara la menor duda sobre la buena fé de los comerciantes que remitieron esos efectos y del conductor que los trajo á Zacatecas; ó que por el contrario, el fraude quedara tan perfectamente aclarado, que sus mismos autores no se atrevieran á presentar el mas leve sofismo en contra de la resolución judicial que haga tal calificación. Difamadas las autoridades y

documentos, con otros que no cubrían la carga.

Segundo; han incurrido en la pena de comiso, los carros, mulas y arneses pertenecientes á D. Antero Perez, por haber seguido caminos extraviados desde Mier á esta Capital, por no haberse asegurado de los documentos que cubrían la carga y por no haberlos presentado para su anotacion en donde debia.

Tercero; Se advierte seriamente al ciudadano promotor fiscal, que al presentar sus pedimentos sea mas acucioso y cite con exactitud las leyes y conceptos en que funde sus ocursos.

Cuarto; certifiquese por la secretaría que las declaraciones de Perez y sus carreros, no se le hicieron saber al ciudadano promotor fiscal, sino hasta la publicacion de las pruebas.

Quinto; remítase copia de esta sentencia y de sus notificaciones al Supremo Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia, en cumplimiento de la ley y por lo que toca á los Señores O'Sullivan y Levy, quienes por el contrabando se consideran extranjeros perniciosos. Igualmente remítase copia de esta sentencia á la gefatura de hacienda del Estado, para que deducidos los derechos que corresponden á la Nacion y al Estado, haga el reparto conforme á la ley.

Sesto; dese aviso al gefe del contra-resguardo del Norte, que las guías números 21, 29, 49 y 87 sirvieron para la internacion de los 295 tercios que no correspondian á dichas guías y al ministerio de hacienda, que el gefe de hacienda de Coahuila expidió mas documentos para la internacion de otros efectos, como se observa de la numeracion de las guías presentadas que tienen números 124, 126, 219 y 219 segundo, para que si lo tuviere á bien se practique la averiguacion correspondiente.

Setimo; sáquese copia de esta sentencia para el Semanario Judicial y remítase este expediente para su revision al superior tri-

bunal de Circuito de Guadalajara, si las partes se conformaren con el fallo.

Hágase saber. El C. Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó. Doy fé.—Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Julio quince de mil ochocientos setenta y uno.—*Luis G. Chavez*, secretario.

*Pedimento del C. Promotor fiscal del
tribunal de Circuito de
Guadalajara.*

Señor magistrado.

Desde que llegó á mis manos el juicio de comiso que tiene usted á su vista para resolverlo en definitiva, me propuse entrar en una discusion tan razonada, franca y concienzuda, cual me fuera posible con los señores abogados patronos de los consignatarios de los efectos aprehendidos y del conductor de los mismos. Y me formé ese propósito, porque viendo el calor con que se pide la absolucion de los efectos y de sus trasportes, y la manera extraordinariamente apasionada con que son atacadas las leyes fiscales que determinan el modo de proceder en negocios de esta naturaleza, las autoridades judiciales y los funcionarios públicos, que en cumplimiento de un deber indeclinable han dado principio y conocido de este asunto de la manera que se manifiesta en los autos; quise que la discusion en que entrásemos fuera de tal manera dilatada y luminosa, que despues de ella no quedara la menor duda sobre la buena fé de los comerciantes que remitieron esos efectos y del conductor que los trajo á Zacatecas; ó que por el contrario, el fraude quedara tan perfectamente aclarado, que sus mismos autores no se atrevieran á presentar el mas leve sofismo en contra de la resolucion judicial que haga tal calificacion. Difamadas las autoridades y

los funcionarios que han intervenido en este asunto, quería también por medio de la discusión, combatir victoriosamente esas calumnias, vertidas sin motivo y sin necesidad.

Mi propósito no ha podido cumplirse de la manera que me lo formé, porque los adversarios de la hacienda pública han querido cerrarme los labios para que no hable temerosos quizá, de que mi palabra sea un obstáculo insuperable para que las leyes fiscales quedaran dolorosamente infringidas; y como ese superior tribunal creyó que debía sacarme los autos antes de concluir el alegato que preparaba, respondiendo á la expresión de agravios; y cuyo trabajo no era humanamente posible hacerlo en poco tiempo, por la manera, que por la naturaleza misma del asunto de que se trata, está organizada la actuación, por las comparaciones numéricas que hay que hacer y por la multitud de leyes y supremas disposiciones que hay necesidad de consultar; es por esto, que en esta ocasión, la primera que hablo con amplitud, siento no tener contradicción, porque el estado del juicio ya no lo permite.

Nos ocupa señor magistrado un negocio esencialmente grave; no por el valor de los efectos aprehendidos; sino por estar comprometida la honra de autoridades y funcionarios verdaderamente respetables, por los puestos que ocupan y porque el buen nombre que disfrutaban lo han adquirido después de una dilatada carrera de servicios públicos, entre los cuales no se mira la menor mancha; y porque contendiendo con extranjeros, ávidos de alcanzar riquezas, no se paran estos en los medios de proporcionárselas; y por esto, estoy seguro de ello, una sentencia que cause ejecutoria y les favorezca, sería la que prepara una reclamación internacional, altamente injusta, como hay muchas, de las que tiene conocimiento la comisión mixta radicada en Washington.

En efecto, cuando todavía no estaba re-

suelto en primera instancia este asunto, ya uno de los abogados patronos de la parte contraria; olvidándose de que sus deberes profesionales están subordinados á las obligaciones que tiene que llenar como mexicano y al respeto que debe tener á su nacionalidad, anunciaba la reclamación internacional que promoverán los demandados. No quiere decir otra cosa este concepto, sobre el cual llamo la atención del tribunal: «De grande interés estimo las apreciaciones que acabo de hacer, porque la emisión de mis ideas deja en todo tiempo salvo los derechos de mi poderdante respecto á la aplicación que pudiera hacerse de las expresadas leyes.»

Se hace esta amenaza para el caso de que los tribunales no cedan ante las exigencias de los demandados. ¿Qué sucederá si llegaran á doblegarse ante esas exigencias? Sus resoluciones serían el mejor justificante de la reclamación que á la república le hicieren sobre daños y perjuicios ocasionados por el comandante de contrarresguardo de la frontera y por el jefe superior de hacienda de Zacatecas.

Esa gravedad me obliga en cumplimiento de mi deber á hablar con mucho espacio; aunque sin seguir el orden que deseara, porque no he tenido los autos á la vista todo el tiempo necesario para hacer este trabajo, consultando cuantas veces me fuera indispensable cada una de sus piezas.

Valiéndome de los ligeros apuntes que pude tomar de los autos dividiré este informe en estas partes.

Primero; exposición de los hechos tal como aparecen en el expediente, relación del juicio en su primera instancia, de los vicios que se le imputan y de los argumentos con que se defiende la introducción de los efectos á Zacatecas.

Segundo; demostración de la legalidad con que se procedió en este negocio administrativo y judicialmente.

Tercero; los efectos aprehendidos se im-

portaron é internaron de contrabando.— Valor legal de la prueba por testigos que concurre á demostrar plenamente esas verdades.

Cuarto; exámen del valor legal de las guías números 121, 126, 219 primero y 219 segundo, expedidas por el jefe superior de hacienda de Coahuila y del modo como el conductor D. Antero Perez hizo el camino del Labrador á Zacatecas. Demostracion de que este negocio debe juzgarse con sujecion á las leyes de 28 de Diciembre de 1848, 31 de Enero de 1856, 4 de Junio de 1870 y demas que lo son concordantes.

Quinto; apreciacion de las pruebas que aparecen en los autos.

Sexto; la pena que debe imponerse por el contrabando verificado.

Primero; el carrero D. Antero Perez cargó el día 2 de Mayo último en Mier una cantidad de efectos extranjeros que trajo hasta Zacatecas, pasando por las inmediaciones del Saltillo, y haciendo el camino por vías desusadas.

El ciudadano jefe superior de hacienda de Zacatecas tenia aviso anticipado del ciudadano comandante del contraresguardo de la frontera del Norte, de que un carrero Perez conducia, con malos documentos, ocho carros cargados de efectos extranjeros.

El jefe de hacienda trasmitió ese aviso al juzgado de Distrito y se puso en comunicacion constante, por cuantos medios le fué posible, con el comandante del contraresguardo, en solicitud de datos y noticias que dieran por resultado la perfecta aclaracion de la verdad.

El juzgado de Distrito, con fecha 12 de Mayo, luego que recibió aquel aviso, requirió á los juzgados de primera instancia de Nieves y Mazapil, para que por su parte dictaran las providencias necesarias con objeto de aprehender los ocho carros, depositarlos, lo mismo que los efectos, y re-

coger los documentos que los amparasen, remitiendo estos, con toda seguridad, á Zacatecas para su exámen y calificacion.

El señor D. Manuel G. Solana, juez de Distrito, obró con tal templanza é imparcialidad en este negocio, que ciñéndose á dictar esas únicas é indispensables disposiciones, se ausentó de Zacatecas á ojo caiente, distante ocho leguas, y no volvió á aquella ciudad, ni se ocupó de tal negocio, hasta que el 19 del mismo mes la gefatura de hacienda le avisó, por extraordinario, la llegada y aprehension de los efectos.

Las providencias ulteriores, de que se hablará despues del juzgado de Distrito, entrañan la aprobacion de las que habia dictado la gefatura superior de hacienda; pero en ellas nada hay de irregular ni contienen el mas leve atentado: así se demostrará al hablar del modo con que se preparaba la introduccion de los efectos aprehendidos para encubrir el fraude; por ahora bastará decir, que el artículo 36 de la ley de 28 de Diciembre de 1846 dá derecho á todo habitante de la república para aprehender los efectos que caminen fraudulentamente, y el artículo 40 de la propia ley, supone como paso previo é indispensable para la celebracion del juicio de comiso, la aprehension verificada ya de los efectos. Esto racionalmente debe ser así, porque si se trata de averiguar si ha habido ó no fraude, y para el caso en que lo haya imponer una pena pecuniaria; es forzoso que se comience por aprehender los efectos que son materia del fraude; porque de otra manera resultaria en las mas de las veces, que el juicio de comiso no tendría mas objeto que la vana curiosidad de saber como se hacia el tráfico mercantil, si con sujecion á las leyes que lo reglamentan ó infringiéndolas.

Aprehendidos los efectos procedió el juzgado de Zacatecas primeramente, á practicar una averiguacion de carácter criminal

deteniendo al conductor y á los carreros, por la parte de complicidad que pudieran tener, no con los remitentes de los efectos; sino con los funcionarios que hubieran permitido la importacion é internacion fraudulenta. Y obró con tal actividad aquel juzgado procurando hallar la verdad, sin causar grandes molestias á los detenidos, que el día 20 de Mayo en que aconteció su captura los examinó y los mandó poner en libertad.

Los datos que tenia aquel juzgado y los que le ministraron las declaraciones de D. Antero Perez y de sus carreros, lo determinaron á mandar celebrar el juicio correspondiente; tanto mas necesario, cuanto que verificado el día 20, ante la gefatura superior de hacienda, el administrativo, el cual concluyó con declarar efectos y transportes caídos en la pena de comiso; los demandados no se conformaron con esa resolución.

El ciudadano gefe superior de hacienda con toda conciencia, como se verá mas adelante, creyó que esos efectos habian sido introducidos de contrabando, y por eso con audiencia de los consignatarios é introductor hizo aquella declaracion, de la cual dió cuenta al juzgado de Distrito.

Colocado en esa situacion este negocio, el juzgado debia tratarlo y resolverlo con estricta sujecion á lo que las leyes disponen; principiando por oír la demanda del ministerio público, en la que, por haberse internado los efectos sin las guías correspondientes, por caminos desusados y haciendo el viaje aun por la noche, podía se declararan caídos en la pena de comiso efectos y transportes, y se los obligara á pagar dobles derechos de importacion y triples de internacion.

Por mas que se diga, pretendiendo demostrar la obscuridad é ineptitud de esa demanda, no es oscura ni inepta: ademas, de su claridad contiene todas las condiciones que las leyes exigen, y los prácticos

aconsejan: se pide en ella cosa cierta, exponiendo la causa porque se pide, de quien se pide y ante quien se pide. El abogado que se muestra tan exigente en este punto y los que despues han acogido esa exigencia, se olvidaron de que una de las respuestas á esa demanda tiene en grado superior los vicios que le objetan.

El Sr. Ostermayer respondió negando los hechos en que el O. promotor fundó la demanda; pero declinando la responsabilidad que de ellos pudiere venirle, porque la carga que le ha sido consignada iba amparada con guías legítimas expedidas en Saltillo.

No me anticiparé á comentar esa respuesta, este es punto que trataré mas adelante; básteme decir, que se estudió el modo de responder algo sin decir nada, para no fijar los hechos que sirvieran de materia á la discusion y para no contraer obligacion de probar alguno.

El Sr. Ortiz, por medio de su apoderado, el Sr. Lic. D. Rafael Piedras, respondió lógica y juiciosamente; así debo decirlo, aunque entienda que su contestacion no lo salva de responsabilidad; contrájese en ella á defender el legal transporte de los efectos de Saltillo á Zacatecas, apoyado únicamente en la clase de guías que los amparaban, y sin tomar en cuenta, como ajenas á su responsabilidad, la manera con que se importaron é internaron.

Por último, el conductor Perez contrajo tambien su respuesta á la legalidad de las guías con que venian cubiertos los efectos, las cuales presentó al alcabalatorio de Zacatecas.

Habiendo habido necesidad de producir algunas pruebas, extendida el acta á satisfaccion de los interesados, en la cual quedaron sentadas la demanda y las respuestas, á peticion del ministerio público se recibió el juicio á prueba; en cuyo término se rindieron las que ambas partes quisieron producir, y oídos despues los in-

formes de las mismas, en 12 de Julio último se resolvió en definitiva, condenando los 295 tercios y sus trasportes á la pena de comiso; calificando de extranjeros perniciosos á O'Sullivan y Levy; dando cuenta con tal calificación al supremo gobierno, para que dicte respecto de ellos las providencias que crea convenientes; y avisando, por último, al jefe del contra-resguardo, que las guías 21 de Laredo, 29, 47 y 87 de Mier que sirvieron de procedencia á las del Saltillo, no corresponden á estas; y dando aviso también al ministerio de hacienda de que el jefe de hacienda de Coahuila ha expedido mas guías de las que pudo legalmente, conforme á la cantidad de efectos que existia en Saltillo.

Ningun vicio en tiempo oportuno se ha objetado contra la actuacion: desde el momento de la vista, y en esta 2ª instancia, es cuando los demandados han objetado, con demasiada insistencia estas irregularidades.

Primero; Haberse procedido administrativa y judicialmente por el solo fundamento del denuncia que hizo del fraude el ciudadano comandante del contra-resguardo de la frontera del Norte.

Segundo; Haber reducido á prision á D. Antero Perez y á los carreros, en cuyo estado se los examinó, haciéndoles preguntas capciosas, sobre el modo en que salió la carga de Mier, y vino hasta Zacatecas.

Tercero; Haber tenido el Sr. promotor fiscal de Zacatecas conocimiento del contenido de esas declaraciones y que por esto calcó su demanda en los hechos que en ellas se exponen.

Cuarto; Haberse servido de esas declaraciones, como prueba, en el juicio de comiso, ratificándolas en un acto y reunidos todos los testigos.

Quinto; Habérsele articulado posiciones á D. Antero Perez, lo cual no debió hacerse, por no ser parte en el juicio, ó siéndolo no debió examinársele como testigo.

Sesto; Haber el juzgado de Distrito de Coahuila, examinado algunos testigos, á petición del comandante del contra-resguardo, careciendo de jurisdiccion en esta causa, no teniendo encargo para ello del juzgado de Zacatecas y obsequiando un ocurso puesto en papel simple.

Sétimo; Haber el ciudadano promotor fiscal pedido á los señores Ostermayer y Ortiz los conocimientos y facturas con que los efectos se remitieron y fueron conducidos de Mier á Saltillo y los con que se le remitió y condujo de ese punto á Zacatecas; cuya exhibicion no debia habérseles pedido, porque ya habian dicho que no les pertenecian los hechos anteriores á la salida de los efectos de Saltillo; y porque en esa respuesta no se habian producido con verdad, su confesion deberia habérseles demandado articulándoles posiciones.

Ademas de esos vicios, con los que se quiere atacar la legalidad de la actuacion, se difunde la licitud de la introduccion de los efectos á Zacatecas con varios argumentos que es necesario exponer para contestarlos.

Atendiendo á la economía de tiempo y trabajo y consultando la claridad, no hablaré separadamente de los alegatos de 11 de Julio presentados en 1ª instancia por los defensores de los demandados y del que han producido en 11 de Agosto los señores O'Reilly y Zelayeta; tanto menos es necesario esto, cuanto que el último con pocas y no notables diferencias está escrito sobre los mismos puntos con que el Sr. Lic. D. Manuel R. é Ibarrola hizo el suyo.

Esos argumentos se reducen á los siguientes:

Que el juzgado de Zacatecas no deberia haber procedido al juicio de comiso fundado solo en la denuncia que del fraude hizo el comandante del contra-resguardo de la frontera:

Que se hayan aprehendido los efectos no obstante que su conductor Perez se presentó con ellos en el alcabatorio de Zacate-

cas, en la mañana del 19 de Mayo entregando las guías que los cubrían; cuyos hechos acreditan la legalidad de su introducción á aquella plaza y la buena fé del conductor.

Que las declaraciones de Perez, las de sus carreros y demas testigos, nada prueban, porque para que demostraran el tráfico fraudulento que se pretendia hacer con esos efectos, era necesario que previamente estuvieran justificados estos dos puntos: que los 295 tercios habian salido de Mier sin guías y que eran los mismos que llegaron á Zacatecas.

Que Don Antero Perez declaró que habia sacado de Mier ciento cincuenta bultos, remitidos por Don M. Bustamante á Don Juan C. O'Sullivan del Saltillo; y aunque Bustamante niega el hecho, pueden concordarse los dichos de ambos, porque hay constancias de haber expedido la aduana de Mier guías para conducir mas de doscientos bultos remitidos al Saltillo á la consignación de O'Sullivan, entre cuyos conductores figura el nombre de Antero Perez; y que si se cree á Perez en su aserto sobre haber sacado los ciento cincuenta bultos de Mier, remitidos por Bustamante, debe creersele tambien lo que dice, de haber recibido las guías correspondientes para su legal internación, y haberlas entregado para que fueran anotadas y registrada la carga en Cerralvo, al corresponsal de la casa que remitia los efectos, supuesto que siendo indivisible el dicho de un testigo no puede hacer fé en parte y en parte no.

Que las guías son la única prueba legal con la que se acredita la legal internación de efectos, contra la cual no puede admitirse ninguna demostración en contrario; cuyo argumento se pretende fortificar con la hipótesis contraria, suponiendo el caso de que extraviadas las guías, sin haber quedado constancia de haberse expedido en la oficina que las dió, los efectos que cubrían caerian irremediabilmente en la pena de comiso.

Que la ley de 28 de Diciembre de 1843, aunque esté vigente y en ello no halla duda, no tiene aplicación en el presente caso, porque habiéndosele dado á este negocio el carácter de un fraude contra las prescripciones del arancel de aduanas marítimas y fronterizas, en lo que respecta á la importación ó internación de efectos extranjeros, no puede juzgarse con arreglo á una ley, cuyo objeto único es normar el comercio interior; y ademas, las disposiciones que la han declarado vigente se refieren á la parte de los procedimientos judiciales que establece y no á la parte penal; pues la circular de 19 de Julio de 1858 autoriza para que puedan remitirse efectos con simple carta de envío, entretanto pueden recavarse guías en donde haya oficinas que las puedan expedir.

Que la ordenanza general de aduanas y el reglamento de 4 de Junio de 1870 no tienen aplicación en este caso, por que se trata no de importación ni de internación, sino de la simple remisión de una plaza á otra del interior.

Que conforme á las prescripciones de la pauta de comisos, solo hay lugar á estos, cuando los efectos caminan sin las guías correspondientes y que los efectos sean aprehendidos sin ellas.

Que por esa misma razon el remitente de los efectos del Saltillo para Zacatecas no estuvo obligado á manifestar la procedencia de ellos, y pudo licitamente indicar como tal las primeras guías que indiferentemente le vieneran ó la mano.

Que con los efectos que existan en una plaza del interior puede traficarse libremente sin mas restricción que las guías que deban cubrirlos, extendidas en la forma que dispone la pauta de comisos.

Que el hecho, acreditado, de no haber el jefe de hacienda de Coahuila registrado la carga para expedirle guías, solo afecta su responsabilidad y demuestra que no es necesario ese requisito, por no haber garitas

que puedan comprobar la salida de los efectos.

Que siendo simples consignatarios los señores Ostermayer y Ortiz de los efectos remitidos del Saltillo por D. Juan O. O'Sullivan, con guías expedidas por aquella gefatura superior de hacienda, no les importan ni afectan en responsabilidad los hechos que hayan tenido lugar con anterioridad á ese remision.

Segundo; Antes de entrar al fondo de la cuestion principal, es preciso examinar con detencion el procedimiento que se ha seguido, y vemos en ese expediente de grandes dimensiones, para demostrar que él no adolece de los vicios que se le imputan.

El aviso que dió el C. comandante del contra-resguardo de la frontera del Norte, de que un tranista apellidado Perez, conducia de contrabando ocho carros de efectos extranjeros, fué causa suficiente para que la gefatura superior de hacienda y el juzgado de Distrito de Zacatecas pusieran en accion todos los recursos que las leyes les dan para lograr la aprehension de esos carros, y lograda como lo fué, averiguar jurídicamente, por medio del juicio que se sigue, si en efecto esos efectos se introducian con fraude al interior de la república.

Pocos momentos transcurrirán para que yo demuestre que esos efectos fueron internados de contrabando; mas aunque así no sucediera, aun cuando estuviera plena y perfectamente averiguado que la introduccion de esos efectos se hizo con entera sujecion á lo que las leyes disponen; aun en este caso, repito, nada tenia de censurable la conducta de los funcionarios y autoridad que han conocido de este negocio.

Por supremas Órdenes de 17 de Setiembre de 1841 se declaró, que los Magistrados de circuito y jueces de Distrito estaban, por su mismo oficio, legalmente autorizados para intervenir en las descargas de buques, en sus visitas, en el exámen de registros y manifiestos, en la confronta de

esos documentos con la carga, en la expedicion de guías, en el asiento de ellas en los libros respectivos y en el otorgamiento de responsivas.

El cumplimiento de esas atribuciones les fué recordada eficazmente en 27 de Julio de 1849; y para ejercerlas, les basta que tengan sospecha de fraude de cualquiera especie que sea.

La circular de 2 de Diciembre de 1857 fué de tal manera apremiante en este punto, que dispone: que por el mero hecho, averiguado, de haber pasado algunas mercancías de contrabando, se suspendan los empleados del lugar de donde hayan salido ó por donde hayan transitado, hasta que no purifiquen su conducta.

El art. 72 y siguientes de la ley de 28 de Diciembre de 1843, imponen á los empleados en rentas la estrecha obligacion de avisar á los tribunales de todo fraude que se cometa ó intente cometerse, para que lo persigan ó lo eviten.

Esta obligacion se halla tambien consignada en la fraccion 1.^a del art 30 de la ordenanza general de aduanas marítimas y fronterizas; y se mira eficazmente recordada en el art. 8.^o de la ley de 17 de Marzo de 1858.

Por último, el objeto radical que se propuso el reglamento de 4 de Junio de 1870, fué evitar el fraude por cuantos medios fuera posible, y por esto en la fraccion 5.^a art. 31 y en los art. 24 y 25 les impone á los empleados, la obligacion de ejercer una vigilancia constante y eficaz. Queda, pues, demostrado que el jefe del contra-resguardo de la frontera cumplió con un deber avisando por telégrafo á la gefatura superior de hacienda de Zacatecas del fraude que se intentaba cometer por medio del conductor D. Antero Perez, y que la gefatura de hacienda de Zacatecas al tomar en consideracion ese aviso, transmitirlo al juzgado de Distrito y dictar las providencias que creyó convenientes para evitar el fraude, tambien cumplió con su deber, lo mis-

mo que el juzgado de Distrito procediendo como procedió, á practicar la correspondiente averiguación y sustanciar el presente juicio.

La repetición y el estilo con que se usa la palabra denunciante, aplicándola al C. comandante del contra-resguardo de la frontera del Norte, hace advertir la intención que se tiene de imprimirle un estigma de vergüenza ó infamia; y para ello no hay motivo, porque además de que el aviso que dió fué en cumplimiento de su deber, no siempre el denuncia debe calificarse por acción villana; casos hay en que debe estimarse como hecho laudable: tratándose por ejemplo, de salvar la existencia de la sociedad ¿habría persona que condenara el denuncia de los que conspirasen en contra de sus instituciones fundamentales? Por mas que se diga, la hidalguía del carácter de nuestro país no pervertirá nunca el natural sentido de las palabras.

El juzgado de Distrito de Zacatecas obró en legalidad practicando previamente una averiguación de carácter criminal, porque conforme á las disposiciones que quedan citadas, de su estrecha obligación es, inquirir la conducta de los empleados en rentas en todos los casos en que se sospeche que ha habido importación ó internación fraudulenta de efectos extranjeros. Y como esa averiguación no podía practicarse con buen éxito sino es deteniendo é incomunicando á Perez y sus carreros, para que no pudieran ponerse de acuerdo unos con otros; por esto fué indispensable dictar esa medida.

Aun cuando no se tratara de un negocio de carácter criminal, siendo puramente civil y estando interesada en él la hacienda pública, era forzoso dictar medidas eficaces que dieran por resultado recoger la prueba, con la cual los derechos del erario quedaran asegurados. En aquellos momentos se creyó con sobrado motivo, que esa prueba consistiría solamente en el testimo-

nio de Perez y sus carreros; era pues, forzoso recogerlo, y esto no podía hacerse si no es asegurando la permanencia de ellos en Zacatecas y aislando unos respecto de los otros; y esto no podía verificarse de ningun otro modo que manteniéndolos en seguridad; porque debe advertirse, que siendo los carreros gentes absolutamente desconocidas, sin residencia fija y sin arraigo de ninguna especie, podían fácilmente ausentarse y no volverse á saber mas de su paradero.

El juzgado de Distrito penetrándose del deber que tenía de inferir la menor molestia posible á personas que tal vez no tenían complicitad alguna en la criminalidad del hecho, en el mismo día 20 de Mayo, que tomó conocimiento de este negocio, examinó á Perez y sus carreros, y no hallándolos delincuentes los mandó poner en libertad. La actividad del señor Solana es digna de toda alabanza.

El juez de Distrito al examinar esos testigos no les hizo preguntas capciosas; se las formuló, calcándolas sobre los hechos que conforme al precepto de la ley debían haber tenido lugar; y si en algun punto esas preguntas fueron indirectas, es porque así deben hacerse á personas que pueden tener algun interes en el negocio, y que por esto se cree que procurarían ocultar la verdad.

A los tres dias (22 de Mayo) se celebró el primer acto del juicio de comiso, dando principio con la demanda que puso el C. promotor fiscal, en la cual se exponen algunos de los hechos declarados por D. Antero Perez y sus carreros; y de aquí infieren los abogados de la parte contraria, que el Sr. promotor fiscal tuvo conocimiento de aquellas declaraciones: esa deducción no es lógica; para serlo, es preciso que estuviera demostrado que los declarantes no habían hablado acerca de este negocio con el promotor fiscal ni con alguna otra persona.

Por otra parte ¿que ley prohíbe que alguno de los contendientes sepa lo que han

declarado sus testigos, cuando no se trata de pruebas producidas en el término correspondiente y cuando esa revelación no se la hace el tribunal que conoce de la causa? Además, el promotor fiscal no trata negocios de un particular, cuyos derechos proceden de hechos conocidos; sino que por el contrario, representando á un ser moral que ignora lo que pasa en sus intereses, y tratándose de deducir una acción motivada por algún hecho desconocido, es preciso que para deducir esa acción tenga conocimiento del resultado que haya dado la averiguación practicada para descubrir el modo con que se verificó ese hecho. Así lo entiende el artículo 61 de la ley de 28 de Diciembre de 1843, disponiendo que después de comprobada la existencia del cuerpo del delito se proceda á celebrar el juicio de comiso.

Los testigos D. Antero Perez y sus carreros habian de constituir una de las pruebas producidas en este juicio; si estaban ya examinados no habia necesidad de interrogarlos de nuevo; bastó por cubrir una nueva fórmula hacer que ratificaran sus declaraciones; y no es verdad lo que se asegura, que de autos consta, que en un solo acto y estando todos presentes se les leyeron todas las declaraciones; porque debe tenerse en cuenta, que habiéndose seguido el juicio verbalmente, nunca las actas se redactan con tal minuciosidad que refieran claramente todos los incidentes que en él tienen lugar: de esta circunstancia se quisieron sacar grandes ventajas para destruir la prueba. Perez fué el único que amplió su declaración y lo hizo con el mejor derecho, porque la ratificación que se les pidió, sin caución de ningún género, tuvo por objeto que modificaran ó ampliaran lo que habian declarado.

D. Antero Perez figura en este juicio con un doble carácter: con el de parte por el interés que tiene en salvar su tren de que caiga en la pena de comiso, y con el de testigo, cuando se trata, lo que bien puede su-

ceder conforme á las leyes, de hechos que afecten solamente á los empleados públicos, á los remitentes y á los consignatarios. Tal sucede, por ejemplo, en todos los casos en que el fletero conduce efectos, pero asegurándose de que se le entreguen los documentos que deban cubrirlos, extendidos aparentemente en la forma legal, y en su tránsito observa todas las prescripciones á las que lo someten las leyes. Si se tienen presentes estas reflexiones, se advertirá á primera vista, que nada hay de irregular en haberlo examinado primero como testigo y en haberle después articulado posesiones.

El comandante del contrarresguardo de la frontera promovió una prueba ante el juez de Distrito de Saltillo y la hizo en papel común; pero como las diligencias mas importantes, cuya practica él podia no se practicasen sino promovidas por el promotor fiscal de Zacatecas y declaradas por aquel juzgado de Distrito, no hay la irregularidad que se les imputa. En esas diligencias aparecen las declaraciones de tres testigos, contestes absolutamente con lo que Perez y sus carreros habian declarado.

Demostrado como queda que éste juicio no tiene vicio alguno y que todo lo que se ha practicado ha sido con intervencion y expresa conformidad de los demandados; para responder á los argumentos de defensa que han alegado, es preciso exponer los hechos que aparecen en los autos, los cuales demuestran plenamente el fraude que se cometió en la importación ó internación de los doscientos noventa y cinco tercios introducidos á Zacatecas.

Tercero; el día 2 de Mayo último, D. Antero Perez llegó á las cercanías de Mier, con ocho carros de grande transporte; se posó en el campo; en la tarde de ese día y parte de la noche cargó ciento cincuenta tercios de efectos extranjeros; salió al día siguiente, caminando de noche por el desierto y pasando por cerca de Cerralvo; llegó á la fábrica del Labrador, inmediata á

Saltillo; cargó allí en sus mismos carros otros ciento cuarenta y cinco tercios de efectos también extranjeros, que venían en unos carretones; y con todos esos efectos amparados con las guías números 124, 126, 219 primero y 219 segundo, expedidas por la gefatura superior de hacienda de Coahuila, continuó el 9 del mismo Mayo para Zacatecas por camino no usado, á donde llegó el 19, presentándose al alcaballatorio de aquella capital con los efectos que conducía.

Los testigos ciudadanos Antero Perez, Catarino Morales, Lino Araujo, Dionisio Corrales y Melchor Ramos, han uniformemente declarado esos hechos, con la sola diferencia de que Morales y Araujo nada dicen sobre el camino que trajeron de Mier al Saltillo ni las horas en que lo hicieron.

Las declaraciones de esos testigos son combatidas por la parte contraria con estos argumentos.

Habérseles reducido á prision contra lo que dispone la ley 10 tít. 16 part. 3ª para que careciendo de libertad declararan segun la intencion del promotor fiscal y del juzgado: que su exámen se hizo sin citacion de los interesados y sin presenciar su protesta de decir verdad, como lo manda la ley 23 tít. 16 part. 3ª y antes de comenzar el juicio, contraviniendo en esto á la disposicion de las leyes 1ª tít. 13 y 2 tít. 16 part. 3ª y revelando sus declaraciones al ministerio público, contra lo que expresamente ordena la ley 24 del propio título y partida: que se les examinó para inquirir la conducta de los empleados de la hacienda pública, en cumplimiento de la circular de 31 de Julio de 1852, y no con ocasion de este juicio: que imputándose complicidad á Perez en el contrabando su dicho no hace fé, segun lo dispone la ley 21 del título y partida citadas; que esas declaraciones se ratificaron después de algunos dias de producidas y de haber hablado el C. promotor con D.

Antero Perez y sabido este lo que sus carcereros habian declarado, contraviniendo á lo dispuesto en la ley 30 del propio título y partida.

Ya se ha dicho poco antes que la prueba testimonial fué promovida y mandada recibir con citacion de los interesados, en cuya diligencia solo la parte del Sr. Ostermayer salvó sus derechos, por lo que respecta, no al tiempo, manera y forma en que se iban á examinar los testigos, sino por lo que hace al contenido de sus declaraciones.

La citacion para que una prueba se reciba, no importa una fórmula insustancial; al contrario, es una solemnidad de tal manera esencial, que ella concurre á constituir la prueba misma; y por esto, cuando la citacion se hace, es cuando la parte contraria ha de ejercer su derecho de oponerse á que la prueba se reciba. De ese derecho ninguno de los demandados hizo uso; pues repito, solo el Sr. Ostermayer lo dejó salvo para el contenido de las declaraciones. ¿Cómo después de aquel tiempo se pretende legalmente impugnar las solemnidades y el tiempo en que la prueba se recibió? Esto no es posible.

Después de la citacion para sentencia; esto es, concluido el pleito; cuando solo por equidad y por ilustrar el ánimo de los tribunales se permite oír las alegaciones que por vía de informe quieren hacer espontáneamente los interesados, es cuando por primera ocasion se ha pretendido impugnar el tiempo y manera en que la prueba se recibió; y se ha hecho esto no intentando tachar á los testigos, de esto verbo ni se hace uso; sino queriendo destruir radicalmente su testimonio por los vicios que se les objetan, y que no se expusieron en el único término hábil para ello.

Sin embargo, fácil es demostrar que tales vicios no existen. Preferentemente dedicó el juzgado de Distrito su atencion á averiguar la criminalidad que hubiera en alguno ó algunos empleados de la hacienda pública, en el contrabando que se le habia

denunciado se estaba verificando; y obró así, por que tal es la obligacion que le imponen las leyes y disposiciones de que se ha hecho mérito; y porque tratándose la parte civil de ese negocio administrativamente; por la gefatura superior de hacienda é ignorándose cual fuera la resolucian que en él se dictara, y si con ella se conformarían los interesados, no se le habia consignado su conocimiento, y por lo mismo permanecia enteramente extraño á lo que estaba pasando.

No podia suceder igual cosa respecto de la criminalidad de los empleados; por lo que se acaba de exponer y por que la averiguacion que con ese objeto se practicara es de la exclusiva competencia de los tribunales, no tenia que esporar á que la gefatura Superior de hacienda le avisara el resultado del procedimiento administrativo, cuyo objeto y fin eran absolutamente distintos.

En 20 de Mayo el juzgado de Distrito dió principio á la averiguacion criminal, comenzando por mantener en detencion al conductor Perez y á sus carreros á quienes se examinó inmediatamente sobre los efectos que habian traído, de donde procedian, por qué camino habian venido, á qué horas lo habian hecho, con qué documentos habian venido la carga y resguardada y de quienes los habian recibido. Los mismos abogados de las partes contrarias muestran expresamente su conformidad respecto de que el juzgado de Distrito cumplió con un estrecho deber, muy recomendado por las leyes, procediendo, como procedió, en esa averiguacion, cuyo objeto era, como se ha dicho, inquirir la criminalidad de los empleados, y nada les objetan á las declaraciones de Perez y sus carreros recibidas con tal fin.

Cuando el juzgado de Distrito recibió las guías con que se procuraban amparar los efectos y el acta administrativa practicada en la gefatura superior de hacienda sobre

comiso de los mismos, procedió luego á celebrar el juicio correspondiente. Esto aconteció en 22 de Mayo, dos dias despues de practicadas las diligencias de carácter puramente criminal y de haber sido puestos en libertad D. Antero Perez y sus carreros.

Las declaraciones de estos eran absolutamente indisputables para averiguar si habia habido ó no contrabando: ellas vendrian á constituir una de las pruebas que produjera el ministerio público ó que de oficio, y digo este concepto con toda conciencia, debia recoger el juzgado; y aquel derecho del representante de la hacienda pública y aquella obligacion del juzgado no podian desaparecer por haber sido examinados los testigos con otro motivo y hallándose determinados. Y para que esta verdad se palpe con evidencia, supongamos que se hubiera practicado únicamente el juicio civil de comiso, que habiendo declarado en él Perez y sus carreros, de esas declaraciones resultara averiguada la criminalidad de los empleados de la hacienda pública, y que para demostrarla no hubiera mas prueba que esa: en tal caso nadie podrá dudar que se podría y deberia hacer uso de esa prueba. Esto es conforme á lo que dispone expresamente el art. 54 de la ley de 28 de Diciembre de 1843, ordenando que: "Cuando en los procedimientos judiciales de comiso resultare alguna indicacion criminal, por lo que puede haber lugar á alguna otra pena, el juez sigue este juicio por cuerda separada;" y como para seguirlo hay necesidad de motivar la causa porque se sigue, es preciso comenzarlo con el testimonio de los datos que obran en el juicio civil, los cuales indican ó demuestran la criminalidad de las personas contra las cuales se va á seguir. Esos datos nadie podrá dudar tampoco que hacen, conforme á las leyes, la fé que en sí tengan; no obstante que se hayan recogido autos de principiar el juicio y teniendo el representante del ministerio público ciencia de su contenido, como debe

tenerlo de todo negocio que afecta al erario nacional, según lo manda el art. 40 de la ley de 22 de Mayo de 1834.

De la averiguación criminal practicada en 20 de Mayo no se le dió ciencia al promotor fiscal; pero pudo dársele legalmente ó legalmente imponérsele el mismo de ella para formular su demanda, obrando con la autorización que le dan los artículos de las leyes que se acaban de citar.

Por otra parte, si de las pruebas que aparecen en un juicio civil se puede hacer uso como medio de demostración en una causa criminal que tenga enlace con aquel, con más razón se puede usar de las recogidas en una causa criminal, para servirse de ellas en el juicio civil que tenga enlace con esa causa, porque la vida y la honra del individuo merecen más respeto y más consideraciones que sus intereses pecuniarios.

Los abogados contrarios que suscriben el alegato de 11 de Agosto, creen que se cometió un atentado reduciendo á prisión á D. Antero Perez y sus carceros, porque el art. 18 de la Constitución federal solo permite la prisión por delitos que merezcan pena corporal: en el caso que nos ocupa solo hubo una detención, legalmente decretada conforme al art. 19 de la propia Constitución ó indispensable por la necesidad de aislar á unos testigos respecto de otros y recoger prontamente sus testimonios.

Además, entre la detención y la prisión hay mucha diferencia; las autoridades por cualquier motivo que importe una falta ó un delito pueden detener á un individuo por tres días; pero no pueden decretar su formal prisión y mantenerlo en ella sino por falta ó delito que merezcan pena corporal; y como D. Antero Perez y sus carceros en el mismo día que se les detuvo se les puso en libertad, ni se cometió un atentado con ese hecho ni se obró con irregularidad.

La ley 10 tít. 16 part. 3ª, quita todo

valor al testimonio de un preso producido en alguna causa criminal, para evitar que se incline á producirse con falsedad, ofreciéndole su libertad. Los testigos de que nos ocupamos estaban detenidos, no presos, y por esto no les comprende la disposición de la ley: se les examinó tomándoles sus declaraciones preparatorias, no recogiendoles su testimonio con el objeto exclusivo de que obrara contra persona determinada; y como ese testimonio ha venido á servir en un juicio civil, tampoco por esta razón les comprende la prohibición de esa ley.

Arbitrariamente se supone que se les detuvo para que, careciendo de libertad declararan según la intención de las autoridades y funcionarios públicos: esto no es cierto, ni debe sospecharse, porque no hay dato alguno que justifique esa sospecha; al contrario, la autoridad pública que ejerce el juez de Distrito de Zacatecas, la confianza que merecidamente se ha depositado en él y la buena reputación de que goza con sobrada justicia por sus buenos antecedentes, constituyen una presunción de la rectitud de sus actos, que no pueden destruirse, sino es demostrando plenamente el haber cometido la falta que calumniosamente se le imputa.

De autos consta que Perez no cumplió sus obligaciones como conductor; pero nada aparece en contra de él ni de sus carceros que justifique haber tenido complicidad con algún empleado para hacer el fraude; y como la averiguación criminal tenía por objeto averiguar la culpabilidad de algún empleado, para proceder á su castigo; sintiendo ellos limpia su conciencia no podían tener temor fundado de que se les mantuviera en prisión.

Las declaraciones producidas en la averiguación criminal, aunque obran testimoniadas en estos autos, no son realmente ellas las que constituyen la prueba por testigos, porque la ratificación que de las mismas hicieron los que las produjeron, ha-

llándose en el pleno goce de su libertad, importa un nuevo exámen, unas nuevas declaraciones, exoneradas de los vicios que sin fundamento se objeta á las primeras.

La ley 23 del propio título y partida ordenan, que el juez puramente á los testigos antes de examinarlos, presenciando ese acto la parte contra quien se producen, y que el exámen se haga con citacion de la misma, fijando para esto el día en que deba verificarse. Precisamente con sujecion á lo dispuesto en esa ley procedió el juzgado de Zacatecas; en el mismo acto en que se puso y contestó la demanda se pidió que se compulsara testimonio de las declaraciones de Perez y sus carreros, las cuales ratificadas obraran como prueba en el juicio; y el día 24 de Mayo que se ratificaron esas declaraciones los demandados presenciaron la protesta de decir verdad. Si no se fijó anticipadamente el día en que esas ratificaciones debian hacerse como lo manda la ley citada, es porque los interesados estaban presentes y porque este negocio se ventilaba verbalmente.

Es aun menos cierto que esos testigos contrariando el precepto de las leyes 1ª tít. 13 y 2ª tít. 16 hayan declarado antes de comenzar el juicio por demanda y por respuesta. La 1ª de esas leyes no habla del testimonio de los testigos, se ocupa de la confesion judicial, y por lo tanto no es aplicable al presente punto; y la otra se ha aplicado perfectamente en el presente caso; porque como se ha dicho poco antes, los testigos fueron examinados verdaderamente despues de contestada la demanda; y aun suponiendo que la ratificacion no importara un nuevo exámen, el ya verificado con anterioridad, fué en virtud de una de las excepciones que marca dicha ley, por ser personas de fuera del lugar, tener que ausentarse pronto é ignorarse donde se les podria hallar despues, y no saberse si seria fácil encontrarlos con oportunidad.

La ley 24 prohíbe á los testigos que re-

velen á las partes el contenido de su testimonio despues de producido, antes de que el juez lo mande publicar. No hay dato alguno que justifique que Perez y sus carreros hayan revelado al representante del ministerio público lo que habian declarado: por otra parte, debo repetir que las contiendas de los particulares con la hacienda pública, no deben someterse en este punto á las mismas reglas que norman las que se ventilan entre simples particulares, bien sea por la imposibilidad que los promotores fiscales tendrian de procurarse datos para defender los intereses de la hacienda pública, en la multitud de negocios que diariamente se presentan, muchos de ellos ignorados ó desconocidos; ó ya por el precepto de las leyes que se han citado, por el cual se debe dar ciencia á los promotores de todos los negocios que afecten á la federacion; ó porque como lo dice la misma palabra, el oficio de fiscal debe extenderse en beneficio del tesoro y de la Nacion á es- cudriñar los actos mas íntimos; por esto, segun lo disponen repetidas leyes de reciente fecha, que seria ocioso citar, los protocolos públicos los deben ser enseñados cuantas veces los necesiten por razon de su oficio; lo que no sucede con los particulares; si algun derecho tienen que deducir, motivado por algun instrumento público que no posean, en los mas de los casos al escribano le está prohibido enseñar su protocolo con ese motivo.

Debo aun hacer otra reflexion: esa ley en esa parte ha caído en completo desuso: nadie ignora hoy lo que los testigos que presenta van á declarar; nadie deja de hablar con ellos, antes de producirlos, para asegurarse de que saben y les consta de cierto la existencia del hecho que van á testificar; á ninguno interpelan los tribunales sobre si ha hablado con la parte que lo presenta sobre los puntos, acerca de los cuales se le va á examinar, y á nadie se le advierte que en la protesta que hace se contiene el secreto de su declaracion.

Es menos aplicable la ley 21 del mismo título y partida, pretendiendo invalidar con ella el testimonio de D. Antero Perez por razon de la complicidad que tenga en el contrabando: esa ley prohíbe que el socio pueda declarar en los pleitos que afectan á la compañía de la que es parte, porque teniendo interes en el mismo pleito su dicho no puede hacer fe por la falta de imparcialidad; pero bien puede demandársele su confesion, la cual constituye una prueba plena, por el perjuicio que ella le viene: esto es lo que se hizo con D. Antero Perez; lo que al principio fué una declaracion tratándose de averiguar la criminalidad de los empleados de la hacienda pública, se convirtió en confesion al tratarse de saber la manera de introducir los 295 tercios á Zacatecas. Además, para expresar el agravio que á los demandados hizo la sentencia de 12 de Julio, la parte de D. Antero Perez quiso gozar de distinto é independiente término, porque segun manifestó, no estaba ligado en intereses ni en medios de defensa con los señores Ostermayer y Ortiz, con cuyo acerto estuvieron conformes los apoderados de estos; y por ese motivo se le corrió traslado independiente al apoderado de Perez: en sustancia, esa respuesta no quiere decir mas que, bien podría suceder que hubiera habido contrabando, sin que el conductor de los efectos tuviese el menor participio en el modo con que se intentaba hacerlo.

Igualmente tampoco tiene aplicacion la ley 30 del propio título y partida; ella se refiere á casos absolutamente distintos; mas suponiendo el que habla que se querria citar la ley 31, manifiesta que tampoco tiene aplicacion; dos casos supone esa ley: que se haya extraviado el interrogatorio escrito por la parte interesada y que el juez haya dejado de hacerlos algunas preguntas contenidas en él; cuya omision deberá repararse ampliando las declaraciones de los testigos, despues de publicadas las pruebas, sobre puntos que afectan á la esencia del

negocio; mas si el testigo despues de dada su declaracion hablare con la parte interesada y por eso esta pretende que se le amplie, entonces no debe hacerse así; pero si el juez encontrare alguna duda en los conceptos vertidos, puede conforme á esa ley pedir las explicaciones y aclaraciones que crea necesarias. El testigo, en el acto de declarar puede, conforme á la ley 24 del propio título y partida, decir todo lo que sepa acerca del negocio del cual se le interpela, comprendiendo aun puntos sobre lo que no hubiere sido interrogado. Con este objeto en cumplimiento de esa ley se les lee á los testigos sus declaraciones para que las amplien ó las modifiquen. Esto se hizo con D. Antero Perez; pues no debe olvidarse que en sustancia se le iba á examinar de nuevo, y que por lo mismo podia ampliar ó reformar su declaracion.

Queda demostrado que los testigos D. Antero Perez y sus carreros fueron examinados en el tiempo y forma que las leyes previenen; y como ninguno de esos testigos tiene alguna de las prohibiciones que marcan la ley 8ª y demas relativas del título 16 partida 3ª, ni han sido tachados por la parte contraria, su dicho tiene el valor que las leyes le dan.

La ley 32 del propio título y partida estima como prueba plena el testimonio conteste de dos testigos hábiles: los ciudadanos Antero Perez, Catarino Morales, Lino Araujo, Dionisio Corrales, y Melchor Ramos uniformemente declaran estos hechos: haber cargado por la noche en Mier ocho carros de efectos extranjeros; haber venido de allí á las inmediaciones del Saltillo, á un puerto llamado, «Fábrica del Labrador» ó de Arispe, en donde de unos carretones tomaron mas carga, señalando aun algunos de los testigos el número de tercios que recibieron; por ejemplo, Lino Araujo dice que él recibió seis cargas, con las que ajustó treinta en su carro; y que de Arispe siguieron para Zacatecas á donde llegaron el 19 de Mayo.

Hay otros hechos igualmente demostrados por el testimonio de algunos de esos mismos testigos, que es necesario tener muy presentes y estimar en todo lo que significan, porque ellos demuestran la manera con que se ha hecho la internacion de los doscientos noventa y cinco tercios; Perez, Dionisio Corrales y Melchor Ramos declaran haber venido de Mier al Labrador por el trayecto conocido con el nombre de desierto y caminando por la noche, y todos uniformemente declaran haber continuado del Labrador á Zacatecas, no por el camino mas directo y usual que pasa por la hacienda de Cedros, sino por el Salado, San Cristobal y Zóquite. D. Antero Perez explica este último hecho diciendo, que usó la vía del Salado por tener provision de pasturas situadas en ella.

Los representantes de los señores Ostermayer y Ortiz no les dan ninguna significacion á esos hechos; entienden que ellos no prueban la importacion é internacion fraudulenta, porque para que probaran ambas cosas era indispensable que estuviera previamente demostrado que, los doscientos noventa y cinco tercios habian venido sin guías de Mier al Saltillo y que eran los mismos introducidos á Zacatecas.

Uno y otro extremo aparece demostrados en los autos: del primero voy á ocuparme inmediatamente, y respecto del segundo, esto es la identificacion de los efectos, está hecha con las declaraciones de los testigos de que se acaba de hacer mérito; porque ellos dicen que los efectos que cargaron en Mier no los descargaron sino hasta que llegaron á Zacatecas y que en el camino tomaron otra cantidad de las que venian en unos carretones. Por consiguiente, no es exacto lo que dicen los señores Zelayeta y O'Reilly, que es indispensable para que el dicho de esos testigos pruebe algo que estuvieran demostrados anticipadamente esos dos puntos; pues el segundo es uno de los que se han averiguado de la manera mas

perfecta por las declaraciones de los testigos y por lo tanto peca contra la buena lógica exigiendo que esté averiguado el hecho mismo que se trata de averiguar.

Las declaraciones de esos testigos demuestran, en efecto, solamente que D. Antero Perez condujo de Mier al Labrador y de allí á Zacatecas, transitando por tales caminos y á ciertas horas una cantidad de efectos extrangeros; y como esos hechos por sí solos no acreditan que la importacion é internacion se haya hecho de contrabando, ha llegado el momento de que nos ocupemos de este punto.

La importacion de efectos extrangeros por cualquier punto ó aduana fronteriza, debe hacerse con estricta sujecion á las reglas marcadas en los artículos 21 y 22 de la ordenanza general de aduanas marítimas de 31 de Enero de 1856; sin mas alteracion, que para los introducidos por las aduanas de la frontera, situadas en la Zona libre, no tiene necesidad de acompañar á sus manifestos y facturas las certificaciones de los cónsules del punto de donde proceden los efectos. Esas reglas se reducen en compendio á las siguientes: á la presentacion de los manifestos y facturas que indican la cantidad, calidad y valor de los efectos que se van á introducir, espresando el número de bultos que contienen y las marcas que los distinguen, lo cual se hace al administrador de la aduana respectiva, para que se reconozca la carga y se le cobren los derechos de arancel segun su aforo.

Ningun efecto exarangero puede introducirse á la república sin observar esas prevenciones y pagar los derechos que el arancel señala; pero como no es posible en una frontera y en un litoral tan dilatados como tiene México, ejercer una fiscalizacion muy eficaz para que ningun efecto se importe sin observar esas prevenciones, y la experiencia por desgracia acredita, que á los mismos puertos habilitados, y con mas facilidad á las poblaciones en que residen las

aduanas fronterizas, se importan con frecuencia grandes cantidades de efectos de contrabando; multitud de leyes se han expedido fijando el modo con que los efectos extranjeros deban internarse legalmente al interior de la república.

La ley reglamentaria de 22 de Diciembre de 1849, dispone en su artículo 111: «Ningun efecto extranjero se internará por tierra ni trasportará por agua á otro lugar ó puerto de la república, sino con guía de las aduanas marítimas de altura ó cabotaje, espresándose la procedencia de los efectos y haber pagado los derechos de importación é internación; prohibiéndose, que por ningun motivo caminen con documentos de las administraciones de rentas ni de otra autoridad, sea cual fuere; por manera, que cuando se desembarquen efectos nacionalizados en otros puertos ó se conduzcan del interior, al internarse ó trasportarse á otro puerto, les expedirá la aduana marítima nueva guía expresando haber satisfecho los derechos de internación, refiriéndose á la guía con que se introdujeron allí que recogerá y archivará como justificante de su aserto. Exceptuándose de estos procedimientos, los casos en que la guía lleve otros destinos, pues entonces caminarán con la misma que vinieren, y si se hubiere vendido en el puerto alguna parte, se anotará en ella por el administrador de rentas lo que fuere y los derechos que haya cobrado.»

Como complemento de este artículo previenen los dos siguientes de esa ley que: «Siendo las guías el justificante de que los efectos extranjeros han satisfecho en el puerto los correspondientes derechos de importación é internación, toda mercancía que procedente de algun puerto ó frontera marche sin aquel documento quedará sujeta el introductor á probar ante el juez, ante quien se haga la denuncia, que los tiene pagados; y no haciéndolo, incurre en la pena que impone la pauta de comisos de 28 de Diciembre de 1843 á los efectos que

caminen sin los documentos respectivos. Hecha que sea esta declaración por el juzgado, se procederá desde luego á exigir los referidos derechos de importación é internación, agregándose al expediente constancia de haberse enterado el importe de ellos en la comisaría respectiva, y no habiéndola en el lugar, en la administración de correos de él, dándose aviso por el juez á la dirección general de aduanas marítimas y fronterizas de dicho entero, para que esta pueda tomar las providencias convenientes. El mismo aviso deberá dar el comisionado ó administrador que lo recibiere, bajo la pena de responsabilidad por ocultación.

Para que lo dispuesto en ese artículo se cumpla puntualmente, dispone el 113 que: «En las guías que expidan las aduanas marítimas y fronterizas para los efectos extranjeros, se fije por plazo para su validez el número de días necesario y un tercio mas para llegar al destino que los interesados designen; y que pasado aquel tiempo sin que los efectos hayan llegado al punto en que debieran estar, atendiendo el término prefijado, las guías perderan su valor; pues debe inferirse que se ha intentado hacer un segundo viage protegido con guía que sirvió para otro. En tal caso queda obligado el conductor ó el dueño de la carga, á probar que por causa precisa ha tenido que demorarse. No probándolo, se reputará que dicha guía no fué expedida para aquella carga.»

Ya por otras muchas leyes anteriores estaba severamente prohibido internar efectos extranjeros sin las correspondientes guías, las cuales no pueden expedir las aduanas marítimas sin expresar en ellas la procedencia de los efectos, asegurándose, por la cuenta de importaciones que á cada comerciante deben llevar, de que el remitente tiene efectos importados legalmente de los que puede disponer para comerciar en el interior de la república. El artículo 15 de la ley de 24 de Febrero de 1837 previene á los administradores de aduanas

marítimas, que en las guías que extiendan expresen el buque en que fueron importados los efectos á los que se refieren las guías, la fecha de su arribo, el consignatario á quien vino y el número de la hoja del libro en que consta su despacho.

La ley de 24 de Diciembre de 1851 aunque dada para reglamentar el derecho de consumo, el cual ya no existe, á lo mismo con ese nombre, pues se le ha llamado posteriormente derecho de contraregistro; y en ninguno de esos impuestos tienen al presente interés los Estados; sin embargo, establecidos con varios objetos, siendo quizá el mas importante impedir por esos medios las importaciones fraudulentas, por cuya razon se dió una parte de esos impuestos á los Estados y por algun tiempo se les encargó su cobro; siendo como digo, el objeto principal de esa ley impedir el contrabando, no puede dudarse, de que están vigentes las prevenciones que contiene sobre la necesidad de extraer de las aduanas marítimas y fronterizas con guías los efectos que se remitan para el interior y sobre las condiciones que deben contener. Previene el artículo 11 de esa ley, que al expedirse las guías se tengan presentes las diversas disposiciones legales relativas á explicar la procedencia de las mercancías; y en el artículo 13 se ordena que, en los puertos y fronteras se ejerza la mayor vigilancia á la salida de los efectos, para que todos sean guiados como corresponde; cuya obligacion se les impone, con especialidad á los comandantes de celadores. Para que esas prevenciones no dejen de cumplirse por ningun motivo, el artículo 15 de la propia ley acuerda la manera de que las aduanas les lleven una cuenta de tal modo exacta á los importadores, que cada mes pueda saborse la cantidad de mercancías de que legalmente pueden disponer.

En primero de Julio de 1868 el ministro de hacienda resolvió la consulta que le hizo el administrador de la aduana fronteriza de Monterey Laredo, sobre si debía

pagar el derecho de circulacion el numerario que transitara de un Estado á otro y si era necesario ó indispensable que llegaran á la frontera amparados con guías los efectos que se dirigen á ella para su exportacion: á esa consulta se le respondió, manifestándole la necesidad indispensable de que cual quiera clase de efectos que se internen ó procuren exportarse han de caminar precisamente cubiertos con guías.

Apesar de la decidida proteccion que el supremo gobierno ha dispensado á la libertad del tráfico mercantil, por circular de 11 de Enero de 1869 se reencarga la necesidad de expresar en las guías que se expidan para conducir efectos al interior la procedencia de ellos, aun cuando esten legalmente nacionalizados.

Por último, por orden de 2 de Febrero de 1869 se reencarga á las aduanas marítimas la exactitud con que deben llevar á cada importador la cuenta de las existencias de efectos que legalmente deban tener, la cual se liquidará al fin de cada año, para que salgan enteramente conformes los pagos de derechos de importacion ó internacion.

Queda, pues, sentado como una verdad que no puede contradecirse, que de ningun puerto ó poblacion de la frontera pueden internarse efectos extranjeros sin la correspondiente guía y factura de los mismos; expresando pormenorizadamente la procedencia de ellos y estar satisfecho el pago de los derechos que han causado conforme á arancel. Esta verdad no se pone en contradiccion, y los demandados no pudiendo allanar esa dificultad, declinan á veces la responsabilidad de los consignatarios de Zacatecas, por hechos acontecidos con anterioridad á la fecha de las guías extendidas en el Saltillo; y á veces procuran salvarla pretendiendo que haya fé y constituya prueba el solo dicho de Don Antero Perez, de haber recibido de la casa de Bustamante y C^a de Mier las guías que expidió la aduana fronteriza de aquel punto para la

internacion de los efectos que de allí mismo sacó; pero no teniendo seguridad en esos medios de defensa, niegan que los efectos llegados á Zacatecas sean los mismos que Perez cargó en Mier.

Poco antes he copiado literalmente el art. 112 de la ley de 22 de Diciembre de 1849, el cual declara que las guías dadas por las aduanas marítimas ó fronterizas con los requisitos legales, son el único justificante de que los efectos extranjeros salidos de los puertos ó fronteras han pagado sus derechos de importacion é internacion; de manera, que segun allí mismo se ordena, los efectos que caminan sin guías quedan obligados, bajo pena de comiso, á que su dueño ó conductor prueben que han sido importados legalmente y pagados los derechos de arancel.

Cuando el juzgado de Distrito de Zacatecas abrió este juicio de comiso con tal objeto, y su promotor fiscal puso la demanda, no hicieron mas que cumplir con su deber; y esa demanda habria estado sobradamente motivada con solo manifestar duda de que los efectos introducidos no tuvieron pagados los derechos de importacion é internacion; y por ella los demandados están segun lo dispone el art. 112 de la ley de 22 de Diciembre de 1849, obligados á probar la legal importacion é internacion de esos efectos; por que no es un particular quien pone en duda que esos pagos se hayan verificado, sino el representante de la hacienda pública; y cuya duda le ha venido por la denuncia motivada que del contrabando hizo el ciudadano comandante del contra-resguardo de la frontera.

Segun lo dispuesto en el artículo que se acaba de citar, en cualquier tiempo y en cualquier punto en que se encuentre alguna cantidad de mercancías extranjeras y se dude de su legal importacion é internacion, el dueño, el consignatario ó el conductor están obligados, bajo pena de comiso de las mismas y de los trasportes, á probar ju-

dicialmente que la importacion é internacion se han hecho con sujecion á lo que las leyes disponen; esta obligacion en el presente caso no queda salvada con las guías expedidas en Saltillo: mas adelante me ocuparé de ellas y demostraré que no han podido amparar los doscientos noventa y cinco tercios.

Proténdese que el dicho de Perez haga fé y plena prueba, por lo que respecta á su acerto de haber recibido de la casa de Bustamante en Mier las guías que dió la aduana fronteriza de ese punto para cubrir los 150 tercios que de allí extrajo; pretendiese, además, que la fé de ese dicho y la prueba que él constituye se extienda á demostrar, ser cierto que presentó las guías y sus facturas en la seccion de Cerralvo para su exámen, anotacion y reconocimiento de la carga, segun lo dispone el art. 55 de la ley de 4 de Junio del año anterior.

Esa obligacion no está satisfecha, porque no está probado que los 150 tercios que recibió Perez en Mier hallan salido cubiertos con las guías correspondientes, extendidas en aquella aduana fronteriza, ni que en su tránsito haya el conductor cumplido con las prevenciones de la enunciada ley de 4 de Junio de 1870. El dicho de un testigo es efectivamente indivisible cuando se trata de un solo hecho; pero como el de Perez no se encuentra en este caso, porque comprende varios hechos, en unos hará fé por el concurso de otros testigos que declaran lo mismo, tal sucede con estos: haber cargado en Mier 150 tercios por la tarde y parte de la noche del dia 2 de Mayo; haber salido al dia siguiente, caminando por la noche y por el desierto hasta las cercanías del Saltillo; haber recibido allí 145 tercios que venian en unos carretones y haber continuado con ellos, no por el camino de Cedros que es el usual, sino por el que no transitan los carros, que pasa por san Cristóbal y el Salado hasta Zacatecas; en unos, repito, hará fé, por la razon senta-

da, y en otros no, porque se encuentra declarando él solo sobre ellos, porque estando interesado en acreditar la verdad de esos otros hechos no tiene imparcialidad, y porque siendo indispensable el concurso de otras personas, según el dicho del mismo testigo y la acción de funcionarios públicos, conforme las leyes lo determinan, para que tales hechos hayan podido verificarse, es absolutamente necesario que esas otras personas y esos funcionarios testifiquen la verdad del acerto; y lejos de suceder así, de las diligencias practicadas ha resultado lo contrario.

Que Perez llegó á Zacatecas con ocho carros de grande transporte cargados de efectos extranjeros, es una verdad material que no puede dudarse, supuesto que dichos efectos han sido aprehendidos, se hallan depositados, se ha dado fé judicial de ellos y los han reconocido dos peritos. Esa verdad nos demuestra de una manera evidente esta otra: en algun punto fueron cargados los carros con esos efectos. D. Antero Perez y cuatro de sus carreros, contra cuyos dichos no se ha producido prueba alguna, han manifestado que esos efectos fueron tomados parte en Mier y parte en el campo.

El conductor Perez dice, que la parte que tomó en Mier constituyen 150 bultos, que M. Bustamante remitió, con guías que le entregó él mismo, á D. Juan C. O'Sullivan del Saltillo, que pasó por la seccion de Cerralvo y allí entregó al corresponsal del remitente las guías y facturas para su examen y anotacion. Esto es falso, enteramente falso, y el mismo dicho de Perez lo demuestra así: él ha manifestado que recibió de Bustamante las guías; pero como añade que ignora su contenido porque no las vió, verdaderamente lo que asegura es haber recibido unos papeles que se le dieron por guías, y que no lo fueron, porque en la aduana de Mier no hay constancia alguna de haberlos expedido; é interpelado

Bustamante negó haber remitido tales efectos y dado á Perez esas guías, y manifestó que eso no pudo ser, porque hacia tres meses que habia puesto punto á sus negocios y no hacia ninguna transaccion mercantil.

Debo llamar seriamente la atencion de ese superior tribunal sobre el modo con que el juzgado comun de Mier practicó las diligencias que dieron tal resultado, porque eso demuestra la acción eficazísima que ejercen los que hacen el tráfico mercantil de contrabando para impedir que los tribunales lleguen á descubrir la verdad de los hechos. El 3 de Junio recibe el alcalde de Mier el exhorto del juzgado de Distrito de Zacatecas, consulta luego al de clase igual de Matamoras si practica las diligencias que se le encomiendan, y se le responde con fecha 5 que obsequie el exhorto: apenas examinado Bustamante le ordena el juzgado de Matamoras, por telégrafo, que suspenda la práctica de tales diligencias hasta que examine el exhorto, para lo cual le previene se lo remita; y para hacer tal calificación, como si se tratara de un expediente voluminoso ó de un negocio cuyo despacho no fuese urgente, ocupa 17 días el juzgado de Matamoras para dejar expedita la acción del alcalde de Mier. Entonces procede en ese mismo día á examinar el libro copiador de guías de la aduana fronteriza y en él no aparece ninguna para amparar efectos remitidos por Bustamante.

Aunque conforme á las bases de las leyes fundamentales de la República el comercio interior y exterior se hace bajo unas mismas reglas; pero el que se verifica por la frontera hay necesidad de fiscalizarlo mas, para que esas reglas no se quebranten con daño del tesoro público y de los comerciantes de buena fé. En el comercio marítimo puede ejercerse la vigilancia fiscal de una manera mas fácil, por las noticias que dan los cónsules de los certificados de despacho que expiden, porque los

buques se presentan á la vista desde muy largas distancias y no pueden, sin ser vistos, arribar á los puertos sino para desembarcar los efectos que traigan ó por causa de una grave necesidad; y porque la falta de poblacion en nuestras costas y de elementos para hacer el desembarque en las bahías y encenadas, no habilitadas para el comercio, impiden en cierto modo la importacion fraudulenta de efectos. Estos inconvenientes no existen en la frontera: un cargamento puede pasearse por la márjen opuesta del Bravo del modo que se quiera, por el tiempo y á las horas que le convenga á su dueño, á fin de poder pasar el límite divisorio sin que lo noten los empleados de las aduanas fronterizas, y situado ya en el territorio de la República sin muchos obstáculos se podría llevar al interior de ella.

Para evitar este mal, que mucho se agravó, como lo dice el O. Ministro de hacienda en su circular de 4 de Junio de 1870, con que acompañó el reglamento del resguardo de la frontera, por haberse avanzado nuestros límites con los Estados Unidos hácia el centro de nuestras grandes poblaciones, desde que eso sucedió se dictaron algunas disposiciones que impidiesen tal daño, siendo una de las mas notables la de 20 de Julio de 1850, la cual como dice el ciudadano ministro, sin estar derogada, no se ejecutaba por razon únicamente del estado de trastorno en que se hallaba la República, el que no permitia que el supremo gobierno se ocupara de establecer el contra-resguardo de la frontera. Aquella ley declaraba en su art. 11 que las funciones del contra-resguardo eran impedir la introduccion clandestina de efectos por el rio Bravo sin pagar los derechos de arancel, y para esto se le encomendaba en su art. 12 ejercer una fiscalizacion tan eficaz, que pudieran los empleados del contra-resguardo prolongar sus correrías hasta los Estados de Zacatecas, San Luis y Jalisco. Para que esa vigilancia pudiera ser eficaz,

se dispuso en el art. 13 de la misma ley, que todo efecto extranjero caminara precisamente con guías y factura, bajo la pena de comiso los que transitaran sin esos documentos; y como mediante algun mal arbitrio podría burlarse esa disposicion, se acordó en el art. 14 que no pudiera hacerse la internacion de efectos sin un certificado del jefe del contra-resguardo, que acreditara estar hecha la importacion ó internacion legalmente; y como podría haber casos en que los empleados del contra-resguardo sospecharan que no obstante las guías que cubrian los efectos se procurara hacer fraudulentamente la internacion, se les autorizó allí mismo, para que cuando eso sucediera pudiera procederse segun lo dispone la ley de 28 de Diciembre de 1843; esto es, averiguar la verdad mediante el juicio de comiso que debe practicarse.

No se creyeron bastantes esas prevenciones, para evitar el contrabando, y por lo mismo en los artículos siguientes se dispuso que, los administradores de las aduanas marítimas de Tampico y Matamoros y fronteriza de Camargo, dieran noticias al jefe del contra-resguardo de las guías que expedieran y de sus facturas, las cuales se asentarian en un libro y de ellas se daría conocimiento al supremo gobierno.

La experiencia acreditó dolorosamente, que esas precauciones para evitar el contrabando no eran demasiado eficaces, y hubo por esto necesidad de reorganizar el contra-resguardo de un modo mas minucioso y detallado en el reglamento de 4 de Junio del año anterior.

D. Antero Perez para trasportar los efectos que sacó de Mier, tuvo que someterse á todas estas prevenciones contenidas en ese reglamento; pues como conductor de efectos está singularmente obligado á conocer las leyes que fijan la manera de hacer el tráfico: la principal prevencion que á ese respecto le comprendia, era recibir las guías de mano del celador apostado en

la garita de salida y no de manos del comerciante remitente, y recibirlas con las anotaciones de cumplido en el día de su fecha, según lo disponen los artículos 43 y 45 del reglamento.

En esta obligación está contenida tácitamente otra no menos esencial, y es, la de que el conductor se ha de cerciorar por sí mismo de que los papeles que se le dan por facturas y guías lo son realmente, porque de no ser así, todas las leyes y el celo de las autoridades y funcionarios públicos serían impotentes para contener el fraude, supuesto que bastaba recurrir á un arbitrio tan débil para convertir en actos honestos los que se encaminaban á violar las leyes y defraudar el tesoro.

En la guía debe marcarse la ruta por la cual deben caminar los efectos, conforme lo dispone la fracción 3ª del art. 28 del mismo reglamento; demarcación que debe hacer el comandante del contra-resguardo, no como lo entienden los señores O'Reilly y Zelayeta que para cada caso hayan de ponerse de acuerdo el administrador de la aduana respectiva y el comandante del contra-resguardo: no es esto lo que dice la ley, ni es ese su espíritu, porque esto embarazaría el tráfico y haría imposible el cumplimiento del art. 43. Desde que se puso en ejecución el reglamento de 4 de Junio, el comandante y los administradores respectivos debieron acordar las rutas que deben marcarse á los efectos que se internen; y esa demarcación no se hizo en el presente caso, porque D. Antero Perez ha traído el camino del Desierto, no por habérsele fijado, sino porque así convino á sus miras.

Debió también Perez, según lo dispone el art. 55 del mismo reglamento, presentarse en su tránsito en la sección que se le hubiera fijado al marcar la ruta, y presentar por sí mismo, no por medio de otra persona, á su jefe las guías y facturas, para que las comparara con las copias que ya

debía haber recibido, y hallándolas conformes procediera al reconocimiento de la carga con arreglo á las fracciones 3ª y 4ª de la ordenanza de aduanas marítimas. Tampoco con esta prevención cumplió D. Antero Perez, porque en la sección de Cerralvo no hay noticia alguna de que se le hayan presentado esos documentos, ni D. Antero Perez tiene la conciencia de haberlos entregado á tercera persona para ese objeto, porque no habiendo leído los papeles que dice se le entregaron por guías y facturas, malamente puede asegurar que lo eran. Además, él no pudo continuar su viaje sin estar cierto de que tales documentos habían sido anotados y de que la carga había sido examinada y revisada, sentándose en los mismos la constancia respectiva.

Todavía debo precisar aun más la demostración de que D. Antero Perez ha sacado de Mier sin guías los efectos de que trata este juicio, porque conviene que la evidencia se manifieste con claridad material, supuesto que en el expediente existen otros muchos datos de que hacer uso para ese objeto.

Interrogado judicialmente el jefe superior de hacienda de Coahuila en 1º de Junio último, para que dijese cuáles eran las procedencias de las guías números 124, 126, 219 primero y 219 segundo que expidió en 8 de Mayo anterior, para remitir con Antero Perez, á la consignación de Ostermayer y D. Ramon C. Ortiz, los efectos aprehendidos en Zacatecas, manifestó que: tenían por origen las guías números 21 en la aduana de Monterey Laredo y 29, 47 y 87 expedidas en la aduana de Mier; y para justificar su acerto presentó al juzgado de Distrito de Coahuila los originales de esas guías, cuyo contenido es el siguiente.

“La guía número 21 fué expedida en Monterey Laredo en 4 de Marzo del presente año, á petición de Sanchez y Salinas para remitir con destino al Saltillo, Parras

y Durango 20 tercios á la consignacion de D. Juan C. O'Sullivan. Esa carga entró al Saltillo.

La guía número 29 fué dada en Mier en 7 de Noviembre del año próximo pasado á petición de Mayer Levy, para remitir con Eleuterio Garza 300 tercios al Saltillo, San Luis y Zacatecas á la consignacion de D. Juan C. O'Sullivan, de los cuales solo entraron 100 al Saltillo, por haberse consumido el resto antes de llegar á ese punto, y en 1º de Diciembre último fué amortizada la guía.

La número 47 expedida en Mier sin fecha, fué solicitada por D. Blas M. Zamorano, para remitir con Evaristo Martinez setenta y un tercios dirigidos á Parras, Zacatecas y Durango, á la consignacion de D. Ramon C. Ortiz. Esa carga entró al Saltillo y se amortizó la guía en 5 de Enero inmediato.

La guía número 87 expedida en Mier el 3 de Mayo del presente año, á petición de J. Martinez, para remitir 30 tercios con T. Rivera al Saltillo, San Luis y Guajuato, á la consignacion de O'Sullivan. Esa guía se presentó en Cerralvo y se revisó el mismo día su fecha.»

Estas guías no pueden ser la procedencia de los efectos que D. Antero Perez introdujo á Zacatecas. Ese conductor salió de Mier el día 3 de Mayo próximo pasado, hizo en 5 dias su camino al Saltillo; y como la guía número 21 de Laredo tiene fecha de 4 de Marzo, sin designar el conductor de los efectos que ella amparaba, es claro que tales efectos no son los mismos que Perez sacó de Mier, y que la guía no es legítima. Lo mismo sucede con la guía número 29 de Mier; siendo su fecha de 7 de Noviembre del año anterior, no pudo amparar los efectos que sacó Perez de aquel punto en 3 de Mayo, segun lo declaran muchas de las leyes que se han citado y mas particularmente los artículos 43, 44, 45, 46 y 47 del reglamento de 4 de Junio

del año anterior, por la obligacion en que el conductor está de sacar las mercancías de la poblacion en que se halla la aduana fronteriza, el mismo día en que se expide la guía, y por que el camino se ha de hacer en el tiempo que en ella se fija. En el propio caso se encuentra la guía núm. 47 de Mier cubriendo 71 tercios, que con Evaristo Martinez remitió D. Blas M. Zamorano dirigidos á Parras, Zacatecas y Durango, consignados á D. Ramon C. Ortiz; y menos que ninguna otra puede esa guía servir de procedencia, no solo porque el conductor es distinto, sino porque no teniendo fecha, no es guía, por faltarle la condicion quizá mas esencial que deben tener esa clase de documentos. Por último la guía número 87 dada en Mier en 3 de Mayo, tiene un vicio capital; no pudo examinarse y revisarse el mismo día en la seccion de Cerralvo, porque no es posible recorrer la distancia que hay de uno á otro punto en unas cuantas horas.

Debe llamarse la atencion sobre estos otros puntos: Perez y sus carreros declaran haber cargado los carros en Mier en la tarde y noche del 2 de Mayo último, y el primero asegura haber contratado el flete y recibido las guías: si él era el conductor y esas cuatro guías constituian la legal procedencia de los efectos, que él mismo sacó de Mier, su nombre debia de estar anotado en ellas, como el conductor de la carga; y el nombre de Perez no se ve en ninguna de esas guías; y Laredo y Mier no son una misma poblacion, ni sus dos aduanas constituyen una sola.

Hay todavía mayores y mejores datos que demuestran el fraude. Recordemos que está probado plenamente que los efectos introducidos á Zacatecas no entraron ni salieron del Saltillo; pero supongamos que está probado lo contrario; aun en este caso, se palpa el fraude, porque las cuatro guías de queso ha hecho mérito que amparaban en junto cuatrocientos veintiun tercios, solo

entraron al Saltillo doscientos veintiuno, por haberse consumido doscientos de los de la guía número 29 antes de llegar á ese punto. ¿Cómo pudo D. Juan C. O'Sullivan señalar como procedencias tales guías para que se le expidieran los números 124 126, 219 primero y 219 segundo, las que debían amparar doscientos noventa y cinco tercios, no quedándole ni habiendo entrado al Saltillo mas que doscientos veintiuno? ¿Y cómo pudo el jefe superior de hacienda de Coahuila expedir esas guías, cuando de las constancias de procedencias resulta, que O'Sullivan solo podía disponer de doscientos veintiun tercios y que faltaban setenta y cuatro para los doscientos noventa y cinco?

En la seccion principal del contra-resguardo de la frontera no hay mas noticias de esas guías, segun manifestó su jefe en comunicacion oficial de 21 de Mayo, que estas: que la guía número 21 fué expedida en Laredo en 4 de Marzo último; y que la 47 fué dada en Mier en 19 de Diciembre próximo pasado: no hay ninguna noticia respecto de la guía de Mier número 29; y manifiesta que de la número 87 solo la seccion cuarta podría tener algun dato; pero los que tiene esa seccion, se refieren á la guía número 76 dada en Mier en primero de Mayo, para cubrir veinticinco bultos remitidos por C. Castro, con un tal Perez, con destino al Saltillo, Durango y Chihuahua, á consignacion de D. Juan C. O'Sullivan; por consiguiente, no habiendo tenido noticia las oficinas del contra-resguardo, de haberse expedido las guías 29 y 87, no pueden ser legítimas, ni constituir origen de procedencias, segun lo determinan los artículos 39 y 55 del reglamento del contra-resguardo, pues el objeto de su establecimiento es que, ningunas mercancías pueden internarse sin que de ello tengan noticia sus empleados, para que examinen y revisen las guías y documentos, y reconozcan la carga.

Para que no haya lugar á ningun géne-

ro de duda, sobre que la casa de Bustamante y compañía de Mier no remitió en 3 de Mayo ningunos efectos, amparados con guías, y que tampoco al conductor D. Antero Perez se le dieron ningunas, en las cuales aparezca su nombre, conviene ver las doce copias de las guías expedidas en aquella aduana de Mier en los primeros dias de Mayo: todas ellas solo amparaban ciento setenta tercios, y no todos de ropa, una parte muy considerable eran abarrotes; solo en seis figura el nombre de O'Sullivan como consignatario de ciento veinticuatro tercios, y solo en una de esas seis, aparece como conductor de veinticinco bultos un tal Perez, que será el mismo D. Antero ó algun otro, no lo sabemos, y la obligacion de averiguarlo ó demostrarlo pertenecia á los demandados.

Para concluir este punto, haré estas últimas observaciones: de las noticias que obran en la seccion principal del contra-resguardo de la frontera, acerca de mercancías introducidas al Saltillo y salidas de esa poblacion, resulta.

Primero; que al Saltillo entraron 43 bultos de imperial, y salieron 93 de diversa clase de los que entraron.

Segunda; que las indianas salidas del Saltillo son de diversa y mejor clase de las que entraron.

Tercera; del Madapolam remitido del Saltillo, 24 tercios tienen distinta marca de los introducidos y diez no tienen ninguna.

Cuarta; el dril, la cotonada y el hilo bolita extraídos del Saltillo, no tienen marca ninguna, y la tenían los introducidos.

Quinta; de lustrina entró un tercio y salieron seis sin marca y sin número.

Sesta; el dril que entró es de distinta clase del que salió.

Sétima; entraron siete tercios de pañuelos, y salieron diez sin marca y sin número.

Octava; entró un tercio de casimir y salieron dos.

Novena; entraron tres tercios cinta de algodón y salieron cuatro.

Décima; entraron cuatro tercios de cotí, de 27 pulgadas, y salieron tres de setenta y cuatro y setenta y cinco pulgadas.

Undécima; Té y escosese no entraron y sin embargo salieron.

Demostrado como queda, que los efectos que sacó de Mier D. Antero Perez, y se introdujeron á Zacatecas, fueron internados, de contrabando, continuaré examinando el valor que tengan las guías números 124, 126, 219 primero, y 219 segundo y la fé que merezcan.

Cuarto; estando demostrado hasta la evidencia, que la carga que sacó de Mier D. Antero Perez no vino amparada con guías expedidas por aquella aduana fronteriza, ni presentada para su exámen y registro en alguna de las secciones del contra-resguardo, debo ocuparme ya de examinar el valor de las guías dadas por el jefe superior de hacienda de Coahuila, de las facturas que forman parte esencial de las mismas, y del modo con que se hizo el camino del Labrador á Zacatecas.

Los demandados vienen sosteniendo desde la primera instancia, que la ordenanza general de aduanas marítimas no puede tener aplicacion alguna, tratándose del comercio interior, porque los terceros poseedores no pueden ser responsables por hechos ajenos, acontecidos en tiempo y lugares que ni á su noticia habian llegado; porque de otra manera, el comercio recibiría un golpe de muerte, supuesto que nadie, haciendo el tráfico en el interior, podría estar seguro de que no se le obligara en algun punto á pagar los derechos marítimos. Partiendo de esos principios, creen que el artículo 40 de la ley de 28 de Diciembre de 1843, no tiene aplicacion en casos como el presente, porque la obligacion que impone á los consignatarios de apersonarse en los juicios de comiso y responder á la demanda, debe entenderse respecto de aquellos consignatarios, que tienen participio y complicidad en el fraude cometido, ó que se intenta cometer; y creen tambien, que conforme al

artículo 65 de la ley de 4 de Junio del año próximo pasado, tampoco es aplicable la parte penal de la propia ley de Diciembre, porque conforme á la circular de 4 de Junio del año anterior, y reglamentos del contra-resguardo, solo podría en este caso imponerse la pena de que hablan la fraccion cuarta de los artículos 23 y 24 de la ordenanza de aduanas marítimas, que consiste en el pago de dobles derechos de importacion y triplos de internacion: que habiendo entrado los efectos á Zacatecas, para hacer el comercio interior, de un punto á otro del interior, cubiertos con guías expedidas con entera sujecion á lo dispuesto en el artículo octavo de la citada ley de 28 de Diciembre, por un funcionario legal, el presente caso debe juzgarse, con arreglo á esa ley de Diciembre, que es la que norma la manera de hacer el tráfico interior, y no por la ordenanza de aduanas marítimas, cuyo objeto es reglamentar la manera de hacer el comercio con el extranjero; por cuyo motivo, las guías del Saltillo no han menester precedencias, ó el remitente pudo con toda legalidad presentar como tales las primeras que se le vinieron á la mano.

El señor D. Manuel Rios Ibarrola, en su informe de 11 de Julio, esforzó su razonamiento con muchísima detencion, procurando darle una interpretacion violenta al artículo cuarto de la ley de 28 de Diciembre de 1843. Es indispensable detenernos un poco en analizar esa interpretacion, para demostrar que ha sido necesario olvidar completamente los principios de la ciencia, y dar positivo tormento á las doctrinas de los autores que se citan, para producir las doctrinas que en aquel alegato se exponen. Con solo el auxilio de esos mismos libros se puede impugnar fácil y victoriosamente al señor Ibarrola.

El dice, que en el foro mexicano no hay noticia de que se haya seguido ante los tribunales un negocio igual al presente, porque la multitud de juicios que han tenido

lugar por infracción de las leyes que establecen los derechos de importación ó internación, jamás se ha sustanciado con terceros poseedores, que no pueden ser responsables de hechos ajenos: que si esto no fuera así, nadie estará seguro de no ser arrastrado á los tribunales para responder á la demanda que en su contra se pusiera sobre pago de derechos marítimos; aunque los efectos que recibía hubieran pasado por varios poseedores ó ignorado el puerto ó punto por donde se hizo la importación de los mismos y el nombre del importador. En confirmación de esas sus opiniones, llama la atención sobre lo que acontece ó puede acontecer en la feria del Saltillo, á donde concurren mercaderes y compran de buena fé efectos cuya procedencia ignoran y no indagán.

Entiende aquel abogado que el obrar así importa una notoria injusticia, motivada por la inteligencia que se dá al artículo 40 de la mencionada ley; y para demostrar eso hace grandes esfuerzos, procurando interpretar ese artículo, fijándole la inteligencia de que él solo se refiere á los consignatarios autores del contrabando; y como á su juicio los demandados no se hallan en ese caso desconoce y declina la obligación, que tengan de seguir el presente juicio.

Funda sus opiniones en el párrafo 5º de la palabra interpretación del Diccionario razonado de Escribano, en donde tal autor fija muy sabias reglas para la interpretación doctrinal de las leyes; las cuales en compendio se reducen, á que en todas las leyes debe mas bien atenderse á la equidad de su espíritu que al rigor que aparezca en el texto, y que en las leyes penales y en todas las demás odiosas, en caso de duda deben interpretarse restringiendo su disposición y no extendiéndola á otros casos fuera de los que marcan.

Las lecciones del célebre jurista Ever Bronchorst, en sus comentarios á las reglas de derecho, sirvieron también al Sr.

Ibarrola en su difícil tarea, y por ellas cree que el consignatario no puede estar obligado á responder á la demanda, motivada en hechos que no le pertenecen y que ignorándolos, quizá, no sabe cuál sea la excepción legítima que salve los intereses que se le confían y que valgan acaso la suerte y el porvenir de una familia; siendo tanto mas difícil su posición, cuanto que los angustiados términos que la ley fija, no le permiten el tiempo necesario para recabar instrucciones y solicitar antecedentes con que hacer la defensa de esos intereses. Encuentra esos principios absolutamente conformes con la disposición de las leyes 18 tit. 34 y 9 tit. 31 part. 7ª que prohíben, que á nadie pueda castigarse por culpa ó delito de otro; y con la garantía asegurada en el art. 22 de la Constitución federal, que veda expresamente las penas trascedentes.

Tres consecuencias deduce de esos principios el Sr. Ibarrola: que los consignatarios de que habla el art. 40 de la pauta de comisos, no son todos los que aparecen como tales, sino únicamente aquellos que tuvieron participación en el contrabando ó fraude: que siendo los demandados consignatarios para la remisión de las mercancías del Saltillo á Zacatecas, deberán responder de la legalidad de ese envío ó introducción á esa capital ante los tribunales particulares del Estado; pero dudando que con esas demostraciones pudiera salvar de la demanda á los señores Ostermayer y compañía, por la obligación que comprende, que está afecta indeleblemente á las mercancías, procura también allanar esa insuperable dificultad, intentando demostrar que esa obligación no existe, porque la única ley de que se supone podría deducirse, es la 26 tit. 13 part. 5ª; la cual á su juicio no es aplicable, porque ella se refiere al tributo que causan los predios; y cree que tampoco exista hipoteca en favor de la hacienda pública sobre las mercancías apre-

hendidias, porque segun las sanas doctrinas de D. Eugenio de Tapia sobre esa materia, la hipoteca es universal ó singular; aquella aunque comprende todos los bienes del deudor no impide su legal enagenacion; y la otra ha menester esencialmente para que exista que se constituya por escritura pública.

Y para que esas doctrinas se admitan sin contradiccion, como si fueran axiomas, aplicándolas al presente caso, manifiesta: que el contrabando que se persigue entraña un delito, y por razon de delito, á juicio del Sr. Gregorio Lopez en su comentario á la enunciada ley 26 tít. 13 part. 5ª, el fisco no tiene hipoteca en los bienes del delincuente, sino despues de pronunciada sentencia en su contra, ó cuando el delito se hubiera cometido en el mismo suelo fiscal en donde se persigue; y delito de tal manera grave, que el párrafo 2º del art. 26 de la última ordenanza de aduanas marítimas lo castiga con las penas de presidio, publicacion del nombre de los delinquentes y nulificacion de su firma en todo acto oficial ó mercantil.

Se avanza tanto el Sr. Ibarrola en su celo exagerado por defender la causa que patrocina, que supone ser mas cruel esa pena que la permitida en el art. 23 de la Constitucion federal para castigar al traidor á la patria, al salteador, al incendiario, al parricida y al homicida alevoso.

La interpretacion que se dá al art. 40 de la pauta de comisos es violenta por demas é inconforme con los mismos principios que se invocan para justificarla. Esto puede demostrarse con solo exponer el texto de ese art; véamoslo:

“Verificada la aprehension de los efectos, y dado al juez competente el aviso respectivo, procederá este á emplazar para el juicio á las partes, entendiéndose por tal con respecto al reo, el dueño del cargamento, ó el consignatario, ó el que fuere apoderado legítimo de uno á otro, ó el que

prestare caucion de rato et grato. Para el efecto de que tratan los artículos 26 y 29 se estimará tambien por parte del juicio al dueño de las bestias ó carros en que se conduzcan los efectos. En el emplazamiento se señalará á la parte el término preciso dentro del cual debe comparecer; y para ello se tendrá en consideracion la distancia de los lugares: no compareciendo las partes dentro del término fijado, se seguirá en rebeldía el juicio con los estrados del tribunal.»

La interpretacion es, segun el mismo Sr. Escribiche, auténtica, usual y doctrinal: la primera solo puede darla el legislador; la segunda corresponde á los tribunales y la tercera es obra de la razon en aquellas leyes de sentido ambiguo ó equívoco ó en las que estan concebidas en conceptos de tal manera oscuros, que sea necesario fijarles para su cumplimiento alguna inteligencia.

Leyes habrá cuyo texto entrañe crueldad excesiva ó inconveniencia notoria; pero siendo claras, no hay necesidad de ocurrir al legislador solicitando la interpretacion que no necesitan: en esos casos se le pedirá su reforma ó derogacion.

Los tribunales que no pueden eludir el cumplimiento de la ley, en la aplicacion que de ella tienen que hacer, á pretesto de oscuridad, pueden legalmente fijarle su inteligencia, auxiliados de los buenos principios de la ciencia y de la ilustracion que se supone poseen las personas que administran justicia; y cuando uniformemente por todos los tribunales se entiende en un mismo sentido la ley oscura y dudosa, la interpretacion usual queda formada, sirviendo de complemento ó aclaracion á la propia ley.

La interpretacion doctrinal la constituye la razon; ella no tiene mas autoridad que la que tiene la misma razon, que la aconseja; por esa razon no siempre puede extenderse en el espacioso y libre terreno de la filosofía. Bien está que cuando la ley

es oscura el jurista puede hacer uso de toda su razón, buscando su natural sentido, para ilustrar á los tribunales que deben aplicarla; pero cuando en la ley no hay oscuridad, duda ni equívoco de ninguna especie, entonces no puede hacer otra cosa que poner en armonía las diversas partes del texto de la ley.

El Sr. Ibarrola ha querido combatir la inteligencia que en este negocio se está dando al art. 40 de la pauta, diciendo de una manera encubierta, que ningún tribunal lo ha entendido en el sentido que lo entendió el juzgado de Distrito de Zacatecas, porque en los anales del foro no hay noticia de que ante los tribunales se haya seguido un juicio igual al presente. Esto no es cierto: multitud de casos podrían referirse iguales al que nos ocupa; pero el que habla se ha propuesto no asegurar bajo su sola palabra, y por esto se concreta á citar los que se ven publicados en el Semanario Judicial de la Federación: en la pág. 80 y siguientes de la 2ª parte se miran la sentencia del juzgado de Distrito de Coahuila, el pedimento del C. promotor fiscal del superior tribunal de Circuito de Monterey, la sentencia de ese mismo tribunal, el pedimento del C. procurador general de la nación y la sentencia de la 1ª sala de la Suprema Corte de Justicia de la República, en el juicio sobre comiso de 15 bultos de mercancías extranjeras aprehendidas á D. Donato Volpe, en la villa de Candela, en la casa del cura párroco de aquel lugar. Esos efectos procedían inmediatamente de la ciudad de Guerrero, punto que no es puerto, ni aduana fronteriza; y que por lo mismo allí no pudieron llegar sino procediendo de algun puerto, que según el interesado fué el de Matamoros, ó de alguna aduana fronteriza; por consiguiente, cuando esos efectos llegaron á Guerrero ya debían estar nacionalizados, y al comerciar con ellos, remitiéndolos á Candela, se hacía con los mismos el comercio interior de efectos nacionales, por repu-

tarse así los que están nacionalizados. El ministerio público por la voz de dos personas caracterizadas, siendo de llamar la atención la respuesta detenida y altamente razonada del ilustrado promotor fiscal del Circuito de Monterey y la del C. procurador, porque á su proverbial ilustración reúne su celo intransigente por respetar y hacer que se respeten los preceptos constitucionales, y la resolución de dos tribunales caracterizados, todos uniformemente juzgaron ese negocio con arreglo á la pauta de comisos, pidiendo y declarando el comiso de los efectos aprehendidos.

En la pág. 112 y siguientes de la 2ª parte del mismo Semanario Judicial, aparecen los pedimentos de los CC. promotor fiscal del superior tribunal de Circuito de Monterey y del procurador general de la nación y las sentencias de ese mismo tribunal, del juzgado de Distrito de Coahuila y de la 1ª sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, sentadas y dictadas en el juicio sobre comiso de efectos extranjeros, aprehendidos en la villa de Marín, en la casa de D. Isidoro Guerrero, de la propiedad de D. Juan Fernandez. Este juicio también se trató y resolvió condenando los efectos á la pena de comiso, lo mismo que sucedió en el otro con arreglo á la pauta de comisos, en lo que estuvieron perfectamente de acuerdo los funcionarios públicos y magistrados que intervinieron en él; y debe llamarse la atención en que, Marín es población bastante avanzada hacia el centro de nuestras grandes poblaciones; y sin embargo, esos casos se han juzgado con arreglo á la pauta de comisos, porque como lo demostraré mas adelante, al presente, su puesta la absoluta libertad mercantil, el objeto único de esa ley es hacer efectivas las prevenciones de la ordenanza de aduanas marítimas sobre exportación de efectos, importación é internación de mercancías extranjeras.

He dicho antes, y debo repetirlo, que el objeto de esa ley y de las demás que le

son relativas, es impedir el fraude, procurando que la importacion y exportacion de mercancías se hagan conforme á las prevenciones que fija la ordenanza de aduanas marítimas, y por esto debemos ver un solo todo, ó expresándome mejor, una misma legislación, uniforme con su texto y espíritu, en la ordenanza de aduanas, en el reglamento de 4 de Junio, en la ley de 28 de Diciembre y en las demas leyes y disposiciones que les son relativas.

El C. promotor fiscal del juzgado de Distrito de Zacatecas y el C. juez del mismo no han incurrido en la absurda contradicción que se les imputa, calificando y juzgando á veces de comercio interior la introducción de los efectos aprehendidos en aquella capital y á veces de comercio con el extranjero, para aplicar en unas ocasiones, al presente asunto, la pauta de comisos y para aplicarle en otros la ordenanza de aduanas marítimas. Aquella autoridad y aquel funcionario han modelado su conducta á los principios que quedan sentados, y visto este negocio como lo vé el que habla, hallando en él un tráfico de mercancías extranjeras, que no han sido importadas con arreglo á las prescripciones de la ordenanza; y como el objeto del comercio con el extranjero no es traer las mercancías á los puertos ó poblaciones de la frontera para que allí se consuman, sino internarlas para venderlas en toda la República, es preciso que esa clase de comercio se haga mediante dos operaciones: la importación, cuya legalidad al tiempo de hacerse, corresponde calificar á los empleados de las aduanas marítimas y fronterizas; y la internación cuyo origen legal deben darlo los empleados de las mismas aduanas, pero cuyo exámen sobre la legalidad con que se han ya hecho corresponde á todas las autoridades y funcionarios de la federación y de los Estados y aun á los simples particulares, quienes conforme á las leyes de que al principio se hizo mérito, tienen el derecho y la obligación de inquirir los casos

de fraude, pudiendo hasta aprehender los efectos que se introduzcan de contrabando.

Las prevenciones de la ordenanza se concretan únicamente á reglamentar el modo de hacer las importaciones y exportaciones; pero la internación de las mercancías y la conducción de ellas á los puntos y fronteras, es objeto de leyes, que, en falta de otra palabra mas significativa, les llamaré secundarias, reglamentarias ó complementarias.

Cuando en el mismo puerto ó población de la frontera en que haya aduana se trate de averiguar si la importación se hizo legalmente, por las solas prevenciones de la ordenanza podrá hacerse esa averiguación y resolverse ese punto; mas tratándose de saber si las mercancías se han importado ó internado legalmente, esto no puede saberse ni resolverse con resolverse con solo el auxilio de la ordenanza, es preciso tener entonces presente lo que disponen aquellas leyes complementarias, sobre el modo de sacar los efectos de los puertos y fronteras y la manera en que se haya de hacer el camino.

Se han repetido las guías expedidas en Saltillo como ilegítimas, por no estar ajustadas á los preceptos de las leyes y porque ellas no han servido mas que para procurar encubrir el fraude: uno y otro cargo es fácil demostrarlo.

El art. 3º de la ley de 28 de Marzo de 1853, dispone que: la legítima importación se prueba citando en la guía marítima el nombre del buque en que se importaron los efectos, la fecha de su arribo, la hoja del libro donde consta su despacho y que los efectos que contiene la factura respectiva se han reconocido en el puerto.

El art. 4º de la propia ley ordena que: la citación legal se demuestre haciendo referencia pormenorizada en la guía terrestre de la marítima de que proceden los efectos que aquella contiene.

Aunque los efectos de esa ley, en esa parte, fueron suspendidos por la orden de

2 de Junio del mismo año, el art. 8º de la ley de 13 de Julio siguiente, restituyó en todo su vigor esas disposiciones.

Los preceptos de esas leyes están perfectamente de acuerdo con el precepto del art. 8º de la ley de 28 de Diciembre de 1843 y con los contenidos en los 111, 112, 113 y 114 del reglamento de 22 de Diciembre de 1849; así como con la provencion 4ª de la circular de 20 de Agosto de 1856.

Esos casos recientes, que han tenido lugar en los tribunales, demuestran que uniformemente, con arreglo á la pauta de comisos se tratan y resuelven todas las cuestiones que se presentan sobre internacion fraudulenta de efectos extrajeros, aprehendidos en el interior de la república; y se les aplica pena de comiso cuando el contrabando ó fraude aparecen averiguados, no porque esa pena está establecida en esa ley, sino principalmente porque es la señalada en la ordenanza de aduanas marítimas, á la cual la otra le sirve de complemento.

Se ha querido interpretar el art. 40 de la pauta, usando las reglas que sientan aquellos autores para la interpretacion doctrinal; pero tomando de ellas solamente la parte que sirva para ese objeto, y guardando silencio sobre las demas reglas que condenan claramente la interpretacion que dá el S. Ibarrola.

El art. 40 de la pauta ya lo hemos visto; está concebido en términos muy claros: Él dispone, que verificada la aprehension de los efectos se proceda á celebrar el juicio correspondiente emplazando á las partes para tal objeto; y entendiéndose por tales, con respecto al reo, el dueño del cargamento ó el consignatario, ó el que fuere apoderado legítimo de uno ú otro, ó el que prestare caucion de grato et-rato. Estima tambien como parte, al dueño de los trasportes por las obligaciones que se le impone en los artículos 26 y 29 de la propia ley. Como puede acontecer que la parte demandada no se encuentre en el lugar en que el

juicio debe celebrarse, provcyendo á esa dificultad, dispone que en el emplazamiento se señale un término mas ó menos largo, segun la distancia de los lugares en que se encuentren los demandados.

No puede haber mas claridad en el texto de ese artículo, y por lo mismo, para su aplicacion debemos acoger las doctrinas que el Sr. Escribano sienta en el 5º punto de su artículo Interpretacion, las cuales condenan la violencia que le hacen los demandados á ese artículo para fijar su genuino sentido.

Ese autor enseña que: "Cuando la ley está concebida con palabras tan claras, que en ellas aparece bien expresa y terminante la voluntad del legislador, no debemos eludir su tenor literal á pretexto de penetrar en su espíritu" ¿qué palabra ó qué concepto haya equívoco, dudoso ó oscuro en esa ley? Yo no lo encuentro y los demandados no lo han señalado ni menos han demostrado que exista tal oscuridad.

"Las palabras de la ley, dice el mismo autor, deben entenderse segun su significacion propia y natural, á no constar que el legislador las entendió de otro modo. Si las palabras tienen dos significaciones, una propia y otra impropia, debe estarse á la propia y no á la impropia; y si tiene dos significaciones propias, no ha de tomarse sino la que viene mas al caso segun la materia de que se trata. El sentido propio y genuino de las palabras no se debe tergiversar con interpretacion arbitraria.

Nada en ese artículo indica que el legislador haya querido decir ó disponer distinta cosa de la que dijo y dispuso con perfecta claridad en el art. 40 de esa ley; ni hay en él palabra alguna que tenga varias acepciones; por consiguiente debemos entenderlo y aplicarlo literalmente, porque no hay necesidad de interpretarlo.

"Cuando la ley no hace excepcion alguna, añade el Sr. Escribano, pudiendo haberla hecho, y ni de las palabras ni de la razon se deduce que la ley deba limitarse,

no podemos separarnos de su disposicion general por medio de una distincion que ella no ha hecho. De aquí el axioma comun de los juristas: *Ubi lex non distinguit nec distnosguere debeimur*. El juez que hiciere alguna excepcion concebida en términos generales y absolutos, comete una arbitrariedad, un atentado, un exceso de poder."

El art. 40 contiene preceptos absolutos; no hace excepcion de ninguna especie y allana cualquiera dificultad que pudiera ofrecerse para su exacto cumplimiento; ni de sus palabras ni de la razon que se tuvo al dictarlas, como lo veremos mas adelante, se deduce que pueda legalmente hacerse distincion de consignatarios de buena y consignatarios de mala fé; y por lo tanto, no nos es permitido limitar de ningun modo las disposiciones que él contiene.

Comentando Ever Bronchorst esta regla: "En todas las cosas, y muy particularmente en el derecho, debe atenderse á la equidad, que enseña; que en la aplicacion de las leyes se toma mas en cuenta la misma equidad, que debe servir de norma para su justa inteligencia, que el rigor del espíritu que se desprenda de su texto;" pero pudiendo abusarse de sus doctrinas para vulnerar la ley, fundándose en las mismas, termina su comentario explicando el sentido de ellas; y con este propósito dice: "Lo dicho debe entenderse que tiene aplicacion en los casos dudosos; pues si el espíritu de la ley fuese claro, y sus palabras expresas y terminantes, no habria entonces lugar á la equidad, sino que deberia aplicarse la ley en todo su vigor," siguiendo el consejo del jurisconsulto Paulo, que con este motivo dice. "Esto, á la verdad, es muy duro; pero así está escrito en la ley."

Acábase de demostrar que de la equidad no puede hacerse uso en el presente caso, por la claridad del precepto de la ley, que con solo la misma equidad se quiere combatir.

No habria habido necesidad de detener-

nos en el exámen é impugnacion de las doctrinas que asientan los demandados, cuando hay leyes terminantes que los condenan del modo mas claro. La 14 del tít. 1º Part. 1ª, manda que: "Dudosas seyendo las leyes por lperro de escriptura, ó por mal entendimiento del que las leyere: porque debiesen de ser bien espalaclinadas, ó facer entender la verdad de ellas; esto non puede ser por otro fecho, sino por aquel que las fizo, ó por otro que sea en su lugar, que haya poder de las facer de nuevo, ó guardar aquellas fechas. Las leyes 2ª, tít. 1º de la siguiente partida y la 4ª del tít. 33 de la 7ª, concuerdan perfectamente con la que se acaba de copiar; y conforme á las leyes fundamentales del país al poder legislativo corresponde exclusivamente dar la ley y por lo mismo, siendo dudoso aclarar su texto ó espíritu, á los tribunales pertenece solamente aplicarla sujetándose á las reglas que quedan sentadas.

Queda demostrado que los consignatarios de que habla el art. 10 de la Pauta de comisos son todos los que aparecen con ese carácter; pero supondré con los demandados que ese artículo deba sufrir la distincion que se hace de consignatarios de buena fé y consignatarios de mala fé, y que deba entenderse en el sentido de que la disposicion que él contiene se aplique únicamente á los segundos; aun en este caso los demandados están perfectamente comprendidos en la disposicion de dicho artículo 40.

El, no estrecha de una manera indeclinable al consignatario á responder á la demanda que se ponga contra la ilegal introduccion ó tránsito de mercancías, dice solamente que se empieza para la celebracion del juicio á las partes, entendiéndose por tales con respecto al reo, el dueño ó remitente del cargamento, el de los transportes y el consignatario. Si este último por cualquiera motivo cree que no está obligado á probar la legalidad del tráfico de las mercancías aprehendidas, lo bastará

manifestarlo así, para que el Juzgado proceda á emplazar al dueño ó remitente de los efectos; fijándole, como lo manda la ley, un plazo cómodo, teniendo en consideración la distancia del lugar en que se encuentra, para que pueda comparecer, por sí ó por apoderado á salvar sus efectos del comiso ó del recargo de impuestos.

El consignatario puede estar colocado en estas tres posiciones: de dueño de los efectos que recibe por habérselos remitido la persona á quien comisionó que se los comprara de comisionista encargado de recibirlos y venderlos por cuenta de otra persona, según las instrucciones que se le hayan dado previa y oportunamente; ó de persona que no tiene ningún interés en los efectos ó ignoraba hasta la remisión de los mismos.

En el primer caso, su comisionista encargado de hacer la compra ó remisión deberá haber obrado sujetándose á las instrucciones que se le hayan dado; si lo ha hecho así, la responsabilidad del contrabando ó fraude será exclusivamente del consignatario, dueño de los efectos; pero si por no haberse apegado á esas instrucciones ó por ignorancia de las leyes fiscales, el remitente hizo el envío, sin los requisitos y formalidades que fijan esas leyes, la responsabilidad del fraude ó contrabando es enteramente suya, y el perjudicado podrá exigírselo, demandándole la reparación de daños y perjuicios, sea que él mismo se apersona en el juicio á defender sus efectos, ó bien decline este deber en el que aparece como remitente de las mercancías.

Además, aun sin esa explicación final, que tanto limita las anteriores doctrinas, no debemos acoger sin mucho examen las definiciones, que con referencia á Oedendorpio y Ciceron se dan en ese comentario de la palabra equidad, diciendo que es moderación de la ley escrita, atendiendo á la diversidad de las circunstancias; esto es, de las cosas, de las personas, de los lugares

y de los tiempos; ó dilatación de la ley, porque en virtud de alguna circunstancia mitiga ó modera la ley escrita. Tampoco debe acogerse la otra definición de Hostienso, quien cree que la equidad es la justicia templada por la dulzura de la misericordia.

El mismo Ever Bronchorst no acoge, solo expone, esas definiciones; pues junto á ellas pone otras de Aristóteles y de otros autores cuyos nombres calla á juicio de estos, equidad es la razón natural colocada en mente de buen varón ó el suplemento de la ley escrita. Estas definiciones son á mi juicio rectas; y van de acuerdo perfectamente con la idea que de esa palabra tiene el jurisconsulto Falck, quien procura rectificar las inexactas que pudieran tenerse sobre la misma. El dice que: «La idea que se atribuye á la equidad es muy incierta y vaga. Aplicadas las reglas del derecho, la equidad no puede significar sino el conjunto de estas reglas, buenas, útiles y apropiadas á cada uno de los casos que se presentan, pero cuya necesidad no puede demostrarse, ni por motivos históricos ni racionales. La aplicación de la equidad á los negocios jurídicos procede de una imperfección de conocimientos bastante común aun respecto de las personas mas instruidas: es un expediente á que se recurre cuando no se sabe hallar el derecho propiamente dicho.

Si tan solo es consignatario comisionista y se le han dado noticia ó instrucciones previas y oportunas sobre el envío de los efectos y destino que deba darlos, los hechos ó comisiones que hagan caer á las mercancías en comiso ó sufrir recargo de impuestos, no serán por su cuenta sino por la de quien las remitió. Y en este caso, también tiene plena libertad de apersonarse en el juicio ó dejar que lo haga el verdadero interesado.

Si careciendo de interés en los efectos que se aprehenden, aparece como consignatario, tan solo porque en las guías y facturas se dice que los efectos se le remitan á

61; pero careciendo de noticia del envío de los efectos y de instrucciones de lo que deba hacer con ellos, con mas derechos en este caso, puede declinar la obligacion de demostrar la legalidad con que se ha hecho la remision; y no declinando esa obligacion, se coloca espontáneamente en el caso que supone el mismo artículo 40, de una tercera persona, de un extraño que oficiosamente, dando caucion de rato et grato viene á defender los intereses de otro; en cuyo caso, quedará obligado á responder al dueño de los efectos del mal que le venga, si hubiere habido culpa en el modo de hacer la defensa.

En cualquiera de estos tres casos, que son los únicos en que puede hallarse el consignatario, no puede acusarse de injusto ó inicuo el literal texto del artículo 40 de la pauta, porque sobre la amplitud de término que concede, para que el que tenga interés en salvar los efectos comparezca en el juicio, la obligacion que de hacerlo impone al reo, no se contrae exclusivamente al consignatario, esa obligacion es disyuntiva, comprende al remitente ó al consignatario, á aquel por falta ó resistencia de este.

En conceptos mas precisos puede manifestarse con mucha claridad la situacion de todo consignatario: tiene ó no tiene interés en los efectos que se le remiten; se le ha dado ó no aviso de su envío ó instrucciones del destino que deba darlos. Si tiene interés, este mismo le hará que salga á la defensa de los efectos; pero cualquier daño será de su cuenta ó del remitente, segun se hayan convenido en el modo de obrar.

En ningun caso, pues, puede acontecer lo que se supone, que por falta del tiempo necesario para recabar antecedentes ó instrucciones para hacer la defensa de una causa de comiso, de cuyo éxito dependa la fortuna de un individuo, deba hacerlo forzosamente una persona que no sabe cual sea la excepcion de hechos, con la que pue-

da defender los efectos contra los que se procede.

Visto así el carácter del consignatario y el papel que puede representar en un juicio de comiso, se comprende que las leyes 18 título 24 y 9 título 31, que prohíben que á nadie pueda castigarse por culpa ó delito de otro, no son aplicables al presente caso ni á ningun otro de esta naturaleza, porque la sentencia que declara el comiso ó impone recargo de impuestos, real y verdaderamente perjudica, no al consignatario, sino al que con sus hechos ó omisiones motivó la pérdida de los efectos ó el recargo de derechos; y para pronunciar esa sentencia, no debe tomarse en cuenta la excepcion de que el consignatario ignoraba los hechos ó omisiones, que no tenia tiempo de que disponer para averiguarlos, y que no le corresponden los hechos acontecidos con anterioridad á la fecha de la remision; porque á todo esto se contesta con la libertad en que se haya de apersonarse en el juicio ó remitir tal obligacion al que despachó los efectos.

Aun menos aplicable es el artículo 22 de la constitucion federal, porque la pena de comiso no es una pena de confiscacion; esta comprende todos los bienes del individuo á quien se impone y la otra no se extiende mas que á los efectos aprehendidos y á la cantidad necesaria para pagar el recargo de impuestos; ni es trascendental, supuesto que quien la sufre, aunque pierda por ella su fortuna, conserva su libertad de repararla, mediante el trabajo honesto y dedicacion que las leyes no le prohiban.

La ordenanza de aduanas marítimas no pertenece esencialmente al derecho civil privado; sin contradiccion y con toda propiedad puede calificarse de internacional porque sus disposiciones se dirigen únicamente á reglamentar el modo con que debe hacerse el comercio con el extranjero, y al extranjero exclusivamente ó á los que se colocan en tal condicion, corresponde sola-

mente la observancia y cumplimiento de esa ley: si por infringirla los viene el comiso de los efectos y de sus medios de transporte, les viene en virtud de una disposición que en esta parte no está subalternada al precepto constitucional del enunciado art. 22, porque la Constitución obra y surte sus efectos, en este punto en el interior del país y la ordenanza tiene por objeto impedir que entren á la república mercancías fuera de las reglas que la misma fija; por consiguiente, el comiso, aunque se verifique en el interior de la nación, debe reputarse verificado en su literal ó fronteras, porque se declara por haber pasado ó intentado pasar esos límites, sin las condiciones que la ley manda.

Estos razonamientos no son caprichosos, están en consonancia con el precepto del artículo 112 del reglamento de 22 de Diciembre de 1849, y demás leyes concordantes ya citadas, que imponen al consignatario ó dueño de los efectos la obligación de probar judicialmente en cualquiera tiempo ó lugar la legalidad con que se ha hecho la importación ó internación de los mismos.

La hipótesis que se aduce de lo que les puede acontecer á los comerciantes que concurren á la feria del Saltillo y compran allí efectos, pudiendo perderlos por no haberse asegurado de sus legítimas procedencias, no constituye argumento alguno: porque esos comerciantes tienen obligación de saber si los efectos que compran se han importado ó internado legalmente ó de contrabando, y deben saber además que tendrán que demostrar esto en cualquiera lugar en que para ello sean requeridos por los empleados de la administración ó por los tribunales. No asegurándose de la legalidad de la importación ó internación ó no proveyéndose de los justificantes que acrediten una y otra, corren el mismo peligro que el que compra una cosa y que por no asegurarse de la propiedad que en ella tiene el vendedor ó de su capacidad para

venderla, resulta robada ó que era inhábil para la enagenación quien la hizo, y por uno ó otro motivo tiene que perderla.

Por las fracciones primera y segunda de la ley de designación de rentas de 30 de Mayo de 1868 y por el artículo primero de las leyes de 30 y 31 del propio mes del año anterior y del actual, pertenecen exclusivamente á la hacienda federal todos los impuestos que conforme á la ordenanza de aduanas marítimas, cobran sus oficinas establecidas en los puertos y fronteras; y conforme al artículo único de la ley de 2 de Mayo de 1868 los Estados no pueden gravar á las mercancías extranjeras por el solo tránsito por el territorio de ellos. Esta y aquellas leyes están dictadas en perfecta consonancia con la fracción 9 del artículo 72 y con la primera del 112 de la constitución federal. Téngase esto en cuenta para sentar como seguro ó incontrovertible precedente, que los estados no pueden gravar las mercancías extranjeras, y que por lo mismo á la federación afecta únicamente la manera de traficar con ellos, sea á su importación ó sea ya internadas en el interior de la república, y que las autoridades y funcionarios de los Estados no tienen mas intervención legal en negocios de esa especie, que el auxilio eficaz que deben prestar á las autoridades y funcionarios públicos de la federación, según lo mandan las leyes de que al principio hice mérito, ya obrando oficiosamente ó bien requeridos por alguna autoridad ó funcionario federal.

La ley de 28 de Diciembre es general, y su objeto es el que queda expresado; su vigor no pedimos ponerlo en duda; el mismo reglamento de 4 de Junio del año próximo pasado en sus artículos 25, 47, 59, 65 y 66 la ha acogido y declarado vigente para reglamentar el comercio de efectos extranjeros ya nacionalizados.

Esas leyes demuestran ser absolutamente cierto que entre ellas y la Ordenanza general de Aduanas marítimas hay un enlace tan íntimo y perfecto que vienen á

constituir un solo todo, ó como me expresaba poco ha, aquellas son el complemento de esta, y tan necesaria que la ejecución de la última se haría imposible faltando las otras.

El presente caso lo demuestra con toda evidencia: el jefe superior de Hacienda de Coahuila expidió cuatro guías bajo los números 124, 126, 219 primera y 219 segunda; pero en ellas no aparecen algunas de las condiciones esenciales que debe tener toda guía, les faltan la procedencia de los efectos, en valor, y en algunas de las facturas no se designa el efecto por su nombre y en otras no se expresa la cantidad, ni el ancho del género. Esto sucede con la 4ª partida de la factura de la guía 124: en la factura de la guía número 126 no se expresa la calidad del hilo bolita, no se dice el ancho que tienen los pañuelos contenidos en los diez tercios; hay diez tercios sin manifestar su contenido: en la factura de la guía número 219 primero no se expresan las dimensiones de los pañuelos contenidos en ocho cajas; y aun hay factura sin el sello de la oficina y sin la rúbrica de su jefe.

Con esos vicios no pudo legalmente el jefe superior de hacienda de Coahuila expedir esas guías segun lo previenen las disposiciones que se acaban de citar, y mas especialmente la fraccion 6ª del art 8º de la ley de 28 de Diciembre de 1848: expedidas así no surten ningun efecto en favor de quien las recava, porque no llenan su objeto, que es impedir que se internen mercancías que no han pagado los derechos marítimos establecidos por la Ordenanza.

Nótase otro defecto capitalísimo en las guías, el cual está plenamente demostrado con las constancias de autos, y es haber dado el jefe de Hacienda de Coahuila esos documentos sin estar seguro de que los efectos que iban á ampararse hallaban en el Saltillo; y consta por las declaraciones de D. Antero Perez y de sus carreros Catarino

Morales, Lino Araujo, Dionisio Corrales y Melchor Ramos, que los ocho carros fueron cargados parte en Mier y parte en la fábrica del Labrador, la cual se halla en el campo á alguna distancia del Saltillo, cuando menos á media legua, si hemos de creer á los testigos Miguel y Toribio Martinez y Albino Torrez, presentados por la parte contraria, cuyo testimonio está corroborado con el de Teodoro Gil, Mariano Bosque y Miguel Popi, testigos examinados por el juez de Distrito de Coahuila, con citación del remitente de los efectos D. Juan C. O'Sullivan.

Ya antes se ha manifestado, con referencia á constancias fehacientes, que de Mier no vino ninguna carga internada legalmente con el carrero Antero Perez y que tampoco se presentó ninguna conducida por este en las secciones del contra resguardo para su reconocimiento, examen, calificación y anotación de las guías: consta tambien por los datos que obran en la seccion principal del contra resguardo, transmitidos al juzgado de Distrito de Zacatecas, los cuales manifiestan la alsa y baja de las mercancías extranjeras existentes en el Saltillo, que en aquella plaza no habia el número de efectos ni de la calidad de los contenidos en las facturas de las guías del Saltillo, lo que da por resultado el hecho imposible ante la ley, de que de aquel lugar pudieran salir mas efectos y distintos de los que habian entrado á él. Y para que sobre la verdad de los hechos que han declarado los testigos, con los que se demuestra la fraudulenta internacion de los efectos que introdujo Perez á Zacatecas, no quepa la menor duda, debe considerarse en todo lo que vale el certificado del tesorero municipal del Saltillo, quien asegura que en todo el mes de Mayo último no entraron mercancías extranjeras á aquel lugar.

El conocimiento perfecto de la manera en que se han verificado esos hechos de-

muestra con toda claridad, que el objeto único de las guías expedidas en el Saltillo ha sido encubrir la fraudulenta importación e internación de los efectos que contienen sus facturas. Y el argumento que en contrario se opone para exonerar de culpa al jefe superior de Hacienda de Coahuila y de responsabilidad al remitente y consignatarios, de que no se aseguraron de la existencia de los efectos en el Saltillo por no haber alcabalas en ese punto, no tiene fuerza alguna; supuesto que la libertad en que los Estados se hallan, por la ley fundamental del país, para constituir su administración interior de la manera que mas cuadre á sus intereses, no impide que las leyes generales dejen de tener su cumplimiento, porque precisamente con ese objeto la federación tiene sus autoridades y empleados propios; y para que sobre este respecto no pueda presentarse ningún inconveniente, las circulares de 11 de Enero y 2 de Febrero de 1869 han obviado cualquiera dificultad, permitiendo que nacionalizados legalmente los efectos extranjeros, puedan dividirse, internándolos por mar al interior de la república con las competentes guías, dadas por el administrador de rentas del lugar ó por quien haga sus veces; y para el caso en que se remitan de un punto en que no haya oficina de rentas, cualquiera autoridad del mismo ó del tránsito puede autorizar una simple carta de cambio, mientras que los efectos pasan por algun punto en donde haya oficina que pueda expedirles guías para ampararlos.

En estos casos no se han hallado los efectos conducidos por Perez: se les ha querido amparar con guías dadas en un lugar del cual no proceden; y esto no puede ser, porque es contrario á lo que las leyes disponen y porque tiene por objeto claro hacer el contrabando, simulando el cumplimiento de las leyes que norman el modo de hacer el tráfico mercantil.

Si todavía cupiere alguna duda de que cosa es la verdad de lo que ha pasado, algunos otros hechos que voy á exponer, plenamente demostrados en los autos, acabarán con esa duda.

D. Juan C. O'Sullivan no acompañó facturas al pedir las guías que se le expidieron en el Saltillo ó las que acompañó fueron falsas; entre estos dos extremos no hay medio, supuesto que interpelado despues de aprehendida la carga, por el juzgado de Distrito de Coahuila, para que presentara una copia de las facturas de guías, la que exhibió es distinta de las primeras facturas; y aun entre estas y el contenido de la carga aparecen notables diferencias en la calidad, en la clase y en la cantidad de los efectos. Las constancias que aparecen en los autos justifican estos acertos; veámoslo:

Se reconoció la carga en Zacatecas teniendo por base para hacer esa operación las facturas presentadas por D. Juan C. O'Sullivan al pedir las guías, y de ese examen resultaron estas diferencias: Las facturas contenian 34 tercios Madapolam y resultaron 44: indicaban cuatro cajas de pana y no apareció ese efecto: manifestaban tres tercios de dril y resultaron canela Ceilan: nada dicen las facturas de un género denominado piol de leon y en el reconocimiento se encontraron algunos bultos que no lo contienen; por último, sumados los bultos reconocidos resultaron trescientos veintiocho tercios, treinta y tres mas de los que amparan las guías.

Requerido el remitente O'Sullivan para que presentara las facturas de los efectos que remitió, y comparadas estas con las que habia presentado á la gefatura superior de Hacienda de Coahuila al pedir las guías, aparecen entre ellas estas diferencias:

FACTURAS PRESENTADAS.

**POR D. JUAN C. O'SULLIVAN AL PEDIR
LAS GUIAS EN LA JEFATURA SUPERIOR
DE HACIENDA DE COAHUILA.**

EFFECTOS.	NUMERO DE TERCIOS.
Imperial.....	96
Madapolam.....	34
Hilo bolita.....	15
Pañuelos.....	18
Escoseses.....	5 cajas.
Casimir.....	2
Cinta.....	4
Indiana.....	76

FACTURAS PRESENTADAS.

**POR D. JUAN C. O'SULLIVAN AL JUZGA-
DO DE DISTRITO DEL SALTILLO DE LOS
EFFECTOS QUE REMITIO AMPARADOS CON
LAS MISMAS GUIAS.**

EFFECTOS.	NUMERO DE TERCIOS
Imperial.....	25
Madapolam.....	44
Hilo bolita.....	19
Pañuelos.....	10
Escoseses.....	5 cajas.
Casimir.....	2
Cinta.....	4
Indiana.....	137

DIFFERENCIAS.

De 25..... á 96	71
De 34..... á 44	10
De 15..... á 19	4
De 18..... á 8	10
Igual.....	
Id.....	
Id.....	
De 76..... á 137	61.....

Y no es esto solo lo que prueba la mala fé del remitente O'Sullivan. En quince de Junio, interpelado para que presentara las

facturas de los efectos aprehendidos, dijo: que no obraban en sus libros, porque solo habia recibido de Mayer M. Levy unas notas de efectos, con encargo de pedir guías para los mismos á la consignacion de Ostermayer y D. Ramon C. Ortiz; y requerido con el propio motivo en 23 del mismo mes, dió una respuesta enteramente diversa, negándose á presentar sus libros, diciendo que no los tenia en su poder, porque todos los años los cerraba en el mes de Abril y los remitia á sus socios de Liverpool, sirviéndose de unos manuales en tanto le mandaban nuevos libros. La primera de esas respuestas demuestra, que los efectos no salieron del Saltillo y que el mismo que aparece como remitente ignoraba la procedencia de ellos, por lo que, cuando ha señalado como tal las guías 21 de Laredo, 29, 47 y 87 de Mier, no ha dicho verdad, ni tuvo conciencia de lo que decía. supuesto que de ese negocio no tenia mas antecedentes que las simples notas que le mandó Mayer M. Levy.

La otra respuesta, notoriamente fué dictada con intencion de ocultar los libros al juzgado del Saltillo, porque no es creíble que teniendo necesidad de ellos para multitud de operaciones que indudablemente tenia pendientes, los remitiera al extranjero.

El mismo espíritu que se palpa en O'Sullivan de ocultar la verdad se mira en Ostermayer, en Ortiz y en el carrero Perez; requeridos en 29 de Mayo para que presentaran las facturas y conocimientos, respondieron: el primero, no haberlas recibido; el segundo, por medio de su apoderado, que consultaria y responderia, lo cual no llegó á hacer; y el tercero que no las habia traído.

En once de Julio, el juzgado de Distrito pudo aclarar mas el dolo que entrañan esas respuestas: habiéndoles exigido á los consignatarios la presentacion de sus libros, Ostermayer exhibió los suyos y en el co-

piador de cartas se vé una, fechada el 19 de Mayo, dirigida á D. Juan C. O'Sullivan, en la que le avisan que la carga ha llegado sin conocimientos y sin facturas, y que de su remision no habian tenido noticia anticipada; Ortiz dijo, que no habia recibido ni conocimientos ni facturas, porque Mayer M. Levy habia ido á Zacatecas á recibir la carga; y Perez contestó, que no se le habian entregado esos documentos.

¿Qué modo de hacer el comercio es este? ¿qué clase de consignatarios son aquellos á quienes no se les dá aviso anticipado de la remision que se les va á hacer, no se les mandan las facturas de los efectos que se les envian ni los contratos del flete de ellos, ni se les dan instrucciones sobre la manera y precio en que deban verificar las ventas? y ¿qué clase de conductor es ese que recibe tercios sin saber lo que contienen y sin que su contrata de flete conste por escrito? ¿es esto creible? ¿es racional? ¿es conforme á las prescripciones del capítulo 12 de las Ordenanzas de Bilbao? Para obrar así es absolutamente preciso que una intencion fraudulenta determine esa clase de actos.

¿Cómo pudieron aceptar Ostermayer y Ortiz el papel de consignatarios, si conforme á los preceptos de la Ordenanza ningunas obligaciones habian contraido con el remitente O'Sullivan, debiendo traerlos graves responsabilidades su calidad de consignatarios? Esto no es creible ni posible.

Para que estas reflexiones se estimen en todo el valor que tienen, debe tenerse presente, que esos consignatarios declinando toda responsabilidad de los hechos acontecidos con anterioridad á la expedicion de guías en el Saltillo, aceptaron de lleno la responsabilidad que los viniera y con ese motivo se han apersonado y continúan apersonados en este juicio.

Aquí es ocasion de recordar, que Perez trajo un camino no usado desde Mier hasta Zacatecas: que siendo antiguo carrero de la

frontera ha dicho lo que no es creible, que ignora en qué poblacion estén situadas las secciones del contra-resguardo, cómo si no le importara para él legal ejercicio de su habitual ocupacion saber el modo de conducir los efectos sin responsabilidad para él mismo y para los dueños de ellos.

Con una meditacion tan resuelta y con tal cálculo se ha procurado velar el fraude en este negocio, que se consiguió burlar los esfuerzos del activo, integro y entendido comandante del contra-resguardo, que buscaba con toda solicitud á los denunciadores de este fraude, para presentarlos á los tribunales, á fin de que judicialmente comunicaran los datos que tenian sobre la manera íntima y muy reservada con que se intentaba hacer esto contrabando; esos denunciantes han desaparecido ¿por qué medios? ¿se ha empleado el puñal, el veneno? ya lo descubrirán el tiempo y la averiguacion que se haga por los tribunales y por los empleados de la administracion.

Difícilmente se comprenderá cómo podrán explicarse en un sentido favorable á los demandados todos los hechos de que he venido haciendo relacion, los cuales demuestran plenamente haberse importado é internado de contrabando la carga aprehendida en Zacatecas. Y el cargo de fraude, que motiva la demanda, no se impugna con la escepcion de que el art. 40 de la pauta de Comisos se refiere en la parte que les toca á los consignatarios, únicamente á los que hayan tenido participio en el intento ó en la realizacion del contrabando. El art. 112 del reglamento de 22 de Diciembre de 1849 exige que todo efecto se interne y transite con guías legítimas, y supone en ellas la condicion esencialísima, que se espresa en las mismas pormenorizadamente la procedencia de los efectos; bajo la obligacion de probar en cualquiera punto, ante la autoridad judicial, la legal importacion de los efectos, incurriendo en la pena de comiso los interesados en los mis-

mos que no produzcan esa justificación.

Como confirmacion de lo dispuesto en ese art., el 12 de la ley de 20 de Julio de 1850 autoriza al contra-resguardo de la frontera á extender sus excursiones en persecucion de efectos internados de contrabando hasta puntos tan avanzados y céntricos como este Estado de Jalisco.

Esas disposiciones no distinguen entre el consignatario de buena fé y el que carece de ella; hablan solo de importacion ó internacion legalmente verificadas; y no se los puede calificar de inicuas, porque el comerciante tiene obligacion de saber las leyes para sujetarse á lo que provienen sobre el modo lícito de hacer el comercio, ¿qué especie de consignatarios ó de compradores son injustamente sacrificados por esas leyes? ¿los que las ignoran? estos recibirán el daño de su ignorancia, no de las disposiciones que deben conocer y que por solo su culpa ignoran su contenido. Si la ignorancia fuera una excusa suficiente, con ella podría salvarse el buque que arribe sin manifestos, sin facturas y sin documento alguno legal á nuestros puertos, y el cual sin conocimiento de los empleados de las aduanas haga su descarga á horas avanzadas de la noche, supuesto que no siendo de derecho natural las prescripciones de la ordenanza de aduanas, bien puede ignorarlos el que por primera vez haga el comercio de altura.

Sin dificultad puede aceptarse la violenta inteligencia que se le dá al art. 40 de la pauta de comisos, porque la excepcion que de ella se saca en nada aprovecha á los demandados, porque está probada de la manera mas perfecta la intencion que han tenido de defraudar los derechos que á su importacion ó internacion causaron esos efectos.

¿Qué calificación merecen aquellos consignatarios á quienes no se les entregan guías, facturas ni conocimientos, ni tienen aviso anticipado de la remision de la carga,

ni instrucciones del destino que deban darle, y no obstante todas esas faltas aceptan las obligaciones de consignatarios? La calificación no puede ser otra que de contrabandistas.

Es preciso responder á dos argumentos que se han hecho para justificar la legítima introduccion de los efectos á Zacatecas; y consisten, en que el conductor Perez se presentó espontáneamente en el alcabalarío y los efectos que traía iban amparados con guías.

La circular de 20 de Agosto de 1856 citada en las guías, con objeto de manifestar que los efectos que amparaban caminan libres de derechos, no hizo ninguna alteracion á las disposiciones anteriores sobre la forma y condiciones que han de tener las guías legítimas; al contrario, en su cuarta prevencion se manda que esas guías se expidan con todos los requisitos que ordenan las leyes, y para que no se cometa fraude alguno se le encarga al comerciante la obligacion de presentar la tornaguía; por lo mismo, cuando las guías no contengan todos los requisitos esenciales que las leyes mandan, no son verdaderamente guías porque no llenan el objeto de esos documentos, y no llenándolo, no cubren ni amparan los efectos á que se refieren.

Que Perez haya entrado á Zacatecas y se presentara voluntariamente al alcabalarío, esto era muy natural, porque el remitente y los consignatarios creían que bajo el amparo de esas malas guías podrían consumir fácilmente el fraude, y por esto, á la realizacion de ese fraude convino la llana presentacion de Perez en la aduana de Zacatecas.

En materia de guías es necesario que el empleado haga uso de toda su penetracion para descubrir el mal uso que de ellas se hace y la intencion que el comerciante tiene en convertirlas en medio de fraude.

En los autos obran las copias de las guías números 1391 y 1227, expedidas en Matamoros y presentadas en Mier en 19

de Mayo último por Ramon G. Barrera, pidiendo guía para remitir con el arriero Rivera catorce bultos con direccion al Saltillo, Colima y Chihuahua, á la consignacion de D. Juan C. O'Sullivan. Esas guías evidentemente no sirvieron mas que para velar el contrabando escandaloso que se hace por la frontera, porque de notorio consta, que O'Sullivan no tiene casa en Colima, y no es racional creer que algun comerciante remita efectos comunes desde Mier hasta Colima; y esto no envuelve un cargo al empleado que dió esas guías; él no hizo mas que cumplir con la obligacion que tiene de dar esa clase de documentos: mi sorpresa viene, de que haya quien pague mayores fletes del precio en que pueden venderse los efectos; y no siendo esto posible, se comprende la razon por la cual las leyes se muestran tan severas con los contrabandistas.

Decia hace poco, que no estando seguros los demandados de la fuerza de sus razonamientos para salvar del comiso los efectos aprehendidos, quieren defenderlos suponiendo que no reportan ninguna obligacion por haber pasado del dominio de unos á otros poseedores. No está demostrado que esos efectos hayan salido del dominio del importador; al contrario, los mismos señores Ostermayer y C^a y D. Ramon C. Ortiz han confesado judicialmente, que no tienen ningun derecho de propiedad sobre esos efectos, que ignoraban su remision y que no se les mandaron sus facturas y los conocimientos en que consta el contrato de flete; y el último añadió, que no tenia necesidad de haber recibido aviso, ni facturas ni conocimientos, porque el mismo Mayer M. Levy que presente está en este tribunal y me escucha sin perder una palabra de lo que hablo, habia ido á recibir los efectos; esto es, á sustituirlos en su caracter de consignatario, como dueño de los mismos. D. Juan C. O'Sullivan judicialmente, ante el juzgado de Distrito de Coahuila, diciendo que

no obraban en sus libros las facturas, porque solo tenia las notas de esos efectos que Mayer M. Levy le habia mandado, con encargo de pedir guías para los efectos que ellas contienen, dijo que: tales efectos son de la propiedad del expresado Levy; y como de su remision ni aun tenian noticia los consignatarios de Zacatecas, es claro que esos efectos no los pertenecen y que no habian salido del dominio del importador.

Y esto no puede hablar ya una palabra en su defensa; tiene que conservarse en ese silencio doloso en que se concentró espontáneamente. Yo me opondría á que se le oyera una sola palabra, sea pronunciándola por su libre voluntad, ó respondiendo á interpelaciones que con cualquier motivo quisieran hacerle, porque esa actitud callada que ha guardado, pero sin separarse un solo momento de los tribunales en donde este negocio se ha tratado y se trata, y esa su union constante y pública con los abogados patronos del contrabando á quienes estoy seguro no conocia ni habia oído mentar, es la mejor prueba material que puedo desearse, para demostrar que la importacion ó internacion de los efectos aprehendidos se hizo contraviniendo á las leyes que arreglan el modo de verificarlas, y defraudándole al erario los derechos que por esos motivos le pertenecen.

Averiguado este punto, como lo está, sería ocioso entrar en la cuestion hipotecaria que se toca por los demandados. Las doctrinas que esponen sobre hipoteca general y especial, con referencia á las leyes y á las acreditadas opiniones de D. Eugenio de Tapia, no admiten réplica; pero como no se persiguen los efectos por razon de la hipoteca que reporten sino para hacer efectiva una obligacion personal, transmitida á los ulteriores poseedores que por su culpa no adquirieron legalmente la cosa, y porque de otra manera no sería posible el cumplimiento de las prevenciones de la ordenanza, por esto no tiene caso la aplicacion que se intenta hacer de esas leyes y de esas opinio-

nes, por claras que sean unas y respetables las otras.

Se ha llevado tan lejos la exageracion en el sistema de defensa que se han propuesto observar los demandados, que combatiendo el procedimiento establecido en estos juicios, se asienta que es un principio establecido y contra el cual se declara que el fisco no puede pelear despojado; y partiendo de tan falso antecedente, procuran demostrar que tal procedimiento vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley, porque contraviene la base que fija el artículo 1º de la Constitucion federal, en la cual han de estar calladas todas las leyes, y á lo que deben modelar su conducta las autoridades; ordenando, que aquellos en su texto y estas en su modo de proceder, respeten y sostengan las garantías que otorga la propia Constitucion; y que infringe el art. 13 de la misma, que prohíbe que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales; cuyas disposiciones quiso la constitucion hacer efectivas eficazmente, previniendo en su art. 126, que la misma Constitucion y las leyes que emanan de ella, dictadas por el Congreso de la Union, fueran la ley suprema del pais.

Supónese que el modo de obrar en negocios de esta especie importa un despojo de la posesion que tiene el demandado, y con este motivo se invocan varias reglas de derecho, que nivelan la condicion del reo con la del actor y en los casos dudosos hacen mejor la de aquel; y se copia por último el texto de la ley 2 tit. 13 lib. 4º de la R. de Castilla, la cual prohíbe que nadie sea despojado de su cosa sin ser antes llamado, oído y vencido en juicio.

Ninguna ley establece el principio absoluto de que el fisco no puede pelear despojado; lo que está establecido por la apremiante y urgente necesidad de cobrar pronto los impuestos, y para que en muchos casos el erario no quede insoluto es, que se

asegure el adeudo con el embargo de bienes equivalentes; y esa disposicion, lejos de ser censurada por el Sr. Rodríguez de San Miguel, como se asegura en el 7º párrafo del alegato de 11 de Julio, es defendida por aquel autor en la nota 3ª de la página 321 de su diccionario, en donde dice: «quien quiera formarse mejor idea de las atribuciones de estos funcionarios, (habla de los intendentes) puede ver la real ordenanza de intendentes. Véase tambien el decreto de 12 de Mayo de 1821, y no se calificará por algunos como extravagante ó inaudita la ley que en 20 de Enero del presente (de 1837) concedió el uso de facultades económico coactivas en favor del erario público,» y en otro lugar, anotando la palabra coaccion dice: «Por desgracia, la coaccion no es muy usada entre nosotros, pues todo se hace de *ruego y encargo*.....» ¡Ah, pobre nacion!»

El embargo que se hace por esos motivos ó el secuestro que se verifica mientras se averigua si el tráfico mercantil se ha hecho ó no con arreglo á lo que las leyes disponen y pagando al erario los impuestos establecidos con ocasion de ese tráfico, no importan un despojo, porque el despojo que consiste verdaderamente en privar á alguno de la posesion de su cosa, tiene por objeto apropiarse ó dar á otro esa misma posesion; y ni en el embargo ni en el secuestro, que por cobro ó para asegurar los derechos de la hacienda pública se verifican, ni quitan los bienes de alguna persona para darlos á otra.

Asi es que, los principios que se invocan y la ley que se cita, no son aplicables contra el embargo ó el secuestro, que no tienen mas objeto que hacer efectivo el pago de una cantidad si el deudor es condenado á pagarla.

Menos aplicables son los preceptos constitucionales, cuyo respeto y cumplimiento se reclaman, porque el artículo primero de la constitucion no está infringido de ningun modo por las leyes que norman este procedimiento, ni lo está tampoco el artículo 13,

porque las leyes no pueden calificarse de privativas, ni de especiales los tribunales encargados de aplicarlas.

Para que se palpe de una manera completamente material hasta donde se ha llevado la exageracion bajo este respecto, bastará ver el segundo párrafo del alegato de 11 de Agosto, en donde se estampa este notable concepto:

«Háse dicho, que cuando la justicia y el deber entran en lucha con el interés, es casi segura la derrota de la primera, en virtud de la fuerza y preponderancia del último. Esta verdad, que podrá elevarse á la categoría de principio, ha recibido una nueva confirmacion en lo que ha pasado en el juicio que nos ocupa.» Cierto es que no era necesario para defender á los señores Ostermayer y Ortiz avanzar hasta propalar principios disolventes.

Quinto; es un hecho absolutamente cierto, que en Zacatecas fueron aprehendidos á D. Antero Perez ocho carros cargados de mercancías extranjeras. ¿Cómo hayan sido importadas á la república y cómo se les haya internado? Ya quedan esclarecidos esos puntos al tratar las anteriores cuestiones; sin embargo, es conveniente resumir en pocas palabras cuanto se ha dicho, para apreciar el valor legal que tienen los hechos que se han expuesto.

Es inconcuso que siendo extranjeras esas mercancías se les importó por algun punto de la frontera ó del litoral de la república ¿cual sea este? no lo sabemos de un modo tan absolutamente cierto, y con una evidencia tan material, que no hubiera podido impugnarse y demostrar lo contrario: como la nacion, en esta clase de negocios, no tiene ni puede tener pruebas preconstituidas para saber cómo han pasado, el legislador ha fijado reglas por las cuales sus empleados y los tribunales puedan guiarse y obrar con perfecta justificacion.

Para juzgar con acierto del caso que nos ocupa, no solo tenemos esas reglas; hay ade-

mas una prueba directa y existen pruebas indirectas constituidas por el concurso de algunos indicios.

El artículo 111 del reglamento de 22 de Diciembre de 1849 dispone, que ningun efecto extranjero pueda internarse, sino con guía expedida por las aduanas marítimas, expresándose en ella su procedencia y haber pagado los respectivos derechos de importacion é internacion: el artículo 112 de la propia ley declara, que esas guías son el justificante de haber pagado las mercancías extranjeras tales derechos, y que el dueño ó conductor de ellas, quedan, bajo pena de comiso, obligados á probar judicialmente estar satisfechos, todas las veces que importan efectos que no vayan cubiertos con ellas.

Las mismas prevenciones se hallan en el artículo 13 del reglamento de 20 de Julio de 1850; en él se dispone testualmente que: *todos los efectos importados por las aduanas marítimas y fronterizas, deban caminar con guía y factura, y que los que se encuentren sin esos documentos, así por el contra-resguardo, como por cualquiera otra de las autoridades de la federacion, serán incurso en la pena de comiso.* Los artículos 3º y 4º de la ley de 28 de Marzo de 1853, repitieron iguales prevenciones.

Se comprobará, dicen, *la legítima importacion, con cita en la guía marítima del nombre del buque, fecha de su arribo y hoja del despacho en que llegaron á la república y que se reconocieron en el puerto los efectos contenidos en la factura que la acompaña.*

Se comprobará la legítima internacion, con cita en la guía anterior, del número, fecha y lugar de la marítima ó fronteriza con que se introdujeron los efectos en el lugar interior de que salen, siempre que dichas guías de aduana marítima ó fronteriza se hayan librado despues del 9 de Junio de 1851.

El artículo 8º de la ley de 28 de Diciem-

bro de 1842, impone tambien la obligacion para el trasporte de mercancías extranjeras, señalando otras condiciones que deben contener las guías, entre ellas, la entera conformidad de las guías con las facturas; la designacion cierta del peso, nombre conocido, calidad, dimensiones y valor de los efectos, ruta que deben llevar etc.; las cuales se detallaron en las otras leyes cuyo texto no se ha copiado porque ya estaban fijadas en esta; y para que esa disposicion no pudiera ser eludida, el artículo 25 de la propia ley prohíbe, bajo pena de comiso, á los conductores, que reciban efectos sin las guías que los cubran legalmente.

Son caso de contrabando, segun el artículo 23 de la ordenanza general de aduanas marítimas de 31 de Enero de 1856, la importacion de efectos extranjeros sin sujecion á las prevenciones de esa ley ó sin conocimiento de los empleados de las aduanas, y la internacion de los mismos sin un documento que acredite haber sido importados legalmente y pagado todos los derechos designados en la tarifa de la misma ordenanza.

Esas leyes establecen una presuncion legal ó como se llama comunmente, presuncion juris tantum, que constituye al dueño, al consignatario ó al conductor de los efectos, en la obligacion de probar judicialmente la legal importacion de los mismos y haber satisfecho los derechos fijados en la ordenanza; cuya presuncion conserva en el presente caso, en favor de la hacienda pública, toda su virtud demostrativa del contrabando verificado, porque ni los interesados en las mercancías aprehendidas, ni el conductor de ellas han acatado la disposicion de esas leyes, procurando probar su legitima procedencia. Y téngase en cuenta para estimar el valor legal que tiene ese desprecio á esas disposiciones, que el remitente D. Juan C. O'Sullivan ha tenido judicialmente perfecto conocimiento de que los tribunales se ocupan de este negocio

para declarar caidos en la pena de comiso esos efectos, exigiendo á los consignatarios el recargo de impuestos en que han incurrido: y á pesar de eso, nada, absolutamente nada ha hecho por su parte para demostrar la legal importacion ó internacion de los mismos; al contrario, sus respuestas acreditan que plenamente están infringidas, en el caso que tratamos, todas las prevenciones relativas de la ordenanza; él con su silencio hace creer, que tal demostracion le es imposible, y la divergencia de sus respuestas sobre facturas y su contenido demuestra, que á punto fijo no tenia cabal y perfecto conocimiento del nombre y calidad de los efectos conducidos por D. Antero Perez. Y no es esto todo: por sus respuestas consta, que esos efectos no le pertenecen; que no se le han remitido; que no los recibió; que no los conoce y que ignoraba en donde pudieran estar, supuesto que solo recibió de D. M. Mayer Levy unas facturas con encargo de pedir guías que cubrieran los efectos anotados en ellas: ¿Es esto legal? ¿Cabe tal modo de obrar en un comerciante de buena fé? ¿Qué diriamos de un comerciante que para trasportar mercancías extranjeras de un punto á otro del interior, situadas en la plaza de Colima, sacara guías en este alcabalatorio? ¿Cómo juzgaríamos este caso? Ciertamente no hay argumento racional que pudiera legalizar semejante infraccion de las leyes fiscales. La comparacion es exacta, porque lo mismo es pedir guías para efectos que no están en el lugar del alcabalatorio en donde se expiden y se encuentran fuera de él á una corta distancia, que pedir las para los que se hallan en distinta y lejana plaza: por que lo que ha de verse en esto, es la intencion que se tiene para obrar así; intencion que no puede tener mas objeto que hacer el contrabando, simulando el cumplimiento de las leyes fiscales.

Ese D. M. Mayer Levy á quien se refiere D. Juan C. O'Sullivan. no es un per-

sonaje imaginario; existe real y verdaderamente, ya lo hemos dicho hace poco; está aquí presente; tiene casa de comercio establecida en Mier; es el dueño de los efectos aprehendidos en Zacatecas; ha seguido y sigue paso á paso el curso que lleva este juicio; pero ni una palabra ha dicho judicialmente, y con ese silencio quiere desconocer la obligación que las leyes de que se acaba de hablar le imponen, bajo pena de comiso, de destruir la presunción que las mismas han establecido, por la cual se demuestra que tales efectos se han importado ó internado de contrabando.

Esa presunción por lo mismo, conserva todo el valor que esas leyes le dan, y el presente tribunal tiene que tomarla por su regla suprema para resolver este negocio: cualquier argumento que contra ella se haga no tiene fuerza alguna: los juristas de mejor nota acogen la conveniencia de esta clase de pruebas, apoyándola en principios verdaderamente filosóficos. Con este motivo permítaseme copiar algunas doctrinas de M. Eduardo Bounier, espuestas en su tratado teórico práctico de las pruebas en derecho civil y penal: *¿Merecen, dice, mas fé las presunciones que los testimonios directos? Puede pensarse en darles la preferencia, si se atiende al peligro de la corrupcion de los testigos, de la alteracion de los escritos; de cuya consideracion procede el axioma de la jurisprudencia inglesa: que los hechos no mienten.* (3ª parte, Número 809.)

La necesidad de seguridad y de calma para una multitud de intereses preciosos, obligan al legislador á tener por verdaderos gran número de puntos, que no están demostrados, pero cuya existencia se halla probada por una induccion mas ó menos poderosa. (3ª parte núm. 835.)

Los motivos que han determinado al legislador á establecer tal ó cual presuncion, se refieren mas bien al derecho que al hecho. Lo que examina sobre todo el legisla-

dor, no es si el hecho conocido reúne todos los caracteres suficientes para hacer probable el hecho desconocido; sino solamente si exige un interés social que se deduzca de la consignacion del uno la existencia de otro. [3ª parte núm. 836.]

La ley puede imponer al juez ciertas pruebas circunstanciales, obligándolo á tener por ciertos los hechos que trata de establecer; pero dejando á las partes interesadas la facultad de demostrar, que tal induccion no es fundada. La ley puede seguir mas adelante, rechazando desde luego toda prueba contraria, y hacer que resulte necesariamente de tales circunstancias la existencia legal de tal ó cual hecho; presunciones juris et de jure ó perentorias ó presunciones juris tantum ó discutibles. [3ª parte núm. 839.]

Si se tratase de una apreciacion legal, el acusado estaria obligado para hacer perder su efecto, á acreditar de un modo perentorio la fuerza de sus intenciones. (3ª parte núm. 858.)

La presuncion establecida por aquellas leyes no ha sido contrariada de ningun modo por los demandados, porque las guías expedidas en Coahuila no tienen las condiciones que hemos visto fijan las leyes como solemnidades esenciales, constitutivas de esa clase de documentos; y ademas está demostrado, que se expidieron para cubrir efectos que no existen en aquel lugar y que no salieron de él; y que no pueden reconocer como procedencia las guías números 21 de Monterey Laredo, 29, 47 y 87 de Mier; porque como ya lo hemos visto antes, esos efectos no entraron todos al Saltillo sino solo una parte y esta se dió por consumida allí.

Bastaria esta sola prueba para calificar como verificada de contrabando la importacion y la internacion de esos efectos; pero no es ella la única que así lo demuestra hay otras muchas que dan igual resultado Los testigos D. Antero Perez, Catarino

Morales, Lino Araujo, Dionisio Corrales y Melchor Ramos, declaran absolutamente contestes, que parte de esos efectos fueron cargados en Mier en la noche del 2 de Mayo último; que al otro día emprendieron su camino; que á la altura del Saltillo transportaron á los carros de Perez mas efectos de los que venian en unos carretones y continuaron caminando hasta llegar á Zacatecas. Esos testigos constituyen, conforme lo dispone la ley 23 tít. 16 part. 7ª, prueba plena, que demuestra la verdadera existencia de esos hechos; demostracion tanto mas perfecta y convincente, si se atiende á que esos testigos están interesados en salvar del comiso los efectos, por ser los que los conducian, y uno de ellos, Perez, jugaba en este negocio toda su fortuna. Por otra parte, los hechos que han declarado se reducen en compendio á esto: haber cargado ocho carros de mercancías extranjeras, tomando parte de la carga en Mier y el resto en el campo, á cierta distancia del Saltillo.

Estos hechos por sí solos son inocentes; no constituyen de suyo ningun fraude contra la hacienda pública: el fraude consiste, en que los efectos se hayan sacado de un punto en que hay aduana fronteriza y se hayan tomado en el campo para llevarlos á una plaza del interior, sin ir cubiertos con las correspondientes guías, extendidas en la forma que determinan las leyes.

Entre estas declaraciones hay una, la de D. Antero Perez, que no es el testimonio de un simple testigo; es la confesion de uno de los demandados, y el mas importante entre ellos, porque fué precisamente el encargado de ejecutar la infraccion de las leyes fiscales: esa confesion constituye una prueba plena. *Grande es la fuerza que ha la conosciencia que hace la parte en juicio estando su contendor delante, ea por ella se puede librar la contienda, bien así como si lo que conoce fuese probado por bonos testigos ó por verdaderas cartas: et por ende e*

judgador ante quien es fecha la conosciencia debe luego dar juicio afinado por ella, si sobre aquella cosa que conosciaron fué comenzado el pleito ante el por demandet por respuesta.

Conforme á las leyes citadas, y mas especialmente por el art. 112 del reglamento de 22 de Diciembre de 1849, y por el 40 de la de 28 de Diciembre de 1843, es solidaria la obligacion que tienen, el dueño, el consignatario ó el conductor de los efectos, de probar su legal importacion ó internacion: para satisfacer esa obligacion es absolutamente indispensable que designen el punto por donde han sido importados y la manera legal como se hizo la internacion: los señores Ostermayer y compañía y D. Ramon C. Ortiz han declinado esa obligacion, diciendo que no les pertenecen; no son de su responsabilidad los hechos anteriores al 8 de Mayo último, en que se expidieron las guías 124, 126, 219 primera y segunda: por esa respuesta tal obligacion quedó, en virtud de lo dispuesto en esas leyes, en solo D. Antero Perez.

Es una verdad material que este condujo sus ocho carros cargados de mercancías extranjeras hasta la ciudad de Zacatecas; ¿de dónde hayan procedido esos efectos? él y sus carreros lo dicen: parte tomaron en Mier y parte en el campo en un punto inmediato al Saltillo. El mismo dice, que los que salieron de Mier venian amparados con las guías de aquella aduana fronteriza que le entregó D. M. Bustamante, las cuales para su exámen y calificacion en la seccion de Cerralvo, entregó al corresponsal que Bustamante tiene en ese punto, y que los efectos tomados en el campo iban cubiertos con las guías dadas en 8 de Mayo en el Saltillo. La aduana fronteriza de Mier, segun las constancias que obran en autos, no expidió á Bustamante en los primeros dias de Mayo ningunas guías, ni este las pidió, ni se presentaron en Cerralvo para su examen y calificacion: por lo mismo, D. Ante-

ro Perez no ha probado la legal importacion é internacion de esos efectos; y el hecho de haberlos sacado de Mier conserva todo su carácter de fraude que tiene. Las guías del Saltillo, ya se ha demostrado, no pueden amparar legalmente ni toda la carga ni parte de ella, porque no contienen las condiciones que las leyes previenen y porque fueron dadas para amparar efectos que no existían en el lugar donde reside la oficina que las expidió; y por esto tampoco con esos documentos se puede demostrar la legalidad de la importacion é internacion.

Ya antes se ha dicho y es forzoso repetirlo, que la confesion de Perez comprende varios hechos; en este momento nos ocupamos de dos: del transporte de las mercancías hasta Zacatecas y de la legalidad con que se hayan llevado, por habérseles expedido para su resguardo los documentos aduanaleros correspondientes. El primero es absolutamente cierto, no solo por la fuerza probatoria que á la confesion de Perez dá la ley 2ª tít. 13 part. 3; sino porque es un hecho materialmente cierto de cuya existencia ha dado fé el juzgado de Zacatecas, y por lo mismo no solo no puede dudarse sino que es necesario creerlo; no sucede igual cosa con el otro: la ley citada, por redundar en provecho del confesante, no le dá ninguna fuerza probatoria á su confesion; para que la tuviera era forzoso que demostrara su verdad probando que en Mier se habian expedido guías para amparar los ciento cincuenta tercios que de allí sacó, y que las guías del Saltillo son legítimas; mas lejos de estar demostrados esos puntos, consta de autos lo contrario. A quien dude de esta verdad podría preguntársele ¿de los efectos introducidos á Zacatecas, cuáles son los que tomó Perez en Mier y cuáles los que recibió en el campo á inmediaciones del Saltillo? Fíjese en esta observacion toda la atencion que ella merece para advertir la falsedad de la confesion de Perez en este punto y el poco cui-

dado que el gefe de hacienda de Coahuila puso en el cumplimiento de sus obligaciones y en la observancia de las leyes cuando expidió las guías de 8 de Mayo; negligencia y abandono tan notorios que ni aun le fijó el punto en que fué expedida la guía núm. 219 primera, la cual contiene 67 bultos.

Que la confesion puede dividirse, no solo lo dice la ley que acaba de citarse; lo enseñan tambien todos los juristas: M. Bounier en la segunda parte núm. 356 de su repetida obra dice: *“Si pues la adicion hecha á la confesion es gravemente sospechosa, y en especial las circunstancias alegadas para modificarla son en extremo inverosímiles, el tribunal podrá separar esta adicion para atenerse pura y simplemente á la confesion; pero teniendo cuidado de mencionar los indicios de dolo que presenta la causa.”*

Reconociendo los demandados la fuerza probatoria de esa confesion y la que tienen las declaraciones de los testigos de que se ha hablado, han procurado invalidarlas objetándoles varios vicios; siendo los mas principales, el apremio que en sus ánimos se ejerció para arrancárselas y el haber sido producidas inoportunamente y en un procedimiento criminal, el instinto es independiente de este de caracter civil. Se ha contestado ya á esos argumentos; pero conviene ampliar un poco las soluciones dadas, la confesion tratándose de pruebas tiene mas importancia que las declaraciones de testigos; por esto, para que valga y produzca sus efectos legales, ha de estar asistida de mayores y mejores condiciones que las declaraciones de testigos; entre esas condiciones, es sin duda la preferente, la libertad en que ha de hallarse el que confiesa de expresar su voluntad sin coaccion de ningun género: la ley 5ª del título y partida citadas, se encarga de este vicio que puede afectar á la confesion, así como del error que pudiera destruirla: el primer vicio deja de existir, si lo reproduce el confesante cuando se encuentre en libertad, que es lo que

cabalmente ha sucedido en el presente caso, y con el otro defecto no se puede destruir la confesion, sino es objetándolo antes de que se pronuncie sentencia definitiva.

En el tercer punto de este informe se ha dicho y demostrado que la confesion de Perez y las declaraciones de sus carreros, que ebran en el presente juicio, fueron producidos en el mismo; pero suponiendo que sean los que corresponden á la averiguacion criminal previamente practicada, no por eso dejan de constituir una prueba plena: así piensa M. Bonnier en el último punto del núm. 168 de la segunda parte de su obra citada: *Pregúntase, dice, sobre este particular, si se puede invocar como principio de prueba por escrito ante los tribunales civiles, las respuestas dadas anteriormente en el curso de un procedimiento criminal. Los términos generales de la ley: Todo acto por escrito hace verosímil el hecho alegado; conducen á esta solucion; y pone varios casos para confirmar su opinion. Como entre nosotros no hay alguna ley que prohiba esto, sin peligro puede acogerse esa opinion.*

El juzgado de Distrito de Zacatecas, su promotor fiscal y demas funcionarios públicos que han intervenido en este negocio, han obrado con tal diligencia, han procedido con tal justificacion, que no se conformaron con basar sus procedimientos y sus resoluciones, en solo la presuncion legal de no haber guías legítimas que cubrieran los efectos aprehendidos; averiguaron la verdad de los hechos como si por parte de la hacienda pública hubiera habido obligacion de probar que habian sido importados é internados de contrabando: de esa averiguacion resultó, que se aclarara de una manera evidente, que esos efectos procedian de Mier y de unos carretones que encontró D. Antero Perez en el campo, los cuales se procuró amparar con las falsas guías dadas indebidamente por el gefe de hacienda de Coahuila.

El hecho de haber llegado esos efectos á

Zacatecas, procedente una parte de Mier é ignorándose la procedencia de la otra parte, bastaría para probar el contrabando cometido; pero como hay algunos otros indicios que hacen la misma demostracion, el que habla debe exponerlos á la consideracion de este tribunal.

Los artículos 45 y 46 del reglamento de 4 de Junio de 1870, disponen que: *para evitar las dificultades que se podrian presentar, al exigir los remitentes de mercancías, la devolucion de las guías que se inutilicen, se establece por regla general que, hecho el despacho internacional de una carga, el administrador de las aduanas entregará las guías, bajo recibo, al celador de garitas por donde deben salir las mercancías. Si la carga no saliere en la fecha de la guía, esta devuelta por el celador de la aduana, cancelándose el recibo. Presentándose la carga en la garita para salir, el celador, al poner el cumplido, entregará las guías al conductor, quien en ningún caso podrá llevar la carga fuera de la garita, sin las guías y facturas, bajo las penas legales.*

Segun esas disposiciones, ningún conductor puede recibir guías de mano del remitente de los efectos, sino que le deben ser entregados por el celador de la garita, en el mismo dia de su fecha, en el acto de salir los efectos, poniéndose la nota de haberse hecho así; y para que esas disposiciones no puedan ser eludidas se previene en el artículo siguiente, que: *cualquiera internacion que pretende hacerse con guía de fecha anterior, que por lo mismo quedó inutilizada, se considerará que se hace sin documento, incurriendo en las penas impuestas para semejantes casos.*

Don Antero Perez no recibió de ningún celador las guías, al tiempo de salir los efectos, y por esto aquellos documentos, cuyo contenido ignoró, y falsamente dijo habérselos entregado Don M. Bustamante, no podian tener la nota de cumplidos pues-

ta por el celador de garita. La contravención, confesada por Perez, de los artículos 45 y 46, que quedan copiados, presume el contrabando, que debe castigarse con el comiso de los efectos, según lo ordena el artículo 47.

Es tan severa en esta parte la ley, tan indeclinable el deber que tienen el comerciante y el conductor, de acatarlas, que el art. 47 del mismo reglamento, establece una presunción *juris et jure*, contra la cual no pueda admitirse prueba, lo que demuestra la comisión del contrabando, por el solo hecho de extraer efectos del lugar en que haya aduana fronteriza, sacándolos con guía de fecha anterior al día de su salida: y el 48 de la propia ley, estima como aprehensores del contrabando, y les dá la parte que la ley señala á los celadores que impidan la salida de efectos con guías de fecha anterior. He aquí otra presunción no discutible, que demuestra el contrabando hecho en la importación é internación de los efectos introducidos á Zacatecas.

Los efectos que se internen, procedentes de aduanas marítimas y fronterizas, deben caminar por la ruta que se les marque; así lo previenen la fracción 3ª del art. 28 del reglamento citado, 4 la 3ª del art. 15 de la ley de 28 de Diciembre de 1843. Si los efectos conducidos por Perez no fueron amparados con guías, no se les pudo fijar ruta: pero como el espíritu del legislador, en esta parte, no es otro, sino que el camino se haga por las vías usadas, para poder impedir, de esta manera, las pruebas; es claro que D. Antero Perez viniéndose por el desierto, ha procurado sustraerse de la vigilancia fiscal; y tan es esto cierto, que ha usado una vía, en la cual hay necesidad de vencer jornadas hasta de treinta leguas para obtener agua, por cuyos inconvenientes, ese camino no es usado por los arrieros.

Esta es una verdad notoria, y siéndolo de esta naturaleza, el que habla no habría tenido necesidad de promover ninguna prue-

ba para demostrarla, pero no queriendo poner á discusión este punto, por notorio que sea, promovió en 21 de Setiembre, el examen de testigos, al tenor del interrogatorio que se vé á fojas 9 del cuader no respectivo; exámen que no se verificó por la ilegal é inmotivada resistencia de los demandados, y por culpa de la persona que despachaba, entonces, este mismo tribunal, que para dictar dos autos de mera sustanciación, tardó tres días, y por haber después dirigido exhorto, con aquel objeto, al juez 1º suplente de Distrito de Zacatecas, sabiendo que falta el que debe estar colocado en ese número, y que cubriéndolo el segundo, no podía diligenciar la orden que se le libraba, por haber sido el patrono de uno de los demandados. No practicada esa prueba por la oposición de estos, y por culpa de la persona que servía el tribunal, y no siendo posible practicarla después por la ausencia de los testigos, debe darse por recibido, y demostrados los puntos que comprende el interrogatorio.

Presentando el camino del desierto tales dificultades para usarlo, debe presumirse que D. Antero Perez no vino por él, sino porque conducía efectos sin las correspondientes guías que acreditaran su legal importación, y porque pretendió ocultar, viniéndose por un camino no usado, la extracción clandestina que hizo de ellos de Villa de Mier. Este hecho nos indica forzosamente que los efectos que condujo Perez no tienen procedencia legítima, que se les sacó de Mier sin guías y sin pasar por las garitas de aquella población.

Los efectos que de Mier sacó D. Antero Perez, pasaron por las inmediaciones de Cerralvo y por Monterey, según su propia confesión, y las declaraciones de los testigos Lino Araujo, Dionisio Corrales y Melchor Ramos. El art. 55 del repetido reglamento, le impone la obligación de haber presentado esos efectos, las guías y facturas que los amparaban á la sección del

contra-resguardo de uno de esos puntos, para que examinara y calificara los documentos, y reconociera la carga; y hallándolo todo conforme á lo que las leyes previenen, permitiera la continuacion del viaje, por la ruta y en el plazo que fijara. Con esa obligacion no cumplió el conductor, porque no le era posible cumplir, supuesta la falta de guías, y su salida de Mier sin pasar por la garita, y sin conocimiento de los celadores de aquella aduana. La infraccion de la ley en este punto indica tambien claramente la ilegal importacion ó internacion de los efectos llegados á Zacatecas.

Parte de esos efectos los tomó D. Antero Perez, en el campo, de unos carretones que los traian: esto no es legal; los conductores no pueden tomar carga en cualquiera lugar, la han de recibir en la poblacion en donde se halla la oficina que expide los documentos que deben resguardarla, asegurándose de la legalidad de los mismos: así lo dispone el art. 15 de la ley de 28 de Diciembre de 1848. La infraccion de las leyes, en este punto, indica igualmente el contrabando cometido en la importacion ó internacion de esos efectos.

D. Antero Perez traia consigo las guías 124, 126, 219 primera y 219 segunda, dadas por la gefatura de hacienda de Coahuila, que debian servir para amparar los efectos que conducia: si esas guías eran legales ¿por qué llevó los efectos del Saltillo á Zacatecas, por una vía no usada, mas larga y acaso mas difícil que la comun? El dice, que porque por ella tenia situadas pasturas; pero esta excepcion no es cierta porque no está probada y no se procuró demostrar su verdad; por lo que en ese hecho debemos ver otro indicio que induce á creer haberse cometido el contrabando de que tratamos.

Se ha hecho advertir, con mucha detencion en el 4º punto de este informe, que el remitente de los efectos, D. Juan C. O'Sullivan, no sabe á punto fijo cuáles son los

que remitió con D. Antero Perez consignados á los señores Ostermayer y Cª y D. Ramon C. Ortiz, pues no ha respondido uniformemente en las distintas veces que se le ha interpolado sobre esto. Si él hubiera sido real y verdaderamente quien remitió los efectos, conservaría nota exacta de ellos para llevar la cuenta de los mismos á los consignatarios y exigir al conductor el exacto cumplimiento de sus obligaciones. Si él no era el remitente, sino como lo ha dicho, solo recibió de D. M. Mayer Levy unas notas como encargo de pedir guías para hacer la remision consignada á los expresados Ostermayer y Ortiz, en este caso tenia necesidad de haberse asegurado de la existencia de los efectos, para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contraídas en favor de Mayer Levy: debia haber hecho que los efectos se encontraran dentro del Saltillo para que las guías se hubieran podido dar legalmente. Como nada de esto ha sucedido, esas irregularidades, que importan contravenciones á la ley, constituyen tambien indicios que demuestran la comision del contrabando. Se obró con tal ligereza en el Saltillo al recabar y expedirse las guías, que sobre los defectos que se les han notado, debe fijarse la atencion en este otro: hay dos señaladas con un mismo número, como si la numeracion en esos documentos fuera circunstancia muy accidental y no necesaria, para resguardo del interesado y para cubrir la responsabilidad del empleado.

Llegados los efectos á Zacatecas allí no ha habido verdaderos consignatarios que los reciban; porque algunos manifiestan no habérselos entregado facturas y conocimientos, ni dándoles aviso de la remision; y otro que no necesitaba esos documentos, porque el dueño de los efectos, persona que no figura en las guías y facturas, habia ido á recibirlos; y todos pretenden declinar la responsabilidad que les viene por su calidad de consignatarios, del modo con que se

biciaran la importacion ó internacion de los efectos; como si el art. 40 de la ley de 28 de Diciembre de 1843 pudiera eludirlo el que se apersona en el juicio con respuestas tan vagas é insustanciales. La conducta observada por los consignatarios de Zacatecas constituye tambien un indicio que demuestra con evidencia el contrabando cometido.

La sola denuncia de que un cargamento se ha importado ó internado de contrabando, conforme á las diversas leyes que se han citado, constituye un indicio que los tribunales deben atender y apoyados en el mismo, tienen que proceder á averiguar la verdad del hecho: en el presente caso no solo ha habido denuncia; sino lo que es muy grave, los denunciantes han desaparecido sin saber cómo; así lo dice el comandante del resguardo de la frontera en su comunicacion oficial que principia á fojas 134 del cuaderno primero: ¿no es éste un indicio que habla muy alto y demuestra claramente el fraude cometido?

Las marcadas diferencias que hay entre las facturas presentadas por D. Juan C. O'Sullivan y las que existen entre estas y los efectos aprehendidos, segun el reconocimiento que de ellos se hizo, es, por último, otro indicio, de que el remitente se propuso eludir el cumplimiento de las leyes fiscales, con perjuicio de la hacienda pública.

El valor demostrativo que tengan las varias presunciones legales de que se ha hablado, el cual no han procurado destruir los demandados, les viene de la disposicion terminante de las leyes; y el que tienen los indicios que quedan anotados, deberá estimarlo la justificacion y buen criterio con que el tribunal juzgará de este negocio; no olvidándose de que el contrabando es uno de los delitos que se cometen, tomando todas las precauciones necesarias para que no pueda descubrirse fácilmente. No será exagerado compararlo con la conspiracion; respecto de cuyo delito opina M.

Bonnier en el núm. 832 de la tercera parte de su obra citada, que la demostracion de su existencia está encomendada á los indicios que se presentan. El dice: *Convienne separar el hecho principal de los hechos accesorios, á fin de probar el primero separadamente, sin perjuicio de fortificar despues la prueba que resulta, con el auxilio de la demostracion de los otros. Así en una conspiracion se trata por lo comun de probar la conspiracion misma, por medio de una multitud de circunstancias de detalle que aisladamente serian insignificantes. Despues, cuando responde el acusado que estas circunstancias no tienen la trascendencia que se les atribuye, se pretende probar la criminalidad de los hechos con el auxilio de la conspiracion, que no obstante no se ha demostrado previamente, y que en consecuencia, no se apoya ella misma sino en la reunion de estas circunstancias.*

Sesto; El art. 34 de la ley de 31 de Enero de 1856 derogó las leyes anteriores que se opusieran á eso directa ó indirectamente; pero como dicha ley no contiene ninguna disposicion relativa al modo y términos en que deben expedirse las guías para la internacion de los efectos; con cuyos documentos se acredita su legal importacion; ni habla tampoco de la manera con que han de trasportarse de la aduana marítima ó fronteriza á un lugar del interior: es claro que el silencio que guardó esa ley sobre esos puntos, fué porque el legislador reconoció el vigor en que quedaban las anteriores que los reglamentan: es esto tan cierto, cuanto que esas leyes en vez de oponerse directa ó indirectamente á las de 31 de Enero, sirviéndole de complemento, proveen eficazmente á su exacta ejecucion.

El art. 23 de la ley de Enero supone estos casos de contrabando: la introduccion clandestina de mercancías por punto no habilitado para el comercio extranjero; la introduccion hecha por punto ó puerto habilitado; pero sin los documentos legales ó sin

noticia de los empleados de las aduanas: la internacion de mercancías sin documentos que acrediten su legal importacion. Comprende otros cuatro casos de contrabando, que no teniendo analogía con el presente no hay necesidad de exponerlos.

El artículo 26 de la propia ordenanza señala para el primer caso la pena de comiso de los efectos, de sus trasportes y una multa de un veinticinco por ciento sobre el valor de aquellos: para el segundo la misma pena, diez años mas de presidio y la inhabilidad del contrabandista para intervenir en negocios que afecten á la hacienda pública, quedando además nulificada su firma para todo acto oficial ó mercantil: y para el tercero el pago de dobles derechos de importacion y triples de internacion.

Esas disposiciones suponen que la importacion se ha hecho fraudulentamente, ó que verificada con arreglo á las leyes, se hizo la internacion sin documento que acredite la legalidad de la importacion. En el primer caso ordenan se repare la falta con la pena mayor señalada; y en el segundo, esto es, el transporte de mercancías sin documentos legales que las cubran, lo penan con el recargo de derechos.

Debemos pues fijarnos en esto, en que la importacion podrá haberse hecho con sujecion á las leyes; pero que los efectos se han internado infringiéndolas, por no ir las mercancías amparadas con los documentos que deban cubrirlas.

Aprehendidas estas, los interesados estarán obligados á probar que la importacion se hizo con total arreglo á lo que la ordenanza le previene; y sucediendo así, solo sufrirán el recargo doble y triple de derechos por el desprecio con que han visto las leyes, no recabando guías que legalicen la internacion: mas si faltase la prueba, como sucede en el presente caso, de no haberse hecho la importacion con arreglo á ordenanza, entonces, además del recar-

go de derechos per la falta de guías, tendrá lugar el comiso de los efectos y por la indicacion criminal que resulta deberá procederse á practicar la averiguacion correspondiente, determinada en el artículo 54 de la ley de 28 de Diciembre de 1843.

Además las razones que se acaban de exponer para creer vigentes todas las leyes anteriores á la de 31 de Enero de 1856, existen varias disposiciones que así lo declaran: el reglamento de 4 de Junio de 1870 recuerda el vigor de la de 28 de Diciembre de 1843 en todas las disposiciones que contiene administrativa, judicial y penalmente, segun los preceptos contenidos en sus artículos 25, 47, 59, 65 y 66.

Los efectos introducidos á Zacatecas fueron importados de contrabando y se les internó de la misma manera, segun quedó demostrado; y por lo mismo se les debe aplicar la pena de comiso, con mas el recargo de dobles derechos de importacion y triples de internacion, por no haber caminado con guías que los ampararan. Como el conductor D. Antero Perez se prestó voluntariamente á ayudar á cometer el contrabando, no asegurándose de que la internacion era legal: y haciendo que se le entregaran las guías con que debía acreditarlo, conforme al artículo 25 de la citada ley de 28 de Diciembre de 1843 se deben declarar caidos sus trasportes en la pena de comiso.

Las facturas de las guías 124, 126, 219 primero y 219 segundo que aparecen á fojas 23, 25, 27 y 29 del cuaderno primero, puestos por D. Juan C. O'Sullivan, presentadas al gefe superior de hacienda de Coahuila, para que se le expidieran dichas guías, se hallan en papel simple, y como dicho funcionario las admitió y autorizó; tanto el comerciante como el empleado del Saltillo han infringido los artículos 23 de la ley de 14 de Febrero de 1856 y primero de la de 13 de Setiembre de 1867 y han por lo mismo incurrido en una multa

de un cinco por ciento cada uno, sobre el valor de dichas facturas; la cual este superior tribunal debe imponer y hacer efectiva.

El ciudadano Promotor fiscal del juzgado de Distrito de Zacatecas, y el ciudadano juez del propio juzgado, pasaron en silencio esa infraccion; por no haberla reclamado, estan obligados á satisfacer el valor del papel en que debian haberse extendido las facturas, y á exhibir una multa equivalente al duplo de dicho valor, segun lo dispone el artículo 55 de la ley de Febrero citada; cuya declaratoria tambien pide el que habla que pronuncie ese tribunal.

Ha procurado el exponente responder á los argumentos que los demandados han alegado en favor de la causa que defienden; pero no los ha seguido, el que suscribe, al terreno de la calumnia y del insulto: esas armas no se las disputa, ni las usará jamás; y no reconociéndoles derecho para que se hayan producido con lenguaje tan licencioso, formalmente pide á este superior tribunal, les imponga las preparaciones que las leyes designan.

Habiendo demostrado la verdad de cada uno de los puntos que se propuso tocar el que habla, en este informe, concluye pidiendo á ese tribunal.

Primero; que declare caidos en la pena de comiso, los efectos aprehendidos á D. Antero Perez en la ciudad de Zacatecas el 19 de Mayo último; así como tambien el tren de trasportes perteneciente al mismo Perez.

Segundo; que se imponga á los consignatarios Ostermayer y compañía y á D. Ramon O. Ortiz, la obligacion de pagar por los mismos efectos, dobles derechos de importacion, y triples de internacion, segun aforo de la ordenanza.

Tercero; que se mande proceder criminalmente contra D. M. Mayer Levy, D.

Juan C. O'Sullivan y demás personas que resultaron complicadas en ese contrabando.

Cuarto; que se imponga á D. Juan C. O'Sullivan y al gefe superior de hacienda de Coahuila D. E. Gallo, una multa equivalente al 5 por ciento del valor de las facturas de guías que exhibirá cada uno en la oficina principal del papel sellado de Zacatecas.

Quinto; que se condene á los demandados en las costas de este juicio.

Sesto; que se levante al ciudadano Promotor fiscal del juzgado de Distrito de Zacatecas, la inmotivada advertencia que le hizo aquel ciudadano juez.

Setimo; que se comuniqué esta sentencia para su ejecucion, en la parte que le toca, al gefe superior de hacienda de Zacatecas, y al ministerio de hacienda para su conocimiento.

Guadalajara, Diciembre trece de mil ochocientos setenta y uno.—*Juan Robles Martinez.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Guadalajara, Enero veintidos de mil ochocientos setenta y dos.

Vistos.

El tribunal de Circuito de Guadalajara para resolver en 2ª instancia el juicio de comiso fallado en 1ª, por el juzgado de Distrito de Zacatecas, contra los Sres. Ostermayer, Ortiz y Ca, y Antero Perez, por 295 tercios de ropa, importados segun se afirma en aquella sentencia por la aduana de Mier, el dia 2 de Mayo de 1871, hará el examen de las siguientes cuestiones.

Competencia del tribunal de la federacion.

Relacion de los hechos, y procedimientos.

Pruebas de cargo y descargo.

Valor legal de ellas.

Indicios segun el C. Promotor fiscal.

Concordancia de las leyes vigentes sobre contrabando y sobre defraudacion de derechos.

Declaracion hecha por el juzgado de Distrito de Zacatecas, sobre extranjeros perniciosos.

Consideraciones fundadas en la verdad histórica del proceso.

En la presente cuestion se trata de averiguar si ha habido ó no defraudacion de derecho por la internacion de efectos extranjeros por una aduana de la frontera del Norte, quebrantando los artículos 6º, 2º, 3º y 4º del art. 28, caso 4º del art. 24 y art. 29 de la ordenanza de aduanas marítimas y fronterizas de 31 de Enero de 1858, y el art. 65 del reglamento de 4 de Junio de 1870 (segun la sentencia de 1ª instancia). Es pues, indudable la competencia de los jueces y magistrados de la federacion, para conocer, segun el art. 97, fraccion 1ª y 2ª de la Constitucion general de 1857, en el presente negocio.

D. Antero Perez, conductor de ocho carros de grande transporte, segun dice el Promotor fiscal de la federacion, con mercancías que amparaban guías expedidas en el Saltillo, el día 9 de Mayo de 1871 bajo los números 124 (B) 126 (C) 217 segundo (A) y 219 (fojas 22 á la 28 del expediente) por el número total de 275 tercios de efectos extranjeros: entró por las garitas de Guadalajara y Zacatecas, cuyos empleados pusieron el cumplido en las guías auténticas del gefe de hacienda del Saltillo, selladas con el sello del ministerio de hacienda, y con los requisitos legales, quien las expidió porque en el Estado de Coahuila no hay alcabalas, y aquel carrero llegó á presentar con sus carros su carga, á la aduana de la ciudad referida, el día 19 de Mayo, á las ocho y media de la mañana; esto es, once dias despues de su salida del Saltillo.

Empiesa el procedimiento con la comunicacion del C. J. Gonzalez, de fecha 12 de

Mayo del año de 1871, trascribiendo al juez de Distrito de Zacatecas el siguiente telégrama:

“Del Saltillo me denuncian conduce para esa, un tal Perez, ocho carros mercancías, procedentes de Mier, y conducidas de contrabando. Salieron el 9 del Saltillo, de donde es probable lleven malos documentos.”

A fojas 9 del expediente sigue la comunicacion, que con el sello de la gefatura de hacienda del Estado de Zacatecas y con el número 787 dirigió el C. J. Gonzalez al juez de Distrito, el día 19 de Mayo, trascribiéndole la que á las nueve de la mañana de aquel día, recibió del C. Abraham Gonzalez, gefe de la seccion de alcabalas, avisándole que á las ocho y media de la mañana se habia presentado en aquella oficina el conductor Antero Perez con 295 tercios de ropa en ocho carros, procedentes de la frontera.”

Por órden del mismo gefe de hacienda, fueron depositadas las mercancías y los trenes; y detenidos ó incomunicados los carreros, de acuerdo con el Promotor fiscal; (fojas 9.)

El C. juez de Distrito que estaba ausente de Zacatecas, despues de haber dictado su auto de fecha 12 de Mayo para la aprehension del cargamento que se habia denunciado por el gefe del contra-resguardo de la frontera del Norte, como importado probablemente de contrabando, dictó su auto de fecha 20 de Mayo, mandando tomar su declaracion á Don Antero Perez y á sus carreros (fojas 40); y concluyó la averiguacion el mismo día 20, declarando el juez en su auto relativo, que se pusiera en libertad á los detenidos, por no haber motivos para su formal prision, (fojas 40 á 50).

Con esto concluyó el procedimiento contra el conductor Antero Perez y sus carreros, y la gefatura de hacienda de Zacatecas formó la acta administrativa (fojas 22)

para decretar el comiso por haberse infringido á su juicio, los artículos 23 fraccion 4ª del A. de A. M.; y de conformidad con el art. 52 de la pauta de comisos de 1843, citó á los interesados para que concurrieran á las tres y media de la tarde á hacer valer sus derechos respectivos, y los Sres. Ostermayer, Ortiz y Perez manifestaron, que no estaban conformes con el juicio administrativo.

Habiendo remitido la gefatura de hacienda la acta al juzgado de Distrito, con las guías y demas documentos (fojas 10 á 29) el C. juez por auto de 22 de Mayo citó á los Sres. Ostermayer, Ortiz y Perez para abrir el juicio de comiso.

El Promotor fiscal de la federacion formuló su demanda en los términos siguientes: (fojas 24) "que pide la pena de comiso en que han incurrido los 295 tercios de ropa, carros y acémilas, procedentes de la frontera del Norte, con guías de la gefatura de hacienda de Coahuila, sin ninguno de los requisitos legales prevenidos por la ley de 31 de Enero de 1856 y reglamento de 31 de Mayo de 1870. Que funda su demanda, además del hecho referido, en los siguientes:

Primero; que siendo la carga procedente de Mier, donde se recibió por el conductor Don Antero Perez, de las cuatro de la tarde á las nueve de la noche del día 2, se condujo sin la respectiva guía de internacion, por caminos extraviados y omitiendo la seccion del contra-resguardo de Cerralvo donde en caso de traer la guía debía revisarse por la seccion y hacer en los documentos la anotacion mandada por el reglamento de 31 de Mayo.

Segundo; porque tampoco se revisó en el Saltillo por el jefe de hacienda, supuesto que detenido el tren dos dias, en la fábrica de Arizpe á dos leguas de distancia de dicha ciudad, allí se trasbordó al tren de Perez el resto de los efectos que habian conducido desde Mier unos carretones, empren-

diendo aquel la marcha por caminos extraviados para esta ciudad, (Zacatecas) el día 17 del presente; todo lo que pone á la internacion de los efectos bajo la disposicion de los artículos 45 y 46 del reglamento de 31 de Enero y 29 de la pauta de comisos, y pide que se falle de conformidad con las fracciones 1ª y 4ª art. 26 y 4ª art. 27 del arancel de aduanas marítimas y fronterizas; art. 45 del reglamento de 31 de Mayo de 1870 y 29 de la ley de 28 de Diciembre de 1843.

El señor Ostermayer, por medio de su abogado contestó: "que niega los hechos en que funda su demanda el ministerio público, sin que por esto se entienda que hace suya la responsabilidad que de ellos pudieran nacer, pues que la carga que le ha sido consignada, viene cubierta con guías legítimas expedidas en el Saltillo con sujecion á las leyes."

El señor Lic. Piedras, abogado de D. Ramon Ortiz, dijo: "que la carga de su poderdante no puede ser declarada en la pena de comiso, por la clara razon de haber venido á la plaza del Saltillo, cubierta con los documentos legales sin que estos tengan defecto alguno;" que las omisiones que señala el C. Promotor, solo comprenden á las guías de las aduanas marítimas, que no pueden exigirse en el caso, ni menos imponer pena á su poderdante por omisiones en que no ha incurrido;" "que no por lo expuesto confiesa que se han cometido los hechos que se refieren por el C. Promotor, y no constándole lo que haya pasado con la carga hasta la introduccion á la plaza del Saltillo, niega tales hechos reservándose alegar en favor de sus derechos en vista de las pruebas."

El señor Lic. D. Ignacio Rios Ibarrola, dijo á nombre de D. Antero Perez: "que siendo legítimos los documentos con que han venido cubiertos los 295 bultos que han sido contenidos, los cules presentó á la administracion de rentas de esta ciudad,

con fundamento de lo determinado en el art. 25 de la pauta de comisos, suplica al juzgado se sirva absolverlo del juicio, declarando que el tren de carros de su propiedad no ha caído en la pena de comiso."

El C. Promotor pidió el término de prueba y que se compulsara testimonio de las declaraciones rendidas en la averiguación practicada por el contrabando, ratificándose en este juicio los testigos.

El juzgado mandó agregar: "las comunicaciones de la gefatura de hacienda relativas á las diligencias precautorias para la aprehensión de la carga denunciada; los exhortos, el acta administrativa y las guías que se pidieron á la administración de alcabalas," y se abrió el juicio á prueba por el término de treinta y un días por estar la villa de Mier á 173 leguas de Zacatecas. Dispuso el C. juez que se citase á los interesados para que se agreguen como pruebas "los testimonios de las diligencias practicadas en averiguación de la responsabilidad que tuvieran los empleados de hacienda y del contra-resguardo de Monterey por el objeto del presente juicio" y para la ratificación de testigos.

El señor Lic. D. Manuel Rios Ibarrola, hizo presente, que dejaba á salvo los derechos de su poderdante Ostermayer, por lo relativo al contenido de las diligencias.

Para la ratificación de los testigos D. Antero Perez y sus carreros Catarino Morales, Luis Araujo, Dionisio Corrales, Melchor Ramos, Juan Gomez, Mauricio Zamaripa, Francisco Zárate, Gerónimo Zapata y Juan Hernandez, se les leyeron sus declaraciones, despues de haber hecho la protesta legal en presencia del Promotor, de los interesados y de sus abogados, y las afirmaron y ratificaron, agregando D. Antero Perez que: "estando algo confusa su declaración respecto de la carga que sacó del Saltillo, (fojas 40 vuelta) y queriendo como lo tiene ofrecido, conducirse con verdad en este negocio, manifiesta que dicha

carga la recibió fuera de dicho lugar en unos carretones que estaban cerca de la fábrica de Arizpe."

Las diligencias que el juzgado de Distrito llama precautorias (fojas 40 á la 51) y que se agregan en testimonio, arrojan los siguientes datos, en los que se ha fundado todo el proceso.

Primero; D. A. Perez, detenido é incomunicado en un cuartel, dijo, bajo la promesa de decir verdad ante el juzgado de Distrito de Zacatecas: "que sacó de Mier 150 tercios de la casa de los señores Bustamante y C^{as}, consignados para el Saltillo á D. Juan C. O'Sullivan, cuya carga la resguardaban las guías de la administración de Mier, que ademas; sacó 145 tercios de ropa de la casa citada de O'Sullivan, cubriendo esta carga con los documentos que ha presentado á la aduana de esta ciudad (Zacatecas) en los cuales están comprendidos los 150 tercios de Mier, porque los primeros documentos se los recogió la citada casa de O'Sullivan en el Saltillo, y le dió los que ha presentado á la aduana" "Que la autoridad que firmó los nuevos documentos, [segun la pregunta del C. juez] supone que seria el gefe de hacienda del Saltillo que se llama D. Eduardo Gallo, aunque no lo puedo asegurar, porque no ha visto los documentos, por la confianza que tiene en la casa que le dió la carga." "Que los documentos le fueron entregados por la casa de Bustamante y C^{as};" "que de Mier salió por Marín á salir por Carvajal y de este punto al Saltillo, haciendo seis dias y medio sin encontrar en el tránsito ningún punto donde estuviera establecido ningún agente del contra-registro." "Que personalmente no la hizo, (la presentación de documentos á la gefatura de hacienda etc.) porque entendió que esto le correspondia al consignatario de la carga á quien entregó los documentos de Mier" "Que del Saltillo salió para Mier siguiendo por Monterey, Salinas, un lado de Cerral

vo, todo el camino real, y á la vuelta por los puntos que tiene dichos, por ser el camino mas recto; pero ignorando que en Cerralvo hubiera contra-registro, no presentó los documentos, pues como tiene dicho, era la primera vez que andaba el camino, y ademas, porque en Matamoros, sabia que no habia agua para la mulada en su tránsito que va de Monterey por Cado-royta, China y Matamoros que es donde escasea el agua, y por lo mismo prefirió el camino que tiene indicado." Que vino por el camino de S. Luis por el Salado á el rancho, Soquite hasta esta ciudad, porque por este camino tenia situadas pasturas hasta salir á San Cristóbal." Que no puede decir de una manera especial si algunos de dichos empleados (del contra-resguardo de Mier ó de la gefatura de hacienda del Saltillo) tengan participio en el negocio; pero sí puede asegurar, que si en él hay algun fraude, no puede proceder sino de parte de algunos empleados de la federacion que se hayan puesto de acuerdo de la manera que indica la pregunta."

Segundo; Cuatro declaraciones de los carreros de D. Antero Perez (fojas 43 vuelta á la 47) confirman algunos detalles del viaje del tren de carros desde el Saltillo, aunque no expresan el número de tercios de ropa que condujeron de aquella villa, ni la clase de mercancías que los formaban, ni las horas y dias de camino en que se hizo el viaje.

Tercero; Otras cuatro declaraciones se refieren únicamente al viaje del Saltillo á Zacatecas sin otros pormenores (fojas 48 á la 50.)

El C. Promotor fiscal de la federacion promovió las siguientes pruebas ante el juzgado de Distrito.

Primera; Que D. A. Perez y los representantes de los consignatarios, presenten originales los conocimientos bajo los que se condujeron de Mier al Saltillo los 150 bultos que Perez recibió de Bustamante y C^a y los conocimientos bajo los que condujo

del Saltillo á Zacatecas los 295 tercios que son objeto del presente juicio.

Segunda; Que el juez de 1^a instancia de Mier y el de Distrito de Coahuila hagan el primero, que la casa de Bustamante y C^a presente sus libros y se saque testimonio de las facturas que la casa remitió el dia 2 [de Mayo] con A. Perez á J. C. O'Sullivan y las constancias legales de haber sido bien importados los efectos remitidos por aquella aduana; que el juez de Mier pida copias certificadas de las guías expedidas para la internacion de los efectos referidos y que el juez de Distrito del Saltillo "requiera la presentacion de los libros de O'Sullivan" y se saque testimonio de las facturas que el dia 7 del corriente [Mayo] recibió de la casa de Bustamante y C^a y de las que el dia 9 expidió á la consignacion de los señores Ostermayer y C^a y R. C. Ortiz.

Tercera; Que se pida tambien á la gefatura de hacienda las guías procedentes de la aduana de Mier con que se cubrian los efectos de dicha aduana."

Los señores Ostermayer, Piedras, Rios é Ibarrola y Perez manifestaron á la vez que fueron citados, el primero, que no tiene los conocimientos; y el último que no los trajo;

El dia 25 del mismo mes de Mayo, el Promotor presentó las posiciones que se leen de la foja 52 vuelta á la 54, para que las absolviera el conductor D. A. Perez, quien las absolvió negando la 1^a, 2^a, 3^a, 4^a y 5^a y declarando categóricamente sobre la 6^a

Para revisar la carga, marcas, empaques etc. el juzgado de Distrito practicó la diligencia que consta en autos desde la foja 54 vuelta á la 58. Tambien se mandó hacer o avalúo de los efectos, por dos peritos nombrados por el juzgado, y á solicitud de D. A. Perez, se avaluó su tren de carros y se le entregó bajo de fianza, [fojas 20.]

Durante el término de prueba, el C. Pro-

motor pidió la práctica de varias diligencias como se vé en las fojas 67 y 100.

Cerrado el término de prueba y hecha la publicacion de pobransas, se agregaron al expediente los informes y comunicaciones del jefe del contra-resguardo de la frontera del Norte: una informacion, en papel simple, promovida por él ante el juzgado del Saltillo: los exhortos diligenciados por el juzgado de Distrito del Saltillo y los jueces de Cerralvo y de Mier: las copias de las guías remitidas por esta aduana y que se ven desde la foja 172 á la 189, y el documento [fojas 156] de comparacion entre los efectos remitidos del Saltillo para Zacatecas y los de igual clase recibidos en el Saltillo procedentes de Mier.

El C. Promotor fiscal y los abogados de los señores Ostermayer, Ortiz y Perez, presentaron sus alegatos por escrito el dia 11 de Julio; se citó para sentencia y se pronunció esta el dia 12, declarando el comiso de los efectos, con fundamento de los artículos de las leyes citadas por el Promotor, en la demanda, imponiendo las demás penas de estos, y declarando que son perniciosos al país los extranjeros D. Jesus C. O'Sullivan y M. Mayer Levy, y que se dé cuenta al gobierno supremo de la República para que dicte la disposicion que á bien tenga.

Apelaron de la sentencia los demandados y ante este tribunal de Circuito se ha seguido el juicio en 2ª instancia.

Despues del escrito de espresion de agravios y de varios incidentes de recusacion, el ciudadano Promotor fiscal promovió prueba de interrogatorio de testigos y documentos sobre informes que se pidieron al ministerio de hacienda, al jefe de hacienda de Coahuila y al jefe de la seccion de alcaballas de Zacatecas.

Recibidos los informes de fojas 18, 22 y 25 del cuaderno de pruebas del Promotor sin examinar á los testigos, porque pasó el término y no se pudieron presentar por

estar fuera de esta ciudad, segun dijo en una notificacion el ciudadano Promotor, se citó para sentencia y se oyó el informe á la vista que leyó el C. Lic. Juan Zelayeta, y se mandó agregar el del C. Lic. Juan Robles Martinez, como Promotor fiscal de la federacion á quien de palabra hizo observaciones el C. Lic. Francisco O'Reilly.

El magistrado que suscribe, estima las siguientes pruebas de cargo y los indicios que se desprenden del procedimiento, segun los escritos del ministerio fiscal de la federacion.

Primera; haber venido D. Antero Perez desde la villa de Mier con su tren de carros, en los que condujo hasta Zacatecas 295 tercios de ropa sin guías legítimas, porque las de circulacion expedidas en el Saltillo por el jefe de hacienda, no expresan procedencia.

Segunda; haberlo declarado así D. Antero Perez y cuatro de sus carreros cuando se les puso detenidos é incomunicados, para practicar una diligencia precautoria.

Tercera; el denuncia hecho por el jefe del contra-resguardo de Monterrey en su telégrama del dia 12 de Mayo ratificado con estension por sus demás telégramas y comunicaciones, tiene íntima relacion con aquellas declaraciones de los testigos.

Cuarta; las guías de internacion de Mier á cuya procedencia se refieren las guías expedidas en el Saltillo, contienen algunas diferencias sobre calidad, cantidad, nombre de los efectos y marcas de los tercios.

Quinta; el estado comparativo formado por un empleado del contra-resguardo, hace aparecer esa diferencia.

Sesta; la negativa de los consignatarios á presentar los conocimientos y facturas y la del remitente del Saltillo para presentar sus libros con el pretexto de que los habia cerrado y remitido á Liverpool, meses antes de Mayo, segun su costumbre, para dar

cuenta á sus consocios, esa negativa es dolosa.

Sétima; las constancias de la aduana de Mier de no haber expedido guías el día 2 de Mayo para el Saltillo; y de la casa de Bustamante y compañía de no haber hecho remision de efectos aquel día, es una prueba de que los efectos que condujo Perez desde el Saltillo á Zacatecas, fueron importados ó internados por la villa de Mier, sin los requisitos de las ordenanzas de aduanas marítimas y fronterizas.

Octava; la ratificación que los testigos hicieron en el juicio de comiso de sus declaraciones en las diligencias precautorias y las posiciones que absolvió A. Perez tienen un valor jurídico indisputable.

Novena; los denunciantes anónimos del contrabando, han desaparecido, sin saberse por qué no se presentaron en el juicio.

Décima; D. Antero Perez no ha probado que siguió el camino del Salado y el derrotero que señala hasta Zacatecas, porque tenía pasturas situadas hasta San Cristobal, que no es el camino comunmente transitado por los carros.

Undécima; el tren de carros de Perez, no entró al Saltillo; se situó en la fábrica del Labrador ó de Arizpe á dos leguas ó á media legua de la ciudad, segun el Promotor fiscal de la federacion en Zacatecas dice en su demanda y en su alegato de buena prueba, y no recibió la carga dentro de aquella poblacion.

Duodécima; el gefe de hacienda del Saltillo no revisó la carga, cuando expidió las guías para cubrir su circulacion en el interior.

Décimo tercio; los 295 tercios de ropa que condujo D. A. Perez á Zacatecas desde el Saltillo, son los mismos que recibió en Mier el 2 de Mayo, que condujo al Saltillo y de los que recibió en la fábrica de Arizpe 145 tercios de unos carretones que vinieron con su tren desde Mier.

Las alegaciones de descargo, son las siguientes:

Primera; D. Antero Perez condujo del Saltillo el día 9 de Mayo, 295 tercios de ropa bajo las guías números 124 (B.) 126 (C.) 219 segundo (A.) y 219.

Segunda; estas guías son de circulacion y no de internacion, y han sido expedidas legítimamente por la gefatura de hacienda del Saltillo; porque en Coahuila no hay alcabalas.

Tercera; las declaraciones de D. Antero Perez y de sus carreros deben tenerse como inquisitiva que se toma á los que se suponen cómplices en un delito de contrabando y no estimar como declaraciones de testigos en un juicio civil.

Cuarta; las guías de circulacion para el comercio interior, no contienen procedencia porque ninguna ley previene que así se haga.

Quinta; conforme á las leyes civiles no se puede recibir la declaracion de testigos bajo el apremio de la prision ó incomunicacion y antes de empesar la demanda; y en consecuencia, sus declaraciones no tienen valor legal.

Sesta; el Saltillo no es aduana fronteriza, ni marítima, y las guías que allí se expidan no están comprendidas en las prescripciones de las aduanas marítimas y fronterizas.

Sétima; al expedir esas guías el gefe de hacienda de Coahuila, ha cumplido con su deber, supuesto que en el juicio de responsabilidad que por órden del ministerio de hacienda, y segun la averiguacion precautoria practicada en Zacatecas, el 20 de Mayo, se declaró por el juzgado de Distrito del Saltillo y el tribunal de Circuito de Monterey, que no habia motivo para declarar á aquel empleado bien preso.

Octava; D. Antero Perez que ha estado en el punto de la fábrica de Arizpe, desde el día 7 de Mayo al día 9 por la mañana, se ha presentado espontáneamente á la

aduanas de Zacatecas con la carga y sus documentos sin que ningún empleado fiscal le impidiera el paso en su camino desde el Saltillo.

Novena; que las diligencias promovidas por el jefe del contra-resguardo de Monterey ante un juez incompetente, son nulas y no prueban en derecho.

Décima; que son también nulas en derecho las constancias que se mandaron agregar en el juicio de comiso; de las diligencias que con el carácter de averiguación criminal, se practicaron el día 20 de Mayo, por el juzgado de Distrito.

Undécima; que la contestación negativa de los señores Bustamante y O'Sullivan para no presentar sus libros por no tenerlos, se explica por la situación de las poblaciones de la frontera que han estado en revolución, y por la conclusión de sus negocios.

Duodécima; las guías expedidas en el Saltillo, con los requisitos legales, son documentos auténticos que no se destruyen por la declaración de personas que se reputan unas veces como testigos y otras cómplices de un delito fiscal.

Décima tercera; los consignatarios no son responsables por hechos que se suponen anteriores á la relación jurídica que existe entre ellos y los remitentes de una carga cubierta con documentos legales.

Décima cuarta; aun probados los hechos que pretende demostrar el ministerio fiscal, no se puede aplicar la pena de confiscación.

Décima quinta; los señores M. Levy y O'Sullivan, á quienes se declara extranjeros perniciosos en la sentencia de primera instancia, no han sido partes en este juicio.

Por la anterior relación de los hechos, por la vista de todos los documentos oficiales y el examen de las pruebas presentadas en este juicio y la concordancia de todas las leyes fiscales que se citan en él, por los representantes del fisco y de los

señores Ostermayer, Ortiz y Perez el tribunal de Circuito de Guadalajara,

Considerando:

Primero; que es un hecho plenamente demostrado que D. Antero Perez salió del Saltillo el día 9 de Mayo de 1871, con guías auténticas de la gefatura de hacienda de Coahuila llevando 295 tercios de ropa para Zacatecas.

Segundo; que es otro hecho plenamente demostrado, que el conductor de aquella carga se presentó espontáneamente con ella y sus documentos á la aduana de Zacatecas, el día 19 de Mayo.

Tercero; que también está demostrado plenamente, que los vigilantes que mandó el jefe de hacienda de Zacatecas á Mazapil para aprehender la carga que se había denunciado desde Monterey como amparada con documentos, *probablemente malos*, no la encontraron en su tránsito ni el denunciante de esa carga se presentó durante el juicio, ni el conductor de ella fué encontrado por los empleados públicos en el espacio que hay del Saltillo á Zacatecas, á pesar de la vigilancia que aquellos ejercían desde el día 12 de Mayo, y á pesar de que el conductor Perez tenía carros pesados que no pueden conducirse por caminos extraviados, como veredas, ó escasos de víveres ó pasturas.

Cuarto; que las guías que amparan los 295 tercios de ropa son legítimas, expedidas por un empleado superior de la federación, autorizado para ello.

Quinto; que por una sentencia ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada, aquel empleado ha sido declarado irresponsable de los hechos de expedición de guías que forman el presente juicio de comiso.

Sexto; que las diligencias que por el juzgado de Distrito de Zacatecas se llaman precautorias han sido formadas contra las leyes (L. 2ª tít. 16 part. 3ª L. 8ª tít. 10 part. 3ª)

Sétimo; que las diligencias practicadas á solicitud del jefe del contra-resguardo, en el Saltillo, en papel simple, y sin delegación del juez de Distrito de Zacatecas que era el competente, no son de tomarse en cuenta, porque se infringieron preceptos terminantes de leyes que están vigentes.

Octavo; que los informes y comunicaciones que el jefe del contra-resguardo de la frontera del Norte, dirigió en papel simple y como autoridad, cuyo carácter no le da la ley, deberían estar en la forma legal, supuesto que él mismo dice que es *parte* en el negocio y que no *renuncia á su derecho*.

Noveno; que no está probado que D. Antero Perez condujera por caminos extraviados su tren de carros, con 295 tercios de ropa, desde el Saltillo.

Décimo; que el ministerio público ha reconocido que las guías de circulación expedidas en el Saltillo, son legales, supuesto que sus observaciones se refieren á las condiciones que debieran tener si hubieran sido guías de internación, expedidas en aduana marítima ó fronteriza, que no es la plaza del Saltillo.

Décimo—primero; que el estado comparativo remitido de Monterey, sobre los efectos introducidos al Saltillo, para demostrar la diferencia que hay entre aquellos efectos y los que se cubren con las guías en cuestión, no tiene importancia alguna porque carece de las formalidades de la ley y del sello del derecho.

Décimo—segundo, que cualesquiera que sean las diferencias que se encuentren en calidad, clase etc. entre algunos de los efectos remitidos del Saltillo, bajo las guías que fueron expedidas por la gefatura de hacienda de aquel Estado y los efectos que se desempacaron para examinarlos, por el juzgado de Distrito de Zacatecas, en la aduana de esta ciudad, no es esa cuestión de la competencia de este tribunal.

Décimotercero; que los Sres. Ostermayer Ortiz y compañía no tienen personalidad en

este juicio, como consignatarios de una carga remitida de una plaza del interior, según las leyes.

Decimocuarto; que la presunción legal es superior á la presunción de hombre, y según el art. 23 y el 25 de la pauta de comisos, existe aquella en favor del conductor de las mercancías que presenta documentos en forma.

Decimoquinto; que según las doctrinas de un eminente jurisconsulto, como Mittermaier, en su tratado sobre prueba criminal (traducción española, página 81, 157, 159, 162, 242, 246, 367, y 439) el tribunal de Circuito juzga que los datos del presente proceso arrojan apenas una probabilidad y no la certeza indispensable para pronunciar sentencia de condenación, según las pruebas que exige la ley.

Decimosesto; que la declaración hecha por el juzgado de Distrito, de que los extranjeros O'Sullivan y M. M. Levy son perniciosos á la república, es contraria al derecho público interno y externo, porque no corresponde al poder judicial la facultad de hacer tal declaración, ni los extranjeros que viven en México, sea cual fuere su nacionalidad, dejan de gozar de las garantías individuales que la Constitución reconoce en todos los hombres: ni tienen aquellos el derecho de hacer reclamaciones cuando en sus asuntos judiciales se les administre plena y cumplida justicia: ni en el presente caso ha habido juicio administrativo para hacer aquella declaración.

Decimosétimo; y

Considerando por último; que en el juicio de 1ª instancia se hicieron gastos de avalúos, otros de vigilancia para aprehender el contrabando que no se aprehendió y se admitieron documentos que no están en forma, ni se justificaron aquellos gastos, ni pudo el juzgado de Distrito decretarlo. Se resuelve por este tribunal el presente juicio con fundamento de las doctrinas citadas y de las de Bentham en su tratado

de pruebas judiciales página 53, 201, 204 219, 222, tomo 2º páginas 51, tomo 3º páginas 139, 149, y 210 tomo 4º) de Klüber en sus obras de "Droit Des Gens" y de las leyes 2º tít. 16 part. 3ª, lib. 26 tít. 16 part. 3ª lib 28 tít. 16 part 3ª y lib 10 y 21 tít. 16 part. 3ª. con las siguientes proposiciones:

Primera; se revoca la sentencia de 1ª instancia, pronunciada por el juzgado de Distrito de Zacatecas, en sus proposiciones 1ª, 2ª, 5ª y 6ª;

Segunda; se declara que no es caso de contrabando ni de importacion ó internacion fraudulenta de efectos, la introduccion á Zacatecas de 295 tercios de ropa conducidos con guías legales, por D. Antero Perez desde el Saltillo.

Tercera; la declaracion hecha por el juzgado de Distrito de Zacatecas contra D. Juan C. O'Sullivan y M. Mayer Levy, como extranjeros perniciosos á la república, no es de las atribuciones del poder judicial; ni puede perjudicar el nombre y reputacion de aquellos comerciantes.

Cuarta; dese cuenta al Ministerio de Hacienda de los gastos hechos en este proceso

Quinta; se aplica la multa de la ley de Papel Sellado á todos los que han presentado documentos que no están estendidos en el sello correspondiente, en este juicio.

Sesta; no se hace declaracion alguna sobre los derechos que al Estado de Zacatecas correspondan por la adulteracion en calidad y medida de algunos efectos introducidos bajo las guías 124, 126 219 segundo y 219, porque no es de la competencia de este tribunal.

Notifíquese y sáquense los testimonios respectivos.—*Antonio Perez Verdía*—*Tomás Bravo*, secretario.

Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.

El Procurador general de la Nacion dice: que en el juzgado de Distrito del Estado de Zacatecas se instruyó un juicio de comiso por sospechas de que un cargamento de efectos extranjeros habia sido introducido á aquella plaza sin documentos legales y sin los requisitos que las leyes fiscales exigen.

Dieron origen al procedimiento varios telégramas dirigidos por el jefe del contrasguardo de la frontera del Norte al jefe superior de hacienda del Estado de Zacatecas. En esos telégramas se denunciaba, que un tal Perez conducía para Zacatecas, y procedentes de Mier, ocho carros cargados de mercancías que salieron del Saltillo el día 9 de Mayo de 1871 y probablemente iban con malos documentos.

El jefe de hacienda de Zacatecas dictó varias providencias, y entre ellas la de situar algunos empleados del resguardo en el lugar que creyó conveniente para que espíasen la carga y procedieran á su aprehension.

Las providencias del jefe de hacienda de Zacatecas fueron perfectamente inútiles; y la verdad de los hechos fué, que D. Antero Perez, dueño de ocho carros en que conducía 295 tercios de efectos extranjeros, procedentes del Saltillo con guías expedidas por aquella gefatura de hacienda, entró por las garitas de Guadalupe y Zacatecas, y se presentó en la Aduana de esta última ciudad con el cargamento y guías arriba mencionadas. Así lo avisó oficialmente el mismo jefe de hacienda de Zacatecas, á quien el jefe de la seccion de Alcabalas de aquella aduana habia dado ántes el respectivo parte oficial.

Tales son los hechos que dieron origen, primero á varias providencias gubernativas dictadas por el jefe de hacienda de Zacatecas, despues á varios procedimientos

del Orden criminal contra D. Antero Perez y sus sirvientes, á quienes se puso presos é incomunicados, y en fin á la formacion del presente juicio de comiso.

En todo lo practicado se nota desde luego, que ha habido graves infracciones, atentados injustificables, una lamentable ignorancia de nuestra legislacion fiscal, y cierta avaricia de lucro por parte de algunos empleados en el ramo de hacienda.

En el curso del juicio y con objeto de averiguar los hechos que fundan por una parte, la demanda y por otra las defensas de los responsables, se han presentado diversas cuestiones sumamente graves unas, y otras que no carecen de importancia. De todas ellas será necesario ocuparse en su debida oportunidad; pero el Procurador general cree, que no se debe descender á discusiones de detall, sino despues de fijar y esclarecer dos grandes principios, de los que uno se refiere á la libertad y garantías que en sus operaciones debe disfrutar el comercio, y el otro á la verdadera inteligencia de las distintas disposiciones vigentes que constituyen lo que podemos llamar nuestra legislacion fiscal.

Comenzando por esta última materia, debemos reconocer como base, en lo que respecta á los efectos extranjeros, la grande y fundamental distincion entre importacion internacion y circulacion interior. El arancel de aduanas marítimas y fronterizas fija los derechos que á su introduccion en nuestros puertos deben pagar esos efectos, y establece los requisitos y obligaciones á que los importadores deben sujetarse. El mismo arancel, y algunas otras disposiciones concordantes, han determinado el modo y requisitos con que deben internarse los efectos extranjeros, y el modo y términos en que debe justificarse la legalidad de esa internacion.

Conforme á los buenos principios económicos, desde el momento en que una aduana marítima ó fronteriza, con presencia de

los manifiestos de los buques y de las facturas que debe presentar el consignatario de la carga, examina esta y la declara conforme, tiene obligacion de entregarla al consignatario, para que disponga de ella como de efectos legalmente importados. Desde ese momento se debía considerar como nacionalizados á los efectos; porque han llenado los requisitos que la ley exige para que entren al comercio del país. Pero como la ley ha querido que los efectos extranjeros, ademas del derecho de importacion paguen otro que se llama de internacion, y este pago debe hacerse en los puertos, de aquí la necesidad de que al salir del puerto esos efectos lleven un justificante que acredite el pago de los derechos de internacion.

Como podría suceder que algunos efectos se internaran sin hacer ese pago, la ley, queriendo evitar este fraude, introdujo el sistema de guías y tornaguías. Las guías de internacion deben ser expedidas por la aduana del puerto: estas guías deben ser presentadas á la oficina de hacienda del punto de final destino, ó bien de aquel punto intermedio en que definitivamente queden los efectos; y esa oficina debe expedir la tornaguía, para que con ella se acredite que los efectos llegaron á su final destino, ó que quedaron en otro punto intermedio, el cual en este caso, es considerado como final destino. Así es como, con el sistema de guías y tornaguías, se ha cerrado la puerta á los abusos que pudieran cometerse en la internacion de efectos extranjeros.

Pero como podía cometerse otra clase de fraude, internando efectos que no habian sido legalmente importados, la ley ocurrió á esta grave dificultad, previniendo que en las guías de internacion se expresase de una manera clara y precisa la procedencia de los efectos. Así ha conseguido que no puedan hacerse internaciones, sin que conste clara y evidentemente la legal importacion.

Este procedimiento precautorio, ha venido á dar cierto enlace íntimo á la importacion con la internacion; y en virtud de ese enlace se puede y debe sostener, que la nacionalizacion de efectos extranjeros no queda legalmente consumada, sino cuando esos efectos llegan al punto de su final destino.

Las observaciones anteriores prueban con evidencia, que los juicios sobre importacion fraudulenta ó sobre internacion ilegal, tienen entre sí un íntimo enlace; y que al tratarse de la segunda, es lícito y podrá ser necesario en muchos casos ocuparse de la primera. Pero una vez llegados los efectos al punto de su final destino, la nacionalizacion está consumada y esos efectos entran al comercio interior, de la misma manera que los efectos nacionales. Entonces, la importacion y la internacion ya han desaparecido; y las operaciones que sobre esos efectos se practiquen no estan sujetas mas que á las reglas establecidas para el comercio interior. En nuestro sistema federal, en que los Estados son soberanos é independientes, tiene cada uno la facultad de legislar para el comercio interior; y solo en el que se hace de Estado á Estado, puede el poder federal fijar aquellas reglas que estime necesarias para impedir que se establezcan restricciones onerosas.

En este último caso se hallan los derechos de circulacion interior. Algunos Estados, en ejercicio de su soberanía, han suprimido las alcabalas, y como por ese motivo no hay en ellos empleado de hacienda que pudiera expedir las guías de circulacion, la autoridad federal cuidó de llenar ese vacío disponiendo que dichas guías se expidan por el respectivo jefe superior de hacienda. Igual inconveniente se pulsaba respecto de las tornaguías de internacion, y la misma disposicion federal previno que en los Estados que han suprimido las alcabalas, esas tornaguías se expidan por los mismos jefes de hacienda.

La circunstancia de reunir estos funcionarios esa doble facultad, produce la inevitable consecuencia de que, al expedir guía para circulacion interior, sepan con evidencia si los efectos de que se trata han sido bien y legalmente importados ó internados; ó en otros términos, si han satisfecho los derechos de importacion ó internacion.

Por tal motivo, las guías de circulacion son una prueba legal y perfecta de que los efectos fueron bien y legalmente importados ó internados.

Podrá suceder que un gefe de hacienda, abusando de su situacion, expida guías de circulacion interior para efectos cuya legal internacion no le consta, y es muy de temer que el presente caso sea de esa especie; pero cuando un gefe de hacienda comete semejante abuso, incurre sin duda en un delito grave, y merece un ejemplar castigo; mas esto no vicia la legalidad de las guías de circulacion. La razon es muy clara, y consiste en que si la ley ha querido que las guías expedidas por esos empleados sean documentos legales y eficaces, y á eso efecto les dió la facultad de expedirlas, el abuso cometido por el empleado, será motivo bastante para castigarle, pero nunca para quitar á los documentos ese valor eficaz que la ley ha querido darles.

Las anteriores observaciones son de una fuerza irresistible, y el supremo poder ejecutivo de la federacion debería tenerlas muy presentes siempre, pero con mas especialidad cuando se trata de nombrar empleados de hacienda. La moralidad de estos es la primera y mas indispensable cualidad que debe buscarse, porque cuando la ley les encomienda actos importantes y trascendentales, y cuando esos actos van á asegurar por una parte los intereses y derechos de particulares, y á garantizar por otra la fe pública de la Nacion, no debería ocuparse para tales cargos, sino á personas cuya rectitud y probidad estuviesen perfectamente conocidas.

El punto de que nos vamos ocupando, es decir, la expedición de guías para circulación interior de efectos extranjeros, es sin duda de los mas delicados, y que por lo mismo exige la mayor buena fé y probidad en el empleado que las expide.

Por las observaciones hechas antes, se comprende con toda claridad que, conforme á nuestras leyes vigentes, la circulación interior de efectos extranjeros, lejos de relacionarse con su importación ó internación, es, por el contrario, absolutamente independiente de ellas, y que por lo mismo, no puede darséles un enlace necesario, sin infringir esas mismas leyes. Y digo que esto se percibe con toda claridad, porque nuestras leyes, que cuidaron de una manera especial que para la internación de los efectos se justificase su procedencia, para la circulación interior establecieron la regla absolutamente contraria. Para la circulación interior, no se necesita mas que la guía del lugar de donde parten los efectos; y si estos fueron bien ó mal importados, bien ó mal internados, es cuestion absolutamente distinta, que para nada se relaciona con la Circulación interior. Para esta, basta que el empleado respectivo expida la guía; y en el mismo hecho de expedirla, dá por cierto que los efectos llegaron legalmente al lugar de donde parten para la circulación interior. Si contra la presunción legal, los efectos no habian sido legalmente introducidos al lugar en que se expide la guía de circulación, esto no vicia dicha guía, y solo produce responsabilidad contra el empleado que la expidió sin cerciorarse antes de la existencia legal allí de los repetidos efectos.

Los anteriores razonamientos se hacen mas perceptibles, considerando el negocio en su parte práctica, como voy á considerarlo, entrando así en la segunda de las cuestiones que he anunciado, y es la que se refiere á la libertad y garantías que debe disfrutar el comercio.

Por regla general, y segun los princi-

plos de una liberal y buena administración hacendaria, no deben imponerse al comercio mas trabas ni sujetársele á mas vejaciones que las estrictamente necesarias para asegurar el cobro de los derechos fiscales. El comerciante extranjero que trae efectos á la República, cumple los deberes que la ley le impone, haciendo el desembarque en los términos que previene el arancel de aduanas marítimas y fronterizas. El comerciante establecido en el puerto que quiere transportar esos efectos á un punto determinado del interior, cumple tambien sacando la guía, y entregando, dentro del plazo que se le fija, la tornaguía respectiva. El comerciante establecido en el interior del país que quiere transportar efectos de un punto á otro del interior, no tiene mas obligación que la de sacar guía de circulación, sin necesidad de justificar la procedencia de los efectos; y con el mismo hecho de obtener esa guía queda justificado que tales efectos existían allí, legalmente, supuesto que la guía se expide por el empleado respectivo que tiene obligación de conocer esa legal existencia. Si no fuera así, en cualquiera remision, aun la mas insignificante que se hiciera de un punto á otro del interior, habría necesidad de justificar la legal procedencia; es decir, la legal importación ó internación de los efectos. Y esto, á mas de ser contrario al precepto terminante de la ley, sería en extremo vejatorio y verdaderamente impracticable, porque no es posible que en todos y cada uno de los puntos del país y para todas y cada una de las pequeñas remisiones que se hacen á las ciudades, pueblos y ranchos, se fuese justificando la legal importación ó internación de los efectos extranjeros. Si tal cosa exigiera, el comercio interior sería imposible, porque imposible es que cuando los grandes cargamentos importados por los buques se reparten en pequeñas fracciones entre distintas poblaciones, para cada una de esas fracciones se justifique la legal importación ó internación de los efectos. Por esto se ha fijado como regla general é in-

variable, que para la circulacion interior no se necesita justificar la procedencia, y que para esa circulacion interior basta la guía legal expedida por el empleado del lugar de donde parten los efectos. Repito, que podrá suceder que ese empleado expida guía para efectos que no llegaron legalmente al lugar en que se suponen existentes; pero tambien repito, que esto no vicia la guía, y solo podrá ser motivo de responsabilidad para el empleado que la expidió.

Aplicando estos principios, que son los verdaderos de nuestra legislacion hacendaria, al caso que nos ocupa, tenemos justificado en autos:

Primero; que el gefe superior de hacienda del Estado de Coahuila, expidió guías legales para que de la ciudad del Saltillo á la de Zacatecas pudiesen transitar libremente 295 bultos de efectos extranjeros cuya identidad se hizo constar en las repetidas guías.

Segundo; que con el mismo hecho de expedirlas, dio por legalmente existentes en el Saltillo esos efectos y autorizó al conductor D. Antero Perez para conducirlos á la ciudad de Zacatecas.

Tercero; que Perez al conducirlos, los llevaba legalmente resguardados y los condujo por caminos carreteros, sin fraude ni ocultacion de ninguna especie. Y es de notar, que aunque los agentes del fisco han querido marcar un derrotero preciso para ir del Saltillo á Zacatecas, la verdad es que existen varios, y el seguido por Perez es uno de los mejores, así por su buen piso, como por estar provisto de agua, pasturas y provisiones que frecuentemente escasean por los otros.

Cuarto; que D. Antero Perez llegó con su cargamento á Zacatecas; y de la manera mas espontánea, sin coaccion ni apremio de ninguna especie, se presentó primero en las garitas de Guadalupe y Zacatecas, cuyos empleados certificaron su entrada, y se presentó luego en la aduana de Zacatecas con

toda su carga y las guías que la resguardaban. Todos estos hechos, que, repito, están bien justificados en el expediente, ponen en evidencia, que los 295 bultos de efectos extranjeros que han sido la materia de este juicio, fueron bien y legalmente transportados del Saltillo á Zacatecas, y bien y legalmente introducidos á esta última plaza.

El gefe del contra-resguardo de la frontera del norte y el gefe superior de hacienda del Estado de Zacatecas, han querido argüir de fraudulentas la conduccion ó introduccion, fundándose en que los efectos salieron de la villa de Mier sin la respectiva guía de internacion, y sin que la carga fuese presentada en su tránsito á la seccion correspondiente del contra-resguardo; pero aquí se vé con toda evidencia el error lamentable en que incurrén, queriendo exigir, para la circulacion interior, los requisitos que solo son exigibles para la internacion. Podrá ser muy bien que los efectos hayan salido de Mier sin los documentos correspondientes, y esto será un buen motivo para argüir de fraudulenta la internacion; pero desde el momento en que el gefe superior de hacienda del Estado de Coahuila expidió guías de circulacion para llevar los efectos del Saltillo á Zacatecas, ha dado por legal su existencia en el primer punto, lo cual basta para la legalidad del transporte en el interior; y si hay error ó fraude en la calificacion del empleado, este es el único responsable, y los efectos que transitaron con guía legal no han incurrido en pena alguna.

Los empleados del contra-resguardo estaban en su derecho para perseguir y aprehender la carga desde la aduana fronteriza de Mier hasta el punto fijado como final destino para su internacion; pudieron perseguirla aun mas allá, si continuaba sin documentos; pero cuando en una plaza del interior como es el Saltillo se expiden guías para la circulacion interior, ya no se trata de internacion, y por lo mismo, ya no son aplicables las leyes que á ella se refieren, porque

con el solo hecho de expedir las guías, los efectos han entrado legalmente á la circulacion interior, y no queda mas que la responsabilidad del empleado que expidió las guías de circulacion.

Es una cosa lamentable que efectos cuya legal internacion no esta comprobada, puedan entrar legalmente á la circulacion interior; pero esta anomalía procede, en primer lugar, de que la ley no exige que para la circulacion interior se justifique la procedencia por el remitente ó conductor.

La ley supone que esa procedencia es considerada por el empleado que expide la guía de circulacion: la ley descansa en la probidad y buena fé de ese empleado: este es quien, bajo su responsabilidad, declara la legal existencia de los efectos; y este es, por lo mismo, quien está obligado á responder de cualquier error ó fraude en que incurra al expedir la guía; pero una vez expedida esta, los efectos están bien y legalmente despachados, y pueden caminar sin obstáculo al amparo de la ley.

De todo lo espuesto se deduce que los 295 bultos de efectos extranjeros remitidos del Saltillo por el comerciante O'Sullivan á los comerciantes de Zacatecas, Ostermayer Ortiz y compañía, y conducidos por D. Antero Perez con guías expedidas por el jefe superior de Hacienda del Estado de Coahuila, han sido legalmente introducidos á la ciudad de Zacatecas. El caso es de circulacion interior, para la cual bastan las guías de circulacion expedidas, sin que el remitente ni el conductor estén obligados á justificar la procedencia de los efectos, pues este punto es de la responsabilidad exclusiva del empleado que expide la guía. Se deduce tambien que ha sido ilegal é injustificable la aplicacion que en el presente caso ha pretendido hacerse de leyes que se refieren á la internacion de efectos extranjeros, porque notoriamente el caso no es de internacion, sino de circulacion interior,

como ya queda abundantemente demostrado.

Resuelta así la cuestion fundamental, la solucion de las otras que son incidentales ó accesorias viene como un corolario preciso. El jefe de Hacienda del Estado de Zacatecas, no debió proceder al embargo de un cargamento espontaneamente introducido á aquella ciudad, ó introducido con guías legales que fueren oportunamente presentadas. El juez de Distrito de Zacatecas, no debió poner presos é incomunicados al conductor y sus sirvientes: en primer lugar, porque la introduccion de los efectos fué legal, y en segundo, porque aun suponiendo que se trataba de un caso de contrabando, el arancel de aduanas, y la pauta de comisos disponen que primero se proceda al juicio civil de comiso, y que solo en caso de condenacion, se abra proceso criminal contra los responsables. Así para la sustanciacion del juicio como para su resolucion en definitiva, el juez no ha debido atenerse á las leyes relativas á internacion, sino únicamente á las de circulacion interior, porque las primeras son inconducentes y absolutamente inaplicables cuando se ha aclarado con evidencia que el caso presente es de circulacion interior.

Fuera de estas cuestiones que tienen connexion íntima con el negocio, se han suscitado otras de que es preciso ocuparse, porque no carecen de gravedad é importancia. La primera se refiere á los gastos extraordinarios que el jefe superior de hacienda de Zacatecas asegura haber hecho con objeto de perseguir y asegurar la carga, y otros que despues se hicieron en Zacatecas con conocimiento del juez de Distrito. El tribunal de Circuito de Guadalajara ha hecho notar, y con razon, que esos gastos no están prevenidos por ley, ni han sido autorizados por el Ejecutivo de la Nacion, único que podría mandarlos hacer, con aplicacion á gastos comunes ó extraordinarios de hacienda.

Otra cuestion tambien muy grave se refiere á la parte de la sentencia de 1.^a instancia en que se manda expeler del pais como extranjeros perniciosos á D. Juan O'Sullivan y D. M. Mayer Levy. Aparte de que no está justificado que esos individuos hayan cometido un delito que merezca esa pena, el art. 33 de la Constitucion, solo al Ejecutivo de la Union concede la delicada y verdaderamente anómala facultad de expeler á los extranjeros perniciosos. Supuesta esa prevencion constitucional, los jueces podrán encausar á los extranjeros, podrán castigarlos con arreglo á las leyes del pais; pero nunca ejercer una facultad que es exclusiva del Ejecutivo de la Union, y que por su propia esencia pertenece al órden gubernativo.

La última cuestion de que debo ocuparme, se refiere á la responsabilidad en que pueda haber incurrido D. Eduardo Gallo, que como gefe superior de Hacienda del Estado de Coahuila, expidió las guias de circulacion que resguardaron la carga conducida é introducida á Zacatecas por D. Antero Perez. En estos autos obran datos muy atendibles para presumir que Gallo incurrió en los delitos de falsedad y su plantacion. La materia en sí es grave; y la circunstancia de tratarse de una cantidad considerable de efectos cuyo valor es tambien considerable, hace necesario que este empleado responda de su conducta en un juicio legal. Ciertamente es que por disposicion del juez de Distrito de Zacatecas, el de igual clase de Coahuila comenzó á formar un aparato de averiguacion, y concluyó declarando que no habia mérito para proceder contra Gallo: cierto es tambien que el Tribunal de Circuito de Monterey confirmó esta declaracion, calificándola de auto de sobreseimiento; pero no lo es menos que ese aparato de proceso fué remitido á esa sala, quien lo pasó al Procurador general, y este, en respuesta de 23 de Agosto de 1871, creyó conveniente manifestar, entre

otras cosas lo que sigue: "El Procurador general tiene necesidad de observar que este procedimiento ha sido extemporaneo y prematuro; porque la conducta del gefe de Hacienda de Coahuila, no puede ser bien y legalmente esclarecida, sino despues de la terminacion del juicio de comiso; porque al juez que conoce de este, corresponde calificar si las guias con que se dice amparada la carga, son ó no buenas y legales, y sin esta calificacion no puede estimarse en justicia la conducta del funcionario que las expidió. La pauta de comisos ha tenido presente esta dificultad, y por eso dispone que no se proceda al juicio criminal contra los autores ó cómplices de un contrabando, sino despues que se haya declarado el comiso. No podría ser de otra manera, supuesto que la responsabilidad personal no viene sino despues de la declaracion de haber sido infringida la ley fiscal. "Fundado en estas consideraciones, pidió, y la Sala se sirvió decretar, que se suspendiese la revision de ese proceso para cuando causara ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio de comiso.

Ahora es oportuno observar, que el auto del Juzgado de Distrito de Coahuila, que el Tribunal de Circuito de Monterey calificó de sobreseimiento, no lo es en realidad, ni puede tener mas efecto que el de una suspension. El juez de Coahuila no tenía, ni podía tener los datos necesarios, porque estos debian aparecer, como han aparecido, en el juicio de comiso; por consiguiente, el Juez de Coahuila no podía condenar ni absolver, sino únicamente diferir para cuando los repetidos datos le fueran conocidos. Ahora que se conocen, deben servir de base para el procedimiento contra D. Eduardo Gallo.

Por todas las consideraciones expresadas, el Procurador general concluye pidiendo: 1.^o que se confirme en todas sus partes la sentencia de vista pronunciada por el Tribunal de Circuito de Guadalupe-

ra en 22 de Enero del corriente año; 2º que mandándose traer á la vista la averiguacion comenzada á practicar por el juzgado de Distrito de Coahuila, se declare que ella no ha sufrido mas que una suspension, y se mande continuarla; á cuyo efecto se remitirán al juzgado de Coahuila todos los datos que obran contra D. Eduardo Gallo en el presente juicio de comiso. México, Marzo 7 de 1872.—*L. Guzman.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo primero de mil ochocientos setenta y dos.

Vistos los autos seguidos en el Juzgado de Distrito de Zacatecas y en el Tribunal de Circuito de Jalisco sobre comiso de doscientos noventa y cinco tercios de ropa consignada á los Sres. Ostermayer y Ortiz y Compañía y conducidos por D. Antero Perez: el incidente sobre responsabilidad del C. Eduardo Gallo, Gefe de Hacienda del Estado de Coahuila: las sentencias pronunciadas en 1ª y 2ª instancia: lo pedido y alegado ante esta 1ª Sala por los ciudadanos Procurador general de la Nacion en representacion del fisco, Lic. Isidro Montiel y Duarte como patrono de M. Mayer Levy, representante de Ostermayer y de Ortiz y Compañía, Lic. Luis Mendez patrono del C. Julio H. Gonzalez, Gefe Superior de Hacienda de Zacatecas, y Lic. Emilio Velazco patrono del C. Eduardo Gallo: visto lo demas que convino; y apareciendo de las constancias de autos:

Primero; que D. Antero Perez cargó en la Villa de Mier ciento cincuenta bultos de efectos extranjeros por cuenta de los Sres. Bustamante y Compañía para conducirlos al Saltillo á la consignacion de la casa O'Sullivan.

Segundo; que D. Antero Perez con-

dujo estos efectos sin las guias respectivas, sin presentarlos en la seccion correspondiente del contraresguardo de la Zona libre y sin internarlos hasta el punto de su final destino; pues solamente llegó á la fábrica de Arizpe en las cercanias del Saltillo.

Tercero; Que en dicha fábrica cargó ciento cuarenta y cinco tercios que trasportó de unos carretones que se encontraban en la misma fábrica, á su propio tren para conducir todo el cargamento á la ciudad de Zacatecas, á la consignacion de los Sres. Ostermayer y Ortiz y compañía: y

Cuarto: que D. Antero Perez presentó su carga en la aduana de Zacatecas amparada por guias de circulacion interior expedidas por el Gefe Superior de Hacienda del Estado de Coahuila.

Primero; que el cargamento de cientocincuenta bultos conducido de Mier á la fábrica de Arizpe, fué internado sin las formalidades prescritas en los artículos 39, 40 41 y 43 del reglamento del contra-resguardo de la Zona libre, de cuatro de Junio de mil ochocientos setenta; que no fué presentado á la seccion del contra-resguardo ni al Gefe Superior de Hacienda de Coahuila, como empleado federal del punto del final destino. Segundo; que respecto de los ciento cuarenta y cinco bultos tomados en la fábrica de Arizpe para conducir á Zacatecas, las circunstancias de autos no administran la plena prueba que se requiere en juicio para imponerse una pena, que en caso de duda debe fallarse en favor del comerciante, mayormente cuando ha obtenido, de un empleado de la federacion competentemente autorizado, guías de circulacion interior que solo se expiden cuando se han terminado las operaciones de importacion é internacion. Tercero; que en las introducciones de efectos extranjeros por la Zona libre, solo se considera la internacion de los mismos efectos, pues su sola importacion, mientras no salen de la Zona, no causa derecho alguno á favor del fisco, y

el de importacion que se paga á la internacion de los efectos solo es por los que se internan y no por todos los que se han importado; que por lo mismo, el contrabando que se comete en la introduccion por la Zona libre debe estimarse mas bien de internacion. Cuarto; que conforme á la letra y al espíritu del artículo 33 de la constitucion, no es del resorte de la autoridad judicial hacer la declaracion de que un extranjero es pernicioso; y Quinto; que respecto de la responsabilidad en que haya podido incurrir el C. Eduardo Gallo por la intervencion que tuvo en este negocio como Geefe Superior de Hacienda del Estado de Coahuila, habiéndose ordenado por el Ministerio de Hacienda al Juez de Distrito del mismo Estado que practicase una formal averiguacion respecto de estos hechos, lo que importaba ordenar el procedimiento en formal causa, que terminada la averiguacion fué absuelto el C. Gallo por el juez de Distrito cuya sentencia confirmó el Tribunal de Circuito de Monterey, causando ejecutoria la sentencia de vista, no solamente por la confirmacion de la de 1ª instancia sino por haber sido consentida y no apelada, y por lo mismo abrir un nuevo juicio sobre asunto ya juzgado, sería faltar al artículo 24 de la Constitucion. Se decreta:

Primero; Que están en el caso de contrabando los ciento cincuenta bultos de efectos extranjeros que D. Antero Perez condujo de la Villa de Mier á la fábrica de Arizpe en las cercanías del Saltillo á la consignacion de la casa O'Sullivan.

Segundo; Que no están en el caso de contrabando los ciento cuarenta y cinco tercios conducidos de la fábrica de Arizpe á la ciudad de Zacatecas; declarándose legalmente amparados por las guías de circulacion interior expedidas en el Saltillo.

Tercero; Que los ciento cincuenta bultos declarados en el caso de contrabando, están comprendidos en la fraccion 4ª del artículo 23 de la ordenanza general de adua-

nas marítimas y fronterizas y sujetos á la pena impuesta en la fraccion 4ª del artículo 26 de la misma ordenanza, que es la de pagar derechos dobles de importacion y triples de internacion, no quedando sujetos á pena, segun las fracciones citadas los medios de transporte.

Cuarto; Que se confirme la sentencia de vista en la parte que revocando la de primera instancia dispone, que la declaracion hecha por el juzgado de Distrito de Zacatecas contra los Sres. O'Sullivan y M. Mayer Levy, como extranjeros perniciosos, no es de las atribuciones del poder judicial, ni puede perjudicar la reputacion de aquellos comerciantes.

Quinto; Que se dá por revisada la sentencia pronunciada por el Tribunal de Circuito de Monterey en la causa instruida contra el C. Eduardo Gallo, Geefe de Hacienda del Estado de Coahuila.

Sesto; Que importando la condenacion de costas una pena de litigante temerario y habiendo obtenido en parte los Sres. Ostermayer y Ortiz y compañía, no se hace condenacion de costas en el presente caso.

Sétimo; Que con arreglo á la ley de 14 de Febrero de mil ochocientos cincuenta y seis, se confirma la sentencia de 2ª instancia en la parte que aplica multa, segun la misma ley, á todos los que han presentado documentos que no están extendidos en el sello correspondiente en este juicio.

Octavo; Remítase testimonio de este auto, con copia de la cuenta de gastos extraordinarios hechos en la prosecucion de este juicio al Ministerio de Hacienda, para que resuelva lo conveniente.

Noveno; Devuélvanse las actuaciones de 1ª y de 2ª instancia al Tribunal de Circuito de Jalisco con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto de los puntos 2º 4º 5º 7º 8º y 9º y por mayoría respecto del 1º 3º y 6º

los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*P. Ordaz.*—*J. García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Junio dos de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado 1º de Distrito de México contra D. José Enciso y otros empleados de la renta del papel sellado, y contra D. Abraham Arronis y D. Agustín Madrid por desfalco de fondos pertenecientes á dicha renta.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor dice: que ha examinado con la mayor atencion y detenimiento que requieren estas actuaciones, en las cuales se encuentran mezcladas cuestiones de diverso género, á consecuencia del curso que fué tomando la averiguacion iniciada por la queja que elevó el Banco de Londres México y Sud América al Ministerio de Hacienda en 24 de Agosto del año próximo pasado, para esclarecer los hechos á que hace referencia esa queja, porque el administrador de la renta del papel sellado, D. José Enciso, le cobró con la intimacion del apremio de la facultad económico coactiva, la cantidad de sesenta y cinco mil y pico de pesos que el Banco debía á la renta por las operaciones de cambio, situacion de los productos de las administraciones principales de algunos Estados verificadas con los corresponsales de ese establecimiento, y los administrados en virtud de las órdenes libradas á estos por el Sr. En-

ciso, y la conformidad del Banco para que sus corresponsales recibieran esas cantidades que la Administracion general recibiría en esta capital del Banco. Como este contrato se verificó por la mediacion de D. Abraham Arronis cuando comenzaron esas operaciones de cambio de situacion monetaria, y continuaron estando ya el mismo Arronis establecido en una casa camisionista con el nombre de Agustín Madrid y Ca, con cuya casa tenian cuentas la administracion y el Banco, de esto ha resultado la confusion que segun el ocuso del Banco aparecía entre esas tres personalidades; pero que las diligencias practicadas han llegado á desvanecer, poniendo en claro tres puntos diversos y que deben ser tratados por su naturaleza separadamente.

De esas operaciones de cambio, resulta: primero; responsabilidad pecuniaria del Banco, el administrador de la renta de papel sellado, D. José Enciso, y Madrid y Arronis para con el fisco; segundo, responsabilidad oficial de los empleados principales de la administracion general del papel sellado, D. José Enciso, D. Leandro Cuevas, D. Antonio Merino y D. Juan José Ochoa; y tercero, responsabilidad personal de D. Agustín Madrid y D. Abraham Arronis.

En comprobacion de lo primero, existen las confesiones plenas, por parte de D. José Enciso y Guillermo Newbold, director del Banco, de que entre ambos, como gefes de la oficina que estuvo á cargo del primero y el establecimiento al del segundo, se celebró un contrato en virtud del cual las administraciones principales de los Estados entregaban á los corresponsales del Banco las cantidades en numerario de sus expendios de papel sellado, para que ésto satisficiera las cantidades recibidas por sus corresponsales á la administracion general, segun lo demuestran las órdenes del administrador y los recibos de los corresponsales que han sido reconocidos por ambos,